

12
2ej



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón

LA INFLUENCIA EN AMERICA LATINA DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD NACIONAL NORTEAMERICANA (1959-1985).

El fin de un período de seguridad continental.

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
P R E S E N T A
VICTOR HUGO MORALES MELENDEZ

Asesor: LIC. ALEJANDRO TREVIÑO PARKER

TESIS CON FALLA DE ORIGEN



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

PREFACIO	1
INTRODUCCION	4
I.- Estados Unidos y América Latina en el mundo de la posguerra	9
I.1. La seguridad nacional de Estados Unidos en el marco de la bipolaridad mundial.	10
I.1.1. La organización de la defensa de Estados Unidos.	
I.1.2. Evolución del enfrentamiento soviético-norteamericano.	
I.2 América Latina en la estrategia militar global de Estados Unidos durante la Guerra Fría.	25
I.3. Expansión de la economía norteamérica y modelos de desarrollo en América Latina.	31
II. La Revolución Cubana: el enemigo externo se interioriza.	37
II.1. La expansión de la influencia revolucionaria en América Latina.	42
II.2. La nueva situación de América Latina en la estrategia de la seguridad norteamericana.	51
II.3. El desafío latinoamericano frente a la seguridad norteamericana.	56
III. Diseño y aplicación de las políticas de seguridad nacional norteamericana en América Latina, posteriores a la Revolución Cubana.	62
III.1. La ayuda militar norteamericana para América Latina.	63
III.1.1. Centros de adiestramiento norteamericanos para militares latinoamericanos.	
III.1.2. Adoctrinamiento y entrenamiento norteamericano a militares latinoamericanos.	

III.2	Cooperación técnico-económica, en el marco del Programa de Acción Cívica y de la Alianza para el Progreso.	71
III.3	Repercusiones de las políticas de seguridad nacional norteamericanas en América Latina, 1964-1979.	74
III.3.1.	Sudamérica (Golpes de Estado y regímenes de Seguridad Nacional).	
III.3.2.	La Cuenca del Caribe (Regímenes anti-comunistas y democracias restringidas).	
III.4	La seguridad nacional como doctrina para un nuevo proyecto político-económico en América Latina.	97
III.4.1.	Terrorismo de Estado y Seguridad Nacional.	
III.4.2.	Populismo militar y Seguridad Nacional.	
III.4.3.	Un enfoque utilitarista de la Seguridad Nacional.	
IV	Estados Unidos y América Latina en la década de los ochenta.	114
IV.1.	América Latina y la visión neoconservadora de la seguridad nacional norteamericana.	115
IV.1.1.	La revolución Nicaragüense: el retorno de la preocupación norteamericana por América Latina.	
IV.1.2.	Los nuevos métodos de control.	
IV.1.2.1.	Los conflictos de baja intensidad.	
IV.1.2.2.	Deuda externa y seguridad nacional en América Latina.	
IV.2.	¿Hacia un cambio de la doctrina de seguridad nacional y la consolidación de la democracia en América Latina?.	127
IV.2.1.	Seguridad Nacional y democracia en la Cuenca del Caribe.	
IV.2.2.	Argentina, Uruguay y Brasil: la democracia negociada.	
	CONCLUSIONES	144
	EPILOGO	157
	BIBLIOGRAFIA	161

P R E F A C I O

A lo largo de la década de los años setenta, fueron publicados numerosos estudios sobre el fenómeno político que dominaba la vida social de América del Sur y hacía sentir su influencia en el resto de América Latina: la proliferación de regímenes militares con una ideología de Seguridad Nacional, como base de legitimidad.

El fenómeno, sin duda ampliamente estudiado, no ha sido hasta ahora abordado de tal forma que, rompiendo con la parcialidad de los enfoques con los que se le ha tratado, se tenga una comprensión global capaz de aprehender la totalidad del mismo. Es decir, llegar a una auténtica concreción del fenómeno en el pensamiento.

Los estudios realizados desde los años sesenta y principios de los setenta tienen -unos- el mérito de la información y la denuncia y -otros- la falla de una apresurada justificación. Pero en ambos casos ni se entiende ni se logra comprender del todo lo que estaba sucediendo. En los estudios posteriores se intenta teorizar para poder captar mejor el fenómeno, sin embargo, las conclusiones a las que se llega no corresponden a la evolución que el fenómeno tendría en los años ochenta. Los estudios realizados en esta última década parecen olvidar el origen de los regímenes de seguridad nacional, es tal el entusiasmo por la democracia que sólo se estudia el tránsito a la civilidad de los gobiernos. El pasado parece no importar.

Existen autores que de manera equivocada dividen a la historia de América Latina en centroamericana y sudamericana, desvinculándolas de manera radical. La militarización de los gobiernos de América del Sur en los años sesenta y setenta, hizo aparecer una tendencia de estudio de esa parte del continente como algo diferente al resto y, por ello, ajena a los sucesos centroamericanos y del Caribe. Asimismo, el estallido del conflicto centroamericano hizo que se aislara, en los análisis, a América Central de lo que pudiera estar sucediendo en el resto de América Latina. Esta reforzada tendencia a separar en dos el proceso histórico latinoamericano ha contribuido a diluir la comprensión del mismo.

Por otra parte, el intento de hacer dos historiografías de América Latina, oculta una realidad que le ha sido constante durante toda su vida independiente: Estados Unidos ha justificado la defensa de su seguridad como la defensa de una seguridad hemisférica (desde la Doctrina Monroe, hasta la llamada Doctrina Reagan). Para el período de estudio, la influencia de las políticas de seguridad nacional norteamericanas se hizo sentir en América Latina como un todo, aunque se manifestó de manera diferente: golpes de estado y regímenes de seguridad nacional en

América del Sur; invasiones y regímenes aliados a los intereses norteamericanos en América Central y el Caribe. Sin olvidar las excepciones en uno y otro lado.

México, sin duda, es un caso diferente. A pesar de que las fuerzas armadas del país no estuvieron exentas de la influencia de las concepciones norteamericanas de seguridad nacional, ésta nunca se hizo presente de manera sistemática e institucional en la elaboración de políticas por parte del gobierno de México. Por el contrario, para el período que abarca este trabajo, la concepción de seguridad nacional fue esencialmente civilista y se basaba en la idea de que la estabilidad del país dependía finalmente de los mecanismos sociales surgidos de la Revolución Mexicana, de distribución de los recursos económicos y del desarrollo equilibrado que hicieran posible el fortalecimiento de las instituciones políticas y la continuidad de la normatividad constitucional. Más aún, Estados Unidos nunca estuvo dispuesto a tener junto a él a un régimen basado en algo tan precario como la dictadura militar. Finalmente, otra de las razones que hacen diferente a México es el hecho de ser el único país de América Latina que no forma parte del Área de operaciones del Comando Sur norteamericano, pieza clave en la aplicación de las políticas de seguridad nacional norteamericana para América Latina. Razones, todas ellas, por las cuales se excluye de este estudio.

Fue con el triunfo de la Revolución Cubana y la posterior instauración del socialismo en Cuba, que se inaugura un nuevo período en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, caracterizado por un predominio de las concepciones de la seguridad nacional. Es este, pues, el acontecimiento que marca el inicio de un período con particularidades y contradicciones esencialmente diferentes a las que habían tenido dichas relaciones. La Revolución Cubana, como punto de partida, es indispensable para comprender cabalmente el problema que se aborda en el trabajo.

El interés del mismo, se basa en el objetivo de llegar a identificar el origen, los fundamentos y las prácticas de las políticas de seguridad nacional norteamericana hacia América Latina que han condicionado la participación militar -durante las últimas tres décadas- en los gobiernos latinoamericanos; así como las condiciones internas de éstos últimos, que hicieron posible dicha participación.

Así pues, la etapa expositiva de la investigación se inicia (previa presentación de antecedentes fundamentales) con el evento histórico que contiene en germen las propiedades y características que se manifestarán en el período de estudio. Para convertir a un hecho en un acontecimiento que constituirá el punto de partida y situará al fenómeno en un período histórico determinado.

La exposición avanza mediante una periodización marcada por

los eventos históricos que implican cambios cualitativos en las interrelaciones de las fuerzas en pugna que implican cambios cualitativos en las interrelaciones de las fuerzas en pugna y de direcciones en el proceso histórico del propio fenómeno. De tal suerte que estos hechos empíricos se convierten en hitos del propio proceso explicativo. En la parte última de la exposición se arriba a un plano teórico general, mediante el cual se clarifica al fenómeno en su conjunto y se esclarecen las causas y efectos del mismo, como consecuencia de los argumentos expresados a lo largo del trabajo.

Finalmente, pero no por ello menos importante, deseo hacer patente mi más sincero reconocimiento al apoyo que me brindó el Lic. Alejandro Treviño Parler, asesor de esta tesis, y mi agradecimiento profundo por su apreciable ayuda para hacerla posible.

México, D.F., diciembre de 1988.

INTRODUCCION

El Estado es una forma supraestructural desarrollada de la sociedad y de socialización del proceso de producción, y al mismo tiempo, es el medio idóneo de dominación y hegemonía. Empero, esto no debe interpretarse en el sentido de concebir al Estado como una simple máquina represiva o como el comité administrador de los intereses exclusivos de la clase dominante. El Estado contemporáneo no es el simple aparato de dominación-represión, manipulable a voluntad por la clase dominante.

En el Estado se mezclan dos elementos que por momentos parecen contradictorios: dictadura y hegemonía, dominación y dirección. Hegemonía significa la formación de una voluntad colectiva nacional que se hace efectiva a través de las alianzas de clase (entre la clase dirigente y el conjunto de las clases aliadas), de ahí la capacidad para dirigir y dominar. Por otro lado, dictadura hace referencia a las relaciones de enfrentamiento entre esas clases.

Por tal razón, no es suficiente apelar al argumento de la violencia de la clase dirigente - a través del aparato represivo-militar- para entender el por qué una determinada clase ejerce el dominio. Este se funda, por regla general, en el consenso, es decir, la adhesión de los gobernados al modo de vida dominante. La represión, el uso de la fuerza, es un recurso reservado para los momentos excepcionales de crisis.

La clase dirigente debe, a un tiempo, dirigir y dominar, así como obtener para la realización de sus proyectos el apoyo suficiente del pueblo (alianza de las clases dominadas, lo otro del Estado), que le permita construir una base de poder propio. Es la ideología lo que facilita a la clase dominante unir en torno suyo a un bloque de fuerzas sociales diferentes. El bloque histórico es el conjunto de la estructura y la supraestructura, consolidado por la ideología. Es un conjunto de fuerzas contradictorias cuyos antagonismos son unidos por la ideología (dirección), como por la dominación y la política (dirección + dominación) (1).

El bloque histórico (no debe confundirse con el bloque en el poder: alianza específica de las clases y fracciones de clase dominantes) se constituye, pues, cuando las diferentes clases se integran en la sumisión consensual de unas a otras con lo que se conserva, de manera estable, el modo de vida existente.

Ha quedado establecido que el Estado no puede ser siempre un mero instrumento de coerción de una clase, puesto que si así

(1) Cfr. Luciano Gruppi, "El concepto de hegemonía en Antonio Gramsci" en E. Hobsbawm *et al.*, Revolución y Democracia en Gramsci, Pa. Ed., Barcelona, Fontamara, 1981 (Ensayo contemporáneo s/n), p. 45.

fuera se encontraría en un periodo de crisis de hegemonía en la cual el dominio se mantiene por la fuerza, no por el consenso. En efecto, "... la crisis de hegemonía de la clase dirigente... ocurre ya sea porque dicha clase fracasó en alguna gran empresa política para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (la guerra, por ejemplo) o bien porque vastas masas pasaron de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantearon reivindicaciones..." (2)

La hegemonía se mantiene -en el interior de un bloque histórico- por el consenso y el apoyo que la clase dirigente encuentra en la sociedad civil. Sin embargo, en los periodos de crisis se pierde el control de la sociedad civil y la clase dirigente se apoya en la sociedad política para intentar mantener su dominio. De esta manera, entre más profunda sea la crisis en una formación social, más evidente y sistemático es el uso de la fuerza.

Las fuerzas armadas expresan la relación del Estado con las estructuras económicas y con las clases sociales. Las fuerzas armadas como una categoría social (*) tienen una actuación esencialmente política, referida tanto al conjunto de relaciones de dominación política, como a la apropiación económica propia de una formación social clasista (3).

Es indudable que las fuerzas armadas constituyen un factor real de poder; pero, éstas no generan su propio poder, sino que se deriva de su relación con las clases sociales. El poder que las constituye no lo desarrollan ni por sí, ni para sí. Por el contrario, como aparato coercitivo-represivo, como instrumento que son, responden a los intereses dominantes en el Estado, aunque se mantengan por lapsos prolongados como las detentadoras del gobierno y del poder en aquél.

Reconocidos el carácter contradictorio de la sociedad clasista, las luchas sociales que se entablan en su interior y las rupturas estructurales que afectan la integridad del bloque histórico durante la crisis de hegemonía, las fuerzas armadas -convertidas en fuerza social- pueden llegar a asumir el control político-administrativo del Estado, mediante un Golpe de Estado. El cual sirve, generalmente, para frenar o revertir el curso de la crisis de hegemonía.

-
- (2) Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. México, Juan Pablos Ed., 1975. p. 55.
- (*) Las fuerzas armadas tienden a servir intereses que no siempre corresponden al origen social de sus integrantes ya que su función política y el papel que desempeñan en las relaciones de clase, están determinadas por su pertenencia al Estado, como uno de sus aparatos de dominio.
- (3) V. passim. Nicos Foulantzas. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. 22a. ed., México, Siglo XXI, 1985. pp. 290-294.

De esta manera, las fuerzas armadas tienden a preservar el sistema por medio del golpe de Estado -y sin dejar de ser el aparato coercitivo del mismo- permiten un verdadero reordenamiento del bloque en el poder. Es decir, la adaptación de las clases y fracciones de clase que lo integran a la situación de crisis de la formación social, producto de la movilidad o alteración del equilibrio de poder en el bloque histórico. De tal suerte que la crisis de hegemonía, operada al interior de la formación social, facilita a las fuerzas armadas contar con la autonomía relativa del Estado para realizar el proyecto social a ejecutarse, que no es otro sino la transferencia del poder (económico, que no necesariamente la toma del poder gubernamental) a la nueva fracción o clase hegemónica.

La existencia de una formación social, organizada en Estado, no puede entenderse sin su relación con otras formaciones sociales. Relaciones que implican -por constituirse entre Estados- relaciones de poder.

Las relaciones que se caracterizan por una asimetría de poder entre las formaciones que las entablan, deben enmarcarse en una teoría general del desarrollo del capitalismo mundial en su fase histórica de transnacionalización de la economía y profundos cambios en la división internacional del trabajo.

Existe una delimitación fundamental en las relaciones que las formaciones sociales entablan en la fase imperialista: por un lado los Estados con vocación dominante y, por otro, las formaciones sociales dominadas y dependientes. Una formación dominada y dependiente se presenta cuando "la articulación de su propia estructura económica, política e ideológica, expresa unas relaciones constitutivas y asimétricas con una o varias formaciones sociales que ocupen, en relación con la primera, una situación de poder" (4).

Es decir, la influencia de un Estado imperialista en las relaciones de producción de las formaciones dominadas se extiende hacia los aparatos de Estado y las formas ideológicas de estas últimas, determinándolos de manera decisiva. De esta manera, las formaciones sociales sufren la imposición de nuevas formas de dominación y control.

La etapa actual del capitalismo no tiene exclusivamente una dimensión económica, sino que se presenta como fuerza hegemónica a través de un componente ideológico que tiende a socializar la conciencia de los sujetos de las formaciones dominadas. Estos reciben simultáneamente la influencia de las clases hegemónicas locales, como la del transnacionalismo cultural. Es decir, la obtención del consenso se adquiere y refuerza con la colaboración de los valores ideológicos transnacionales que, por otro lado,

(4) Idem. Las clases sociales en el capitalismo actual. 8a. ed. México. Siglo XXI, 1985. p. 40.

fortalecen la dependencia"... por la propensión de los centros hegemónicos del capitalismo dependiente a internalizar y transmitir como propios aquellos valores y, sobre todo, a expresar y priorizar los valores y expectativas propios en función de su necesaria inserción dentro del sistema global" (5).

La unidad y cohesión de las formaciones sociales se mantienen, en buena medida, gracias a la acción de los aparatos de Estado, ya que estos encarnan -como prácticas materiales- las relaciones políticas y las relaciones ideológicas de las formaciones sociales.

La división tradicional de los aparatos de Estado en represivos e ideológicos, tiende a ser cada día más forzada. Los unos refuerzan y alteran a los otros y no pueden existir aisladamente. Ambos se determinan mutuamente. Así, el ejército no sólo puede reforzar y ampliar el sustento ideológico de su papel como aparato represivo en una sociedad clasista, sino que incluso las fuentes de los aparatos ideológicos llegan no sólo a justificar, sino a ampliar y fortalecer la acción de los aparatos represivos. E incluso a buscar -en ocasiones con éxito- el consenso.

Una de las variables ideológicas que presentan las relaciones de poder entabladas entre formaciones sociales asimétricas, se caracteriza por un cambio en la concepción de la defensa territorial, por la seguridad nacional. Ya no es la defensa de las fronteras geográfico-nacionales el objetivo primario de las fuerzas armadas, sino la defensa de las fronteras ideológicas.

La superación de la concepción tradicional de Seguridad Nacional consiste en la ampliación y traslado al campo de las relaciones sociales y políticas el problema de la integridad del Estado-nacional. De lo que se trata, con la concepción de seguridad nacional matizada de ideología, es de luchar "contra todo aquello que contribuya o pueda contribuir al debilitamiento de la Nación" (6), por lo que las fuerzas armadas deben aniquilar a quien eso pretende. La toma del gobierno estatal se hace imprescindible. El problema no será, desde entonces, el del Terremidor Napoleónico -la conquista del poder por las fuerzas armadas- sino el de la disolución orgánica de la sociedad civil en nombre del Estado autoritario.

Con esa falsa conciencia de la seguridad nacional, el

(5) Jorge Tapia Valdés. El Terrorismo de Estado. La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur. México, Nueva Sociedad-Imagen, México, 1980, p. 280.

(6) Vicente Barreto. "La presencia militarista" en Virgilio Beltrán et al. El papel político y social de las fuerzas armadas en América Latina. Caracas, Monte Avila, 1970 (Prisma s/n). p. 196.

ejército aparece como un aparato aparentemente neutral -y con ello se ignora la lucha de clases que se agudiza en la crisis orgánica- ya que el "interés nacional" prima sobre el "interés de clase". Sin embargo, ese interés nacional favorece la recomposición del bloque en el poder.

Superada la crisis de hegemonía, la democracia viene a ser -en una sociedad clasista- una forma de lograr el consenso en favor del nuevo bloque en el poder, para que de esa manera se consolide el bloque histórico. Así pues, la democracia se constituye en el espacio político, jurídico e ideológico en el cual se debate la posibilidad de transformación de la legalidad por legitimidad.

CAPITULO I

ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA

La expansión territorial que los Estados Unidos emprendieron a raíz de su independencia, consolidó un Estado que con el transcurso de los años se convertiría en la nación más poderosa del mundo.

Con la formulación de la Doctrina Monroe, el 2 de diciembre de 1823, se diseña la primera política hemisférica mediante la cual todo el continente americano pasa a formar parte de la seguridad de Estados Unidos (+). Poco después con la configuración del Destino Manifiesto americano, se establecen las bases del trato que en adelante tendría con el resto del continente. A partir de su proclamación, se consolida la idea de una expansión norteamericana hasta alcanzar el Pacífico y el deseo permanente de servirse del hemisferio occidental para la consecución y salvaguardia de sus intereses nacionales (entre ellos, el de su propia seguridad).

La evolución histórica del país consolidó la idea del "Destino Manifiesto" como parte integrante del proyecto nacional norteamericano, insoslayable de la vida futura del país.

No debe extrañar, por ello, la implementación de políticas de parte de Estados Unidos, encaminadas a preservar su seguridad cuando la siente amenazada en América Latina. La continuidad de dicha actitud está por encima de los programas partidistas de la administración en turno, pues al estar inserta dentro del propio proyecto nacional norteamericano, mantiene la continuidad y vigencia propias de éste.

Existe, eso sí, una aparente despreocupación norteamericana hacia América Latina en tiempos de calma. No existen programas ni proyectos definidos para preservar su seguridad en todo el hemisferio. Es en los periodos de crisis revolucionaria en la región, cuando la respuesta norteamericana se hace evidente y manifiesto.

El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo periodo

(+) En su Mensaje al Congreso, el Presidente Monroe declaró que su país está "obligado a considerar todo intento de parte de las potencias europeas para extender su sistema a cualquier nación de este hemisferio, como peligroso para nuestra paz y seguridad". Véase Ismael Moreno, Orígenes y evolución del sistema interamericano, pp. 55 et seq.

histórico en las relaciones internacionales. Para Estados Unidos representó, más que para muchas otras naciones, un cambio radical en su contacto con el exterior: se consolida como la potencia económica con un predominio mundial indiscutible y comparte solo con otro Estado una posición cúspide, por su poder político y militar.

La creación de zonas de influencia en la posguerra postergó, nuevamente, a América Latina al "cuidado" norteamericano. Fues, mientras los países latinoamericanos estuvieran subordinados y responderían a los intereses generales de Estados Unidos, la seguridad de éste se garantizaba, en parte, con la de aquéllos.

Este, desde luego, acarreaba para América Latina una situación política difícil e insostenible, pues su seguridad se ponía en función de la norteamericana, de tal suerte que debería concebirla conforme a lo que constituyera la seguridad de Estados Unidos. Y así fue. Los gobiernos norteamericanos se preocuparon sólo por establecer los mecanismos básicos que conformaron la red continental de seguridad, frente a su amenaza global en la posguerra: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Sin embargo, esto último se presenta como algo inmediato y mistificado. Si partimos de la esencia del proyecto nacional norteamericano, fundado en la preservación, vigencia y expansión del sistema capitalista, es -en última instancia- el comunismo el enemigo real de Estados Unidos. Pero no de América Latina.

1.1. LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS EN EL MARCO DE LA BIPOLARIDAD MUNDIAL.

La cosmovisión norteamericana de la seguridad nacional, parte de la base de que todo Estado posee un potencial de crecimiento y desarrollo que entra en contradicción inevitablemente con las potencialidades de los demás Estados. Estos poseen también una visión de la vida y del destino del hombre que es preciso defender e incluso imponer a las otras naciones que tengan visiones diferentes y, por ello, equivocadas. La nación en su conjunto debe perseguir, por todos los medios disponibles los objetivos del Estado, aún cuando en su consecución encuentre amenazas internas y externas que la obstaculicen. Empero, en la búsqueda para alcanzar, mantener y consolidar los intereses nacionales cada Estado despliega todo su poder nacional -lo que incluye las fuerzas económicas, ideológicas, políticas y, por supuesto, las militares- con el fin de neutralizar y si es posible, aniquilar a todo aquello que se oponga a los intereses nacionales. Estas ideas son el basamento sobre el cual han descansado las políticas de seguridad nacional norteamericanas.

Cuál es el proyecto nacional de Estados Unidos?, cuáles

son los intereses nacionales que históricamente ha defendido? y cuáles son los intereses por los que ha luchado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial?. Sin una respuesta clara, difícil será comprender la problemática que sienta las bases del fenómeno en estudio.

El proyecto nacional norteamericano, entendido en su más amplia acepción, se funda en la preservación, vigencia y expansión del modo de producción capitalista. Es decir, en el continuo fortalecimiento de la nación norteamericana con el fin de expandir sus valores culturales, su sistema político y sus tipos de relaciones económicas. En pocas palabras, su estilo de vida, en un afán por llegar a ser los primeros (*).

Cuando Charles Wilson -que llegara a ser presidente de la General Motors y Secretario de Defensa durante la Administración Eisenhower- dijo "lo que es bueno para el país es bueno para la General Motors y viceversa", definió como pocos lo han hecho a los intereses más generales de la nación norteamericana. Pues como ha sido evidente a lo largo de su historia, siempre ha existido una imbricación de los intereses públicos con los intereses privados. La creación de un clima idóneo para los negocios, tanto en lo interno como en lo externo, constituye la piedra angular de los intereses nacionales norteamericanos. El expansionismo del Destino Manifiesto primero, y la consolidación del país sobre el que giraría la economía mundial después, fueron los procesos decisivos para que Estados Unidos alcanzara sus principales objetivos nacionales: a) adueñarse de una porción de territorio onde consolidar un Estado-nacional fuerte y poderoso, b) crear una conciencia e identidad nacionales y c) poseer un entorno económicamente subordinado, para asegurar su bienestar material.

Esto aclara (no justifica) el por qué Estados Unidos ha identificado a su interés nacional con el statu quo internacional de la posguerra y, en consecuencia, a su seguridad nacional -despojada de su metáfora geopolítica y de su glosa ideológica- como una forma de garantizar que el estilo de vida norteamericano continúe imperturbado por sus enemigos (1).

De esta manera, la seguridad nacional norteamericana deja de ser un problema estrictamente militar, para adquirir una dimensión global, tanto por su extensión geográfica como por los elementos que involucra, al mismo tiempo que retoma la idea de un "destino manifiesto" norteamericano. Así pues, para los norteamericanos su prosperidad, su seguridad y sus alianzas se encuentran amenazadas en diversas partes del mundo y siendo Estados Unidos la "nación libre" más poderosa, no le resta sino

(*) To be the first, slogan profundamente arraigado en el sentir nacional norteamericano, relacionado con una mentalidad de país vencedor.

(1) Cfr. Richard Barnett. La economía de la muerte, p. 101.

luchar por la preservación de sus valores, sus principios y sus esperanzas para hacer un mundo más adecuado a sus intereses (2).

Sin embargo, no sigue un solo camino para satisfacer las ansias de su seguridad absoluta. Por el contrario, como lo puntualizó el presidente Eisenhower, "nuestra seguridad es el producto total de nuestras fuerzas económicas, intelectuales, morales y militares" (3).

Un nuevo orden mundial se estableció al finalizar la Segunda Guerra Mundial. De las ruinas de la devastada Europa emergió una nueva distribución de poder, que involucraba sólo a dos países: Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos se identificaron inmediatamente como el principal obstáculo al que habría que enfrentarse para la consecución de sus objetivos nacionales, y por ello, se convirtieron en la principal amenaza a su seguridad.

Con proyectos antagónicos, con cosmovisiones sobre el destino del hombre opuestas y, sobre todo, con sistemas político-económicos adversos, la Unión Soviética y Estados Unidos se convirtieron mutuamente en la amenaza más hostil para sus intereses vitales, se percibieron como la fuente principal del peligro para la paz mundial y para su propia seguridad nacional.

La confrontación soviético-norteamericana es más que un conflicto entre dos naciones, es la lucha entre dos sistemas que intentan imponer sus valores, proyectos y modos de vida a otros Estados, para constituirse un entorno que sea favorable a la realización de sus respectivos proyectos nacionales. Esta confrontación involucra -por primera vez en la historia- a dos naciones que luchan por un predominio global (4).

La seguridad nacional de Estados Unidos, en el marco de la bipolaridad mundial, tiene como principales amenazas -conforme a la visión norteamericana- al expansionismo soviético en particular, y a la difusión, por parte de la Unión Soviética, del marxismo en el "mundo libre", en general. Puesto que el crecimiento del poder militar y de la influencia política de la Unión Soviética han representado el principal obstáculo para el logro de los objetivos nacionales norteamericanos (5).

Para los norteamericanos, la Unión Soviética se había convertido en un imperio en continua expansión, que intentaba

-
- (2) Cfr. George Shultz. "Power and Diplomacy in the 1980s", en Varios autores Seguridad en el Hemisferio Occidental, p.717.
 - (3) Citado por Richard Barnett, op. cit., p. 13.
 - (4) Cfr. Zbigniew Brzezinski. "The Imperial Coallision" from Game Plan, en Varios autores. La seguridad en el hemisferio occidental pp. 8-13.
 - (5) Cfr. Robert L. Pfaltzgraff. "The American-soviet relationship in global perspective" en American defense policy, p. 5.

influir y apoderarse del mayor número de espacios geográficos. Una de las teorías sobre el expansionismo soviético, que más ha influido en las estrategias para la seguridad nacional norteamericana, es aquella que distingue tres niveles del "Imperio de Moscú":

1. El imperio de la gran Rusia, que abarca todo el territorio de la actual U.R.S.S. e incluye, aparte de la población eslava, a 100 millones de musulmanes y ucranianos del continente asiático.
2. El imperio soviético, que comprende a los Estados socialistas de Europa Oriental y a Mongolia, como países satélites.
3. El imperio comunista de Moscú, que se integra con todos aquellos Estados que dependen política, militar y económicamente del Kremlin (6).

Este tipo de posturas, que han ido conformando el background norteamericano acerca de las amenazas a su seguridad, refuerzan la creencia de Estados Unidos de que poseen intereses y compromisos en todo el mundo, a tal grado que "sus intereses de seguridad y los de sus aliados y amigos constantemente son puestos a prueba por el constante (sic) crecimiento y complejidad del poderío militar soviético, del bloque del Este y la explotación subrogada de los conflictos regionales" (7).

Es pertinente conocer la visión que los norteamericanos tienen de su seguridad e intereses nacionales en cada una de las regiones del planeta, para comprender el lugar que América Latina ocupa en la estrategia global norteamericana conforme a esos mismos intereses. Para ello se seguirán muy de cerca los estudios que sobre este tema ha realizado Donald Nuechterlein (8).

En ese sentido, pueden identificarse cuatro intereses nacionales básicos que guían toda la política exterior norteamericana y sus posturas para preservar su seguridad nacional. Estos son: a) defensa del homeland, concebida como la defensa del territorio de norteamérica (inclusive Canadá, México y la Cuenca del Caribe) y como la supremacía del poder estratégico sobre la Unión Soviética que es el único Estado con poder para inflingirle graves daños; b) bienestar económico norteamericano, que incluye una amplia variedad de tópicos de la economía internacional como el valor del dólar, el nivel de vida

(6) Cfr. Brzezinski, op. cit., p. 16.

(7) Organización de los Jefes del Estado Mayor Conjunto. La postura militar de Estados Unidos para 1987. p. 9.

(8) Vid. "National Interest and National Strategy: The need for priority (Part I)" en Varios autores. Seguridad en el Hemisferio Occidental. pp. 23 et seq. y Los intereses nacionales de los Estados Unidos en un mundo cambiante. pp.

de los norteamericanos, la capacidad de las compañías norteamericanas para comerciar e invertir en el extranjero, etc.; c) orden mundial favorable (seguridad internacional), que comprende las alianzas de Estados Unidos, los tratados de asistencia militar, la ayuda soviética a los movimientos de liberación nacional, etc.; y d) promoción de los valores norteamericanos para fomentar el sistema constitucional de Estados Unidos, con énfasis en los derechos y libertades individuales.

El mismo autor sugiere cuatro niveles para evaluar cada uno de los intereses expuestos. Se considera como un interés de sobrevivencia cuando se pone en peligro la existencia misma del país; como un interés vital cuando se le causaría un grave daño a la nación, a tal punto de debilitarla sensiblemente; como un interés principal cuando se afectaría su bienestar político, económico y social; y, como un interés secundario cuando el daño causado al bienestar nacional no es muy grave y las propias empresas norteamericanas estarían en posibilidad de remediarlo por sí mismas.

Bajo esta perspectiva, Europa Occidental posee un interés principal para la defensa del homeland norteamericano y para su bienestar económico, sin embargo, su importancia para la seguridad internacional y para la promoción de la ideología norteamericana constituye interés vital para Estados Unidos.

La relación de Estados Unidos con la Unión Soviética posee la más alta prioridad para los norteamericanos, ya que la U.R.S.S. es el único Estado capaz de destruir el homeland norteamericano, en este sentido esta relación posee un interés de absoluta sobrevivencia. Pero, al mismo tiempo, los norteamericanos relacionan ese interés con otro principal y en ocasiones vital: la prevención de la expansión de la influencia soviética. Por otra parte, por sus relaciones comerciales-financieras, la Unión Soviética junto con Europa Oriental poseen un interés secundario para la economía norteamericana.

Hasta 1950 los intereses vitales norteamericanos en el Lejano Oriente se centraban en las islas: Japón, Filipinas y Australia. Sin embargo, el ataque norcoreano a Corea del Sur en junio de 1950 cambió esta percepción y el interés norteamericano se adentró en el continente, ya que la Administración Truman consideró que no debería tolerarse la unificación coreana bajo el dominio comunista. Algo parecido sucedió una década más tarde en el sureste asiático, cuando el Congreso consideró a la zona - mediante la Resolución del Golfo de Tonkin en agosto de 1964 - como de interés vital para la defensa de Estados Unidos. Por su parte, Japón ha sido considerado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como de vital interés para la promoción de un orden mundial favorable a los objetivos norteamericanos y por su potencial económico que lo ha colocado como el segundo socio comercial norteamericano, posee asimismo una importancia vital para los intereses de bienestar de Estados Unidos. Resumiendo,

puede decirse que, conforme a la óptica norteamericana, el Este de Asia posee una importancia vital para la seguridad internacional y un interés principal para la defensa del homeland norteamericano y para su bienestar económico, así como para la promoción de su ideología.

Para los Estados Unidos los objetivos que deben alcanzar en el Medio Oriente se centran básicamente en contrarrestar las iniciativas de expansión soviéticas en el área y de esa forma evitar un cambio en el balance del poder mundial y garantizar un continuo acceso de los recursos petroleros del Golfo Pérsico a Occidente.

Para los intereses norteamericanos, Africa debe ser dividida estratégica y políticamente en Africa Sub-sahariana y Africa del Norte siendo, esta última región, la más importante tanto por su continuidad con el Mediterráneo como por su asociación geográfica con Europa y Turquía, es decir, el Área de influencia de la OTAN. En su conjunto, los intereses que para la seguridad norteamericana pudieran existir en Africa, se derivan de los recursos del continente, aprovechados por las naciones de Occidente y de las facilidades de tránsito que pueden afectar las operaciones de Estados Unidos en el Mediterráneo y el Medio Oriente. Sin embargo, los Estados africanos no pasan de tener un interés principal para el bienestar económico norteamericano y para la seguridad internacional, así como una importancia secundaria para la defensa del territorio de Estados Unidos y para la promoción de sus valores.

La seguridad nacional norteamericana y los intereses nacionales que protege tienen, desde la posguerra, a la U.R.S.S. como su principal amenaza. En consecuencia la organización de la seguridad nacional de Estados Unidos y la evolución de sus estrategias deben enmarcarse en la lucha que sostiene con, quien ellos consideran, la fuente de peligro del "mundo libre".

1.1.1. LA ORGANIZACION DE LA DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS.

En el estudio de la seguridad nacional norteamericana no puede soslayarse el papel que ha jugado la carrera de los armamentos nucleares, puesto que su propia naturaleza ha modificado el concepto tradicional de seguridad nacional. Es decir, ningún país está al margen de los peligros de una conflagración mundial.

Esto habría de modificar, en mayor medida, la idea de seguridad nacional en una de las superpotencias nucleares, como lo es Estados Unidos.

Con el enfrentamiento soviético-norteamericano por la supremacía mundial, la seguridad se convirtió en la meta final de la política exterior, en lugar de su punto de partida.

Para Estados Unidos el problema más importante a resolver fue establecer ya no el patrón de relación civil-militar que fuera más compatible con sus valores liberal-democráticos, sino aquél que mantuviera mejor la seguridad de la sociedad norteamericana. Lo que habría de afectar también a la organización de la defensa de Estados Unidos. Es por ello indispensable conocer la organización, estructura y funcionamiento de la defensa norteamericana, sus doctrinas, estrategias y políticas, así como la lógica interna de sus decisiones, desde su punto de vista.

El diseño de la política exterior de Estados Unidos corresponde al poder ejecutivo. Mas específicamente, son el Presidente de la Nación, el Asistente Especial sobre asuntos de Seguridad Nacional, los Secretarios de Estado y Defensa, el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), además de los funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo, la de Estados Unidos para la Información y la del Control de Armamentos y Desarme, sobre los que recae el compromiso de implementar una política exterior que sea acorde con los objetivos nacionales norteamericanos. Sin olvidar el papel de otros organismos como el Departamento del Tesoro, para el diseño de una política monetaria acorde con los lineamientos que aquéllos marcan (9).

El Departamento de Estado ha sido -tradicionalmente- la principal dependencia gubernamental que se ocupa de la conducción de la política exterior norteamericana, pero no siempre se ha erigido como el principal consejero del jefe del ejecutivo para la determinación de los intereses nacionales o para la formulación de la política exterior.

Ahora bien, la formulación de los intereses nacionales de defensa de Estados Unidos corresponden al Consejo de Seguridad Nacional (CSN), pues es este organismo el que planifica y coordina la política de seguridad nacional, así como al que concierne la toma de decisiones estratégicas de la política exterior de Estados Unidos. Empero, desde que fue creado en 1947, ha quedado claro que "no hay un sistema ideal para el manejo de la política de seguridad nacional" (10).

El Acta de Seguridad Nacional de 1947 cambió radicalmente la organización de la defensa norteamericana y la preparó para el período de la posguerra. Con ella se unificó a los servicios militares bajo el Departamento de Defensa y se creó una estructura de inteligencia separada (CIA), asimismo se recomendó

(9) Cfr. John Spanier. How american foreign policy is made. pp.20 et seq.

(10) Philip Odeen. "Organizing for national security." en International Security, vol. 5, num. 1, 1980 p. 112.

la creación del CSN (11), que finalmente quedó integrado por el Presidente, el Vicepresidente, los Secretarios de Estado y de Defensa y el Director de la Oficina de Defensa Civil y Movilización, así como por el Director de la CIA y el Presidente de los Jefes del Estado Mayor Conjunto como consejeros estatuarios (12).

Las responsabilidades principales del CSN son: "aconsejar al Presidente respecto a la integración de políticas interna, externa y militar relativas a la seguridad nacional, así como capacitar a los servicios militares y a otros departamentos y agencias del gobierno para cooperar más efectivamente en materias que envuelvan la seguridad nacional" (13).

La CIA y la Junta de Comandantes en Jefe (JCS) no sólo son los asesores estatuarios del CSN, sino que son los ejecutores permanentes de sus estrategias. En tiempos de paz, corresponde a la CIA ser el órgano executor por excelencia. Sus principales funciones oficiales son:

1. Asesorar al CSN en materias concernientes a la seguridad de Estados Unidos en los que se vean involucradas otras agencias y departamentos del gobierno.
2. Evaluar las actividades que tengan relación con la seguridad nacional y hacerlas del conocimiento de los funcionarios a quienes concierna.
3. Producir y difundir programas en el exterior relacionadas con la seguridad nacional, incluidas aquellas que tengan que ver con la política exterior en cuestiones económicas, científicas y técnicas.
4. Desarrollar programas propios de sus actividades bajo la dirección del CSN.
5. Conducir actividades de contrainteligencia.
6. Dirigir las actividades de la "comunidad de inteligencia" en el exterior, bajo la supervisión del CSN (14).

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Administración Truman intentó disminuir tanto la influencia política de las fuerzas armadas como los presupuestos militares. Sin embargo, en marzo de 1947 y como respuesta a la crisis de Grecia y Turquía,

(11) Cfr. William Bundy. "The National security process. Plus ca chance..." en International Security, vol. 7, num. 3, 1982-1983, p. 95.

(12) Cfr. Donald Neuchtorlein. Los intereses nacionales... p. 76.

(13) Antonio Cavalla. Estados Unidos, América Latina: Fuerzas armadas y defensa nacional. p. 111.

(14) Ibid. p. 113.

se implementaron una serie de propuestas y programas que resultaron en una reactualización del Destino Manifiesto. A partir de entonces quedaba claro que la política de Estados Unidos se encaminaba a "ayudar a los pueblos libres que resisten los intentos de subyugación de minorías armadas o de fuerzas externas". De tal suerte que la Doctrina Truman sentaba las bases del intervencionismo global norteamericano de la posguerra y revitalizaba el proceso de militarización.

En efecto, durante la Administración Truman se crean el Consejo de Asesores Económicos (1946), el Consejo de Seguridad Nacional (1947) y la Oficina de Movilización para la Defensa. Pero el hecho más sobresaliente es que con el Acta de Seguridad Nacional de 1947 se inicia un proceso para institucionalizar la centralización de la organización de la defensa y la seguridad nacionales. Con la promulgación del Acta se impone la concepción de un establecimiento militar único con tres departamentos separados, bajo la dirección de la JCS. Al mismo tiempo que se incrementa el peso de la Oficina del Secretario de Defensa y la del Presidente de la JCS. En 1949 los departamentos naval, del ejército y de la fuerza aérea pierden su rango de ministerios y el Secretario de Defensa pasa a representarlos en el Gabinete.

La herencia de la Segunda Guerra Mundial y la influencia de la Guerra Fría incrementaron en forma sin precedentes la presencia de las fuerzas armadas en los procesos de decisión de la política exterior, al grado que "los enormes recursos invertidos en la esfera militar han conducido a hacer que el aparato militar actual tenga una ventaja operativa para la acción en la política internacional como en la nacional" (15).

La Administración Eisenhower utilizó ampliamente, en materia de defensa y seguridad nacionales, a la oficina presidencial y elevó su importancia. En esta administración se nombra por primera vez a un asistente especial para los asuntos de seguridad nacional y se confiere al CSN la función de rectoría y coordinación de las políticas exterior y de defensa. Por su parte, la Administración Kennedy introduce un liderazgo civil agresivo en la política de seguridad nacional, con Robert McNamara a la cabeza. La Administración Nixon, más tarde, consolidó el proceso de fortalecimiento del CSN que, visiblemente influido por el Departamento de Defensa, acabó por discutir y procesar todo acto estratégico de política exterior. A su vez, la Administración Carter intentó combinar los estilos de las Administraciones Truman y Kennedy: un Departamento de Estado dominante, pero con un CSN capaz de influir de manera determinante en la toma de decisiones de seguridad nacional y defensa. Ahora bien, si algo ha quedado claro -durante la Administración Reagan- es el papel de primer orden que posee el CSN, órgano capaz de pasar por encima de las decisiones del Congreso y de burlar el control presidencial, hasta el grado de

(15) Dieter Senhuas. Armamento y militarismo, p. 174.

constituirse en el verdadero ejecutor de la política de seguridad nacional con el pleno respaldo de la burocracia del Departamento de Defensa.

Empero, como lo señala Arnold Kanter (16), no existe un único proceso político que por sí mismo defina todas las decisiones y las acciones de la seguridad nacional norteamericana. Así por ejemplo, durante la Administración Nixon, la aprobación de operaciones clandestinas -que podrían incluir maniobrar las elecciones en Chile, apoyar una invasión a Cuba o conducir una guerra secreta en Laos- provenía de un comité cuya existencia nunca fue públicamente anunciada por el gobierno: el Comité Cuarenta, entre cuyos miembros se incluían el asistente presidencial de seguridad nacional, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Subsecretario para Asuntos Políticos y el Director de la CIA. Aunque, debe quedar claro que los ejecutores de las operaciones clandestinas han provenido tradicionalmente del Directorio de Planes de la CIA, misma que mantiene a miembros de su personal en el extranjero generalmente con status diplomático, y que las acciones de los servicios de inteligencia son parte integral de la política exterior norteamericana (17).

En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos determinó cuales serían sus zonas de influencia y áreas de competencia, al mismo tiempo estableció alianzas y dispositivos militares para defender lo que considera su seguridad nacional. En este sentido, las alianzas militares internacionales en las que Estados Unidos participa (OTAN, TIAR, entre otros) deben ser consideradas como partes integrantes de la organización de la defensa de Estados Unidos.

Los programas de asistencia han sido, desde el inicio de la posguerra, un elemento fundamental en el diseño de la política de seguridad nacional de Estados Unidos, así como para su expansión y control de otras formaciones sociales. Primero fueron implementados para ayudar económica y militarmente a la reconstrucción de los países amigos de los norteamericanos que -a juicio de estos- sufrieran alguna agresión externa. "Ahora, la asistencia externa representa un elemento importante en una estrategia nacional que busque la consecución de sus objetivos políticos, económicos y de seguridad nacionales" (18). Como puede observarse, la asistencia al exterior se ha convertido en una parte integral de la estrategia militar de Estados Unidos, pues mediante la ayuda a sus amigos y aliados satisface sus necesidades de defensa.

La ayuda de Estados Unidos a los países considerados como

(16) Defense politics, a budgetary perspective, p. 119.

(17) Cfr. John Saxe-Fernandez. De la seguridad nacional, pp. 30 et seq.

(18) Henry Lewandowski. "Foreign Assistance Programs" en Varios autores, Seguridad en el Hemisferio Occidental, p. 1.

amigos o de colaboración indispensable para su seguridad, comprende:

1. Programas de asistencia económica, canalizadas a través de los bancos multilaterales para el desarrollo, las organizaciones internacionales, los programas de asistencia al desarrollo, la Ley 480 de ayuda alimenticia y por el Fondo de Apoyo Económico.
2. Programas de asistencia para la seguridad, como el Programa de Ayuda Militar (consiste en conceder o prestar equipo militar, otorgar facilidades y asistencia tecnológica, con el fin de asegurar la defensa mutua y la seguridad colectiva del mundo no comunista y de moderar el impacto financiero - en los Estados receptores- de las ventas militares), el Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (se otorga a oficiales extranjeros seleccionados por las propias autoridades norteamericanas, en escuelas militares de Estados Unidos o por equipos de entrenamiento en el país huésped), las Operaciones para la Preservación de la Paz (como las fuerzas multinacionales de la ONU o de la OEA, en las que participe Estados Unidos), el Programa de Ventas Militares al extranjero con crédito, el Programa de Ventas Militares al extranjero al contado y las ventas comerciales, así como el ya mencionado Fondo de Apoyo Económico (con el que se intenta alcanzar la estabilidad política y económica de aquellos Estados que contribuyen al bienestar de la seguridad norteamericana).
3. Programas de Asistencia Militar, que comprenden a los cuatro primeros del inciso anterior (19).

Finalmente, habría que hacer dos consideraciones. Por una parte, la seguridad nacional norteamericana depende de mantener una clara ventaja tecnológica sobre sus potenciales adversarios. Por otra, de las personas que han ocupado los Departamentos de Estado y de Defensa, las jefaturas de las tres ramas de las fuerzas armadas y la dirección de la CIA, más del 75% han provenido de las filas de los grandes negocios o de las altas finanzas. En este sentido, la definición del interés nacional y la protección de la seguridad nacional frecuentemente han quedado enmarcadas dentro de la esfera de los negocios (20).

(19) ibid. pp. 1 et seq., puede verse también Organización de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, op. cit., p. 84.

(20) vid. Allen Wallis. "Protecting Prosperity from protectionism" en Varios autores. Seguridad en el Hemisferio Occidental passim. y Richard Barnett op. cit., pp. 91 et seq.

1.1.2. EVOLUCION DEL ENFRENTAMIENTO SOVIETICO-NORTEAMERICANO.

Los últimos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial develaron la contradicción inherente en el grupo de los Aliados. Conformado por Estados con diferentes sistemas político-económicos y con proyectos nacionales antagonicos, la alianza no pudo mantenerse en la posguerra. El sueño de una colaboración soviético-norteamericana después de la guerra, se derrumbó. Cada acción de la Unión Soviética fue percibida por Estados Unidos como una amenaza al nuevo orden de la posguerra:

el comportamiento de las fuerzas soviéticas en la mitad de la Europa que invadieron; la creciente evidencia de que las autoridades soviéticas no tenían la intención de permitir el libre juego de las fuerzas democráticas en los países de dicha región; su cínica reticencia a colaborar en la restauración de la vida económica y la estabilidad en las áreas que no estaban bajo su control; la continua inescrutabilidad y sigilo de las acciones soviéticas; la no desmovilización masiva de las fuerzas soviéticas; el comportamiento limitado y sospechoso pero ambicioso de los representantes soviéticos en las nuevas organizaciones internacionales (21)

contribuyeron a socavar, entre los políticos norteamericanos, la idea de un entendimiento con la Unión Soviética, a tal grado de cobrar una "creciente conciencia de que la conclusión de la Segunda Guerra Mundial no había significado el fin del conflicto sino solo la sustitución de un adversario por otro" (22). Este tipo de ideas fue alimentando el odio, real y a veces retórico, del gobierno y pueblo norteamericanos hacia el gobierno de los Soviets.

La fuente del conflicto -desde la optica norteamericana- fue el compromiso ideológico del liderazgo comunista de la U.R.S.S., que tendía al derrocamiento de todo el sistema político y social tradicional de la sociedad norteamericana. Esta era, sin lugar a dudas, una forma de hostilidad nunca antes enfrentada por Estados Unidos.

En un primer momento los norteamericanos no le temieron como una amenaza directa a su propia existencia, sino por los efectos negativos que tenía sobre otros intereses nacionales, como la promoción de sus valores y la continuidad de un orden mundial favorable.

Pero esto no duraría mucho, a partir de 1949, cuando los

(21) George Kennan. "Las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos: una retrospectiva" en Engano Nuclear. p. 55.

(22) George Ball. "deterioro de las relaciones exteriores norteamericanas" en Len Ackland y Steve McGuire. La edad nuclear. p. 260.

soviéticos ensayan su primer artefacto nuclear, la reacción norteamericana fue creciente militarización de su defensa frente a un conflicto que -desde entonces- dejaría de ser estrictamente ideológico para adquirir también una connotación militar. Empero, ninguna de las dos partes estaba en posición, y de hecho nunca lo estaría, de lograr la destrucción total del otro sin sufrir daños de tal magnitud que hiciera viable su continuidad histórica. El producto de esta situación fue que cada parte tuvo que aceptar la existencia del otro y partir de ahí para diseñar su política. Lo que nunca se aceptó fue la expansión del adversario en detrimento propio, menos aún en aquellas áreas que tacitamente habían quedado -conforme a los acuerdos del fin de la guerra- en sus zonas de influencia.

De esta manera, ningún cambio ocurrido en la estrategia norteamericana desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha dejado de tener como su principal fundamento la percepción de que la Unión Soviética y su ideología son los enemigos que deben ser detenidos. Los cambios -que sin duda se han presentado- se han debido a percepciones distintas acerca de la naturaleza específica de la amenaza soviética, de la magnitud de sus objetivos y de los medios con los que cuenta. Los diferentes enfoques sobre todas estas cuestiones han generado, a lo largo de la confrontación, opciones estratégicas diversas acerca de la mejor forma de hacer frente a las amenazas.

Estados Unidos enfrentó el reto ideológico que la expansión del marxismo suponía como una reafirmación y revitalización de su histórico anhelo: la expansión de su idea de libertad e instituciones consideradas como democráticas. En su Mensaje al Congreso del 12 de marzo de 1947, visto por muchos como el punto de partida de la Guerra Fría, el presidente Truman lanzó su famosa doctrina, que marcaría en adelante la posición de su país en el enfrentamiento con la U.R.S.S.:

En la situación presente de la historia del mundo, casi todos los países tienen que escoger entre dos generos de vida. Esta opción, muy frecuentemente, no es libre. Creo que corresponde a la política de Estados Unidos sostener a los pueblos libres que resisten a las tentativas de dominación efectuadas por minorías armadas o por presiones externas. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a tomar entre sus manos su propio destino... Los pueblos libres del mundo esperan nuestro apoyo en la defensa de sus libertades. Si vacilamos en la asunción de nuestras responsabilidades, podemos poner en peligro la paz del mundo y seguramente comprometemos la prosperidad de nuestra propia nación (23).

En el mismo tono, el presidente Kennedy afirmaría años más tarde que su país "pagaría cualquier precio, soportaría

(23) Citado por Marcel Merle, Sociología de las Relaciones Internacionales, pp. 257 et seq. El subrayado es mío.

cualquier carga, se enfrentaría a cualquier desventaja, apoyaría a cualquier amigo, se opondría a cualquier enemigo para asegurar el triunfo y la supervivencia de la libertad" (24).

En el plano militar se han presentado más y continuos cambios estratégicos. Estados Unidos apoyó y fomentó el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas con la idea de que la paz futura sólo se alcanzaría si todas las potencias estaban de acuerdo en las medidas que deberían adoptarse para preservar la paz y la seguridad internacionales, es decir, la seguridad colectiva representó en los primeros años de la posguerra la estrategia político-militar norteamericana de contención frente a sus posibles enemigos. Esta actitud estaba respaldada por el monopolio nuclear de Estados Unidos, pues durante la Administración Truman se consideró que esa ventaja intimidaría a los soviéticos para romper la línea de contención marcada por los acuerdos de la posguerra. La capacidad del primer golpe era garantía de éxito.

Empero, esta situación se complicó rápidamente, por una parte, en cada momento se hacía más evidente para los norteamericanos el deseo de la U.R.S.S. por expandir sus zonas de influencia, por hacer realidad los postulados marxistas del triunfo del socialismo sobre un decadente capitalismo; por otra parte, la situación de poder cambió radicalmente cuando las fuerzas maoístas el poder en China en 1949 y, sobre todo, cuando la Unión Soviética logró el dominio del átomo. Focos meses después estallaría la Guerra de Corea.

La Administración Eisenhower le imprimió un nuevo enfoque al problema de la seguridad nacional norteamericana, después de más de dos años de lucha en el Lejano Oriente. En 1953, mediante un documento del CEN (102/2) se establece el diseño de una nueva política de seguridad nacional, que se daría a conocer públicamente hasta enero del siguiente año, cuando el Secretario de Estado John F. Dulles anunció lo que pronto se conocería como la estrategia de la represalia masiva. Estados Unidos comprendió que la simple superioridad nuclear no bastaba para preservar sus objetivos y que valerse de las fuerzas convencionales locales para detener lo que se consideraba como el avance comunista, como había hecho en Corea, no era suficiente. En lugar de ello así se justificó esta nueva estrategia- debería desarrollar una gran capacidad de represalia instantánea y masiva en contra de la U.R.S.S. (25).

La credibilidad en la eficacia de dicha estrategia fue

(24) Citado por George Ball, op. cit., p. 267.

(25) Cfr. Alexander George y Richard Smole. "Deterrence in History" en Varios autores. American defense policy, p. 50 y Henry Lewandowski. "Introductory Essay-Strategic nuclear force planning" en Varios autores. Seguridad en el Hemisferio Occidental, p. 271.

socavada rápidamente. En 1956 la Unión Soviética fabricó su primer artefacto intercontinental y un año más tarde probó con éxito un misil balístico de largo alcance, logrando de esa manera estar en posibilidad de dañar -por vez primera- el homeland norteamericano.

Como puede observarse, la evolución de la estrategia norteamericana ha sido también fuente de adecuaciones en sus políticas de seguridad nacional. Una vez alcanzada la paridad nuclear por la Unión Soviética, Estados Unidos desechó la estrategia de la represalia masiva, basada fundamentalmente en el poder nuclear propio in crescendo, que actuaba como un eficiente factor de disuasión. Al finalizar la década de los cincuenta, la Administración Eisenhower complementó gradualmente dicha estrategia con la del empleo gradual de la fuerza (graduated deterrence), para lo que Estados Unidos considerara ataques soviéticos a través de la línea de contención. De esta manera, se reemplazaba al uso de las fuerzas nucleares estratégicas por las de carácter táctico, en la periferia. Para comprender este cambio, debe entenderse que el crecimiento de la capacidad militar de la U.R.S.S., la ponía en posibilidad de romper con relativo éxito la línea de contención en Europa, al tiempo que proyectaba su presencia política, ideológica y militar en otras áreas.

La administración Kennedy buscó nuevas alternativas para proteger de manera más eficiente los intereses de su país frente a la diversidad de amenazas (en formas e intensidad) que percibía de parte de la Unión Soviética. La nueva estrategia debería contar con la capacidad para detener las agresiones de bajo nivel que la represalia masiva no había logrado. La respuesta flexible, como se le conocía a la nueva estrategia, estableció una capacidad militar con la posibilidad de responder a un amplio espectro de amenazas ideológicas o militares (nucleares y convencionales). Esta estrategia permitió a la Administración Kennedy contar con múltiples opciones para hacer frente a las posibles amenazas a la seguridad nacional norteamericana.

Así, la pauta de la nueva estrategia fue la respuesta controlada, adecuada al reto político-militar que para Estados Unidos representaba una Unión Soviética recuperada de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. La respuesta flexible preveía "el empleo controlado de medios militares adecuados a la provocación y agresión de que se trate, debía ser aplicada a todas las expectativas de conflicto y grados de intensidad de los posibles casus belli" (26), por lo que se incluía a los movimientos de liberación nacional apoyados por la Unión Soviética e influidos por el pensamiento marxista, espasos de derrocar a gobiernos amigos y/o aliados de Estados Unidos y con ello permitir la penetración soviética a las zonas de interés norteamericano.

(26) Dieter Sengehaas, op. cit., p. 91.

La crisis de los misiles en Cuba contribuyó a desarrollar una actitud que se había iniciado cuando los soviéticos lograron alcanzar un nivel nuclear similar al norteamericano. En efecto, a partir de 1961, se hace evidente que la disuasión intenta ser alcanzada a través de una creciente y amenazadora escalada nuclear.

Ambas partes se hicieron mutuamente vulnerables, pero sin lograr la capacidad de un "primer golpe" definitivo. Por el contrario, la capacidad de zaharse, la búsqueda de una seguridad absoluta y el acelerado desarrollo tecnológico, llevaron a las dos superpotencias a un "balance del terror" que inevitablemente las condujo a una situación de disuasión mutua.

Esa concepción estratégica domino la relación bilateral soviético-norteamericana en los últimos años de la década de los sesenta y la mayor parte de la siguiente. Conocida como destrucción mutua asegurada, pronto fue cuestionada tanto por el alto costo económico, como por los riesgos que llevaba implícitos.

Sin embargo, ocurren cambios radicales durante la Administración Nixon. Por un lado, el fracaso norteamericano en el Sureste Asiático contribuyó a revalorar la postura ideológica norteamericana de constituirse en guardián del orden mundial, promotor y guía de la "libertad". El presidente Nixon proclamouna doctrina con la que se cambiaron los medios para alcanzar los mismos fines: Estados Unidos dejaría de ser el policía del mundo, pero contribuiría para que otros lo fueran, en favor del orden mundial existente.

Esto era expresión también de los cambios que experimentaba la sociedad internacional en su conjunto. Al lado de las dos superpotencias surgían nuevos poderes mundiales. Por ello, durante la Administración Nixon fue ganando espacio la idea de que Estados Unidos no tenía por que ser el poder supremo en la política mundial para sentirse seguro, otros podrían hacer ese trabajo. De esa manera, la seguridad podría alcanzarse -se creía- mediante un equilibrio de poder (17). Se iniciaba, de esa manera, un período de distensión real, materializado en la firma del Tratado IBM de 1972 y los tratados SALT II, de 1972.

1.2. América Latina en la estrategia militar global de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Al tratar la problemática de la seguridad nacional norteamericana y la importancia que América Latina pueda tener al respecto, necesariamente surgen dudas que tendrán que disiparse para poder contar con bases sólidas para reconstruir uno de los

(17) Cfr. Donald Nuechterlein. Los intereses nacionales... pp. 211-226.

puntos de contacto más problemáticos de sus relaciones. Es importante América Latina para los intereses nacionales norteamericanos", posee América Latina alguna importancia en la preservación de la seguridad nacional de Estados Unidos? y en caso de tenerla, en qué radicaría?

A primera vista, y en el marco de la confrontación soviético-norteamericana, parecería ser que América Latina posee una importancia marginal para Estados Unidos. Los países de la región poseen poco poder, han estado relativamente aislados del conflicto político-militar de las superpotencias y, con escasas excepciones, se han mantenido como fieles aliados de Estados Unidos. Todo esto trajo como consecuencia que se viera a América Latina como la zona de interés más dúctil, menos vulnerable y más dispuesta a colaborar con la realización de los intereses nacionales norteamericanos, incluida la preservación de su seguridad. De hecho, la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el establecimiento de otros sistemas de seguridad hemisféricos (ver infra p. 28) ponen de manifiesto la posición de América Latina como simple objeto de las relaciones globales norteamericanas.

Los diseñadores de las políticas de seguridad nacional norteamericana daban por supuesto, tradicionalmente, que una América Latina estable y cooperativa dependía de la ausencia de influencias externas (Doctrina Monroe) y de la preservación de una solidaridad hemisférica bajo el liderazgo de Estados Unidos (Panamericanismo).

Sin embargo, la realidad ha mostrado que - pese al aparente olvido y desdén hacia la región - América Latina constituye una importante zona de seguridad para Estados Unidos. Este es un hecho insoslayable y se ha mantenido como tal - a pesar de quienes lo niegan - en la política exterior norteamericana hacia la región, pues ha estado implícito en todas las variables que ésta ha tomado: Guerra Fría, Alianza para el Progreso y contrainsurgencia, Bajo Perfil conforme a la Doctrina Nixon, Trilateralismo y Derechos Humanos, y Neoconservadurismo. Ya que la falta de estabilidad política y del orden socio-económico en los países latinoamericanos, o peor aun, el diseño de políticas independientes que los alejen de los intereses nacionales norteamericanos, ponen en jaque la seguridad de Estados Unidos por que se introduce un elemento de duda para su liderazgo, se quebranta una parte importante de su bienestar material y se abre el camino para la penetración, crean los norteamericanos, de potencias extranjeras (U.R.S.S.) y de ideologías extrañas (marxismo). Por ello, Estados Unidos se "ha sentido obligado" a evitar los riesgos de tal inestabilidad y a contribuir a la imposición del orden, más conveniente a su seguridad.

Ahora bien, la caracterización de zona de seguridad para Estados Unidos, no le viene a América Latina de sí misma sino - como ya lo había apuntado Nicholas Spykman, desde antes de la

Segunda Guerra Mundial- del hecho de que puede servir como base de avanzada de enemigos extrahemisféricos (28). Asimismo, América Latina representa una área de interés para Estados Unidos por otras razones, pues a pesar de que posee -aparentemente- un papel menor en la estrategia global norteamericana, participa con más del 10% del comercio internacional de Estados Unidos, es la única región segura para el suministro de una gran variedad de materias primas en tiempos de guerra, es considerable la inversión indirecta de los bancos norteamericanos en América Latina y, a mediano plazo, el bienestar económico de Estados Unidos está íntimamente ligado al desarrollo económico de la región. Por otra parte, América Latina como integrante del hemisferio occidental y de la esfera de influencia de Estados Unidos, es piedra angular para la proyección política e ideológica norteamericana en el mundo.

En conjunto, el hemisferio occidental no puede considerarse como un todo homogéneo para los intereses nacionales norteamericanos, incluida su seguridad nacional, y para la formulación de una estrategia de defensa. Por un lado, está Canadá, que no es sino una prolongación hacia el norte del tipo de sociedad norteamericana. Se encuentra económicamente integrada a ésta y en términos militares es, de manera absoluta, inferior; además de ser el Estado que más contribuye a la realización de los intereses nacionales norteamericanos y el que menos problemas le causa para la preservación de su seguridad. Pero por otro lado, está la heterogénea América Latina: tan amigable y hostil; subordinada y rebelde; paupérrima, pero llena de riquezas.

Es común entre los norteamericanos (29) dividir a América Latina en tres subregiones para la identificación de los intereses nacionales de Estados Unidos en la región:

a) Cuenca del Caribe y América Central (incluidos México, Colombia y Venezuela). Es considerada por Estados Unidos como el área en la que su seguridad debe estar completamente garantizada, porque una amenaza militar de Estados extrac Continentales a dicha zona es vista como de vital importancia para los norteamericanos y llegado el caso, como de sobrevivencia, debido sobre todo a que desde cualquier punto de la misma, el homeland norteamericano es

(28) "Estados Unidos en el hemisferio occidental" en Antonio Cavalla Rojas. Antología. Geopolítica y seguridad nacional en América. p. 42.

(29) Entre los consultados destacan: D. Nuechterlein, "National interest and national..."; Nestor Sánchez "U.S. policy in Central America: a strategic perspective" of Retense 85 en Varios autores Seguridad en el hemisferio Occidental. pp. 13-18; Margaret Hayes. "Security to the south: U.S. interests in Latin American" en International Security. Vol. 5, núm. 1. 1980. pp. 134-145 y Alan Tonelson. "The real national interest". Foreign Policy. núm. 61. 1985-1986. pp. 67-72.

absolutamente vulnerable. Desde la época en que fue proclamada la Doctrina Monroe, Estados Unidos ha considerado a la región como una zona de defensa vital, en la que no se permitiría -por ningún motivo- el establecimiento de una base militar de operaciones de parte de algún poder hostil contra la preminencia de Estados Unidos en el área.

Otras circunstancias acentúan la importancia de la región para los intereses norteamericanos. Los países de Centroamérica y la Cuenca del Caribe proveen una cantidad considerable de materias primas para la economía norteamericana; dos terceras partes del petróleo importado por Estados Unidos y una gran variedad de los minerales estratégicos que compra en el exterior (manganeso, níquel, platino, estaño, zinc, bauxita, berilio, cromo, cobalto, mercurio, titanio y cobre) pasan a través del Canal de Panamá o del Golfo de México; el 45% del crudo extraído de Alaska cruza el Canal para llegar a las refinerías norteamericanas; casi la mitad de todo el tonelaje del comercio exterior norteamericano (exportaciones e importaciones se maneja en sus puertos del Golfo y por líneas navales que transitan por el Caribe y, last but not least, siendo esta región económicamente la más pobre y políticamente la menos estable del continente, posee altas probabilidades de que emerjan regímenes antinorteamericanos y es altamente vulnerable a penetraciones externas.

México es el segundo proveedor de las más importantes materias primas estratégicas para Estados Unidos y el principal en plata, zinc, antimonio, mercurio, bismuto, selenio, bario, radio y plomo; proporciona, además, más una cantidad que fluctúa en un 30% del crudo importado por la economía norteamericana. Venezuela es uno de los compradores más importantes de productos provenientes de Estados Unidos y es una fuente de minerales y energéticos (23% del petróleo y 28% del hierro importados son venezolanos). Colombia posee una gran importancia tanto por su posición geográfica como por su influencia en la región. Asimismo, las refinerías norteamericanas ubicadas en las antillas tratan más del 50% del crudo proveniente del Medio Oriente y África, y cerca del 50% de la bauxita importada por Estados Unidos proviene de Jamaica.

b) Costa atlántica sur. Es una zona geopolíticamente considerada como estratégica para los intereses norteamericanos. La cercanía del Cabo de Buena Esperanza, ruta de primer orden para el comercio de occidente, con la costa sudamericana, realza la importancia de ésta ya que, aproximadamente, el 25% del petróleo importado por Estados Unidos y el 60% del importado por Europa Occidental cruza la línea Natal (Brasil)-Dakar (Senegal). Así pues, Argentina y Brasil poseen una relevante importancia para la seguridad del comercio marítimo. La bauxita de las Guayanas y el hierro de Brasil, incluidas otras materias primas, hacen de esta subregión una fuente importante de recursos para la economía norteamericana. Por todo esto, Estados Unidos tiene

claros intereses en mantener abierto el Atlántico Sur, sobre el que transitan recursos estratégicos para él mismo y para sus aliados.

Estando a 7 000 millas de distancia de Washington -es decir, dos veces la distancia a Europa- la región de La Plata adquiere relevancia por la continuidad territorial que tiene con el resto del continente, pues para Estados Unidos siempre ha sido preocupante (aún más para el período en estudio) una posible "reacción en dominó" que pudiera provocar cualquier cambio importante en América Latina, que vaya en contra del statu quo.

c) Costa occidental de América del Sur. Los intereses norteamericanos en esta subregión son menos importantes que en la Cuenca del Caribe o que en la Costa atlántica. Por los países de la costa occidental no pasa ninguna ruta marítima o aérea importante, empero abastece a Estados Unidos de un número considerable de materias primas (estaño, telurio, antimonio, bario y cobre). Aunque no son los principales exportadores hacia Estados Unidos, poseen la capacidad de substituir a otros abastecedores de las mismas, en un eventual conflicto armado, por lo que se convierten en piezas claves de la seguridad económica de Estados Unidos y de una política de planeación para la guerra.

Históricamente, Sudamérica ha sido considerada como una zona de interés vital para Estados Unidos, como lo confirma la extensión a todo el continente de la doctrina Monroe y el acuerdo de 1947, para la supuesta seguridad hemisférica materializada en el TIAR. Heredera del legado cultural de Occidente, Estados Unidos considera que Sudamérica debe preservarse en "libertad" para la "democracia". En suma, estratégica, económica e ideológicamente Sudamérica representa, hoy por hoy, un área de indiscutible interés para Estados Unidos.

Desde los últimos años del siglo decimonónico se percibió un brusco cambio en las relaciones interamericanas. El rotundo fracaso del hispanoamericanismo y su sustitución por el panamericanismo, marcaron la nueva ruta de las relaciones. El panamericanismo vino a imponer a toda América Latina una nueva política y una nueva estrategia: la del Gobierno y fuerzas armadas de Estados Unidos. Bajo la influencia del panamericanismo, Estados Unidos impuso de manera gradual su ideología y estrategia de seguridad nacional y defensa, a los países latinoamericanos.

En la VIII Conferencia Internacional Americana celebrada en 1928 en la Ciudad de Lima, se definió al panamericanismo como "la unidad espiritual de los pueblos de América", conforme a la Declaración sobre los principios de la solidaridad americana. (Véase G. Connell-Smith, El sistema interamericano pp. 133-137). Los acontecimientos de Europa obligaron a Estados Unidos a organizar no sólo la defensa del país, sino todo un sistema de seguridad continental con el fin de preservar al hemisferio

occidental de todo acto hostil, por lo que se le declaró "zona de seguridad" ese mismo año.

Estados Unidos temió ser agredido por las potencias del Eje a través de algún país latinoamericano. La prevención de semejante acontecimiento fue el criterio fundamental con base en el cual acometieron la tarea de defender el continente, no por altruismo, sino porque representaba -en el fondo- su propia defensa.

En la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones de las Repúblicas Americanas, realizada en La Habana, se emitió la Resolución XV, llamada "Declaración de asistencia recíproca y cooperación para la defensa de las naciones americanas", en la que se establece que todo atentado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio, la soberanía o la independencia política de un Estado americano, por parte de otro extrahemisférico, es una agresión a todos los Estados del continente. Poco después, se legitimaría la necesidad norteamericana de contar con órganos y pactos militares que permitieran garantizar la seguridad hemisférica. En enero de 1942, poco más de un mes después del ataque japonés a Pearl Harbour, se efectuó la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, en Río de Janeiro, en la que se creó la Junta Interamericana de Defensa y el Comité Consultivo para la Defensa Política.

Una vez definido el curso de la guerra, la noción de seguridad hemisférica se orientó hacia una eventual agresión soviética a la región. La definición oficial norteamericana de seguridad continental -materializada en la National Security Act de 1947- fue entendida como el mantenimiento, por la acción común, de la seguridad de todos los miembros de la asociación panamericana. Bajo esa perspectiva se firmó en Río de Janeiro el TIAR.

Con la Guerra de Corea, Estados Unidos se vio precisado a obtener una mayor cooperación de América Latina en su lucha contra el comunismo internacional. En este marco, y como respuesta a los sucesos de Guatemala, Estados Unidos promovió durante los trabajos de la X Conferencia Internacional Americana celebrada en 1954 en la capital venezolana, una declaración en la que se establece que "el control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional (...) constituiría una amenaza para la soberanía e independencia política de los Estados americanos" (30). De esta manera quedaba definido cual sería, en adelante, el enemigo de la seguridad hemisférica, vale decir, de la seguridad norteamericana en el continente.

(30) Jorge Tapia Valdés. El Terrorismo de Estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur, p. 55.

La estrategia de seguridad hemisférica norteamericana fue acompañada, desde el punto de vista político, por una actitud favorable hacia los regímenes militares en América Latina. Las Administraciones Truman y Eisenhower "se pronunciaron por una política de estabilidad en un continente donde el golpe de Estado y la dictadura personalista se convertían en regla" (31). Los norteamericanos reconocieron y apoyaron, desde entonces, a los gobiernos de facto que manifestarían posiciones anticomunistas y se opusieran a toda transformación del statu quo.

A estas alturas del análisis resurge la duda inicial, por qué el aparente desdén y despreocupación por América Latina, en relación a otras áreas del mundo.

Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, tuvieron que hacer frente a ciertos imperativos geopolíticos, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Fue ambos sabían que quien controlara Europa y Asia, dominaría prácticamente todo el globo terrestre. Estados Unidos consideraba que si los soviéticos llegaban a apoderarse de las áreas periféricas próximas a su territorio (Europa Occidental, Lejano Oriente y Sudeste de Asia), no sólo lograrían tener el control de importantes fuentes de poder económico, militar y humano, sino que alcanzarían ambos flancos del hemisferio occidental: los océanos Pacífico y Atlántico, lo que les daría una posición estratégica de primer orden para atacar y, en su caso, derrotar a Estados Unidos. En ese sentido, los norteamericanos veían a sus posiciones transoceánicas como líneas de despliegue para la defensa de su homeland (32). Vista así la estrategia, América Latina adquiría una gran importancia, ya que era el último reducto a defender antes de una amenaza frontal contra Estados Unidos. Pero antes que entrase en una preocupante defensa de la zona de interés más próxima, Estados Unidos debería garantizar su seguridad en las áreas más alejadas. Por otro lado, la necesaria utilización del TIAR puso de manifiesto la incapacidad y desinterés de los soviéticos por amenazar directamente a la región. De tal suerte que el enemigo establecido en el acuerdo de Río de Janeiro, resultó ser un peligro irreal.

1. 3. EXPANSION DE LA ECONOMIA NORTEAMERICANA Y MODELOS DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la economía internacional se encontraba prácticamente paralizada debido, sobre todo, al desgaste que el conflicto bélico había ocasionado sobre los sistemas productivos de los beligerantes. En situación privilegiada se encontraba la economía norteamericana, en virtud de que su industria no fue afectada por la guerra; por el contrario, su localización geográfica alejada de los principales

(31) Claude Heller. "Las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina: un intento de evaluación", en Nueva Sociedad, Núm. 27 p. 18.

(32) Cfr. Zbigniew Brzezinski, op. cit., p. 23 y Robert L. Faltzgraff.

escenarios bélicos, hizo posible que la economía de Estados Unidos alcanzara un acelerado crecimiento. De hecho, con el fin de la guerra, Estados Unidos se encontró con la posibilidad de erigirse como el rector de las relaciones económicas internacionales.

En efecto, el mundo capitalista resolvió el problema de la dominación, al reestructurar un orden económico y político internacional (Bretton Woods y Yalta); antepuso al marxismo y a la Unión Soviética, perfilados ya como los nuevos enemigos, las ideas de libertad y democracia como instrumentos de legitimación y consenso; además de incorporar al keynesianismo como el instrumento de acción de las políticas económicas que derivaron en el fortalecimiento del llamado "Estado Benefactor". De esta manera, Estados Unidos se preparó para disfrutar del período de mayor dominio económico dentro del mundo capitalista. Para ello tuvo que movilizar y organizar vastos recursos de todo tipo, tanto propios como de los países y regiones que, por los acuerdos de la posguerra, quedaron incorporados a su esfera de influencia.

El dominio norteamericano fue ejercido directamente a través de las políticas económicas que aplicó por medio de las empresas transnacionales y de las nuevas organizaciones económicas internacionales. Con ello, crea todo un mecanismo supranacional para la imposición y el usufructo de una nueva división mundial del trabajo y del poder.

Debilitada Europa por la guerra, pierde toda influencia sobre América Latina, gracias a los cual Estados Unidos consigue en escala sin precedentes, un claro dominio no sólo económico sino también político y militar sobre la región.

En la Conferencia de Bretton Woods (1944) se organiza el orden económico de la posguerra y con la imposición del Plan White se logra instaurar un sistema monetario internacional favorable a Estados Unidos. En efecto, con la adopción del patrón de cambio-oro (Gold Exchange Standard) las reservas monetarias de todos los países con economía capitalista (e incluso los socialistas para su comercio son aquéllos) deberían constituirse por oro, dólares norteamericanos y subsidiariamente por libras esterlinas. Pero como los tipos de cambio y la paridad se fijaron en torno al oro y como el precio oficial de éste se establecía en dólares (35 por onza troy), la única moneda con verdadera capacidad de convertibilidad era la norteamericana. Asimismo, se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encargaría de promover el restablecimiento y el mantenimiento de tipos de cambio duraderos, y de fijar bases para el sistema de pagos internacionales multilaterales, a la vez que se ocuparía de los problemas de desequilibrio financiero de corto plazo. Empero, se fijaron diversas cuotas ligadas al número de votos, con lo que se establecieron también las relaciones de poder dentro del organismo; con ello, Estados Unidos se reservó el derecho de veto. Es fácil advertir que desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, la creación del FMI, significaba asegurar su dominio sobre el sistema monetario internacional,

puesto que su moneda pasaba a ser el eje del patrón de cambio. De igual forma, esa posición privilegiada le permitió apropiarse de recursos reales del exterior con solo inundar de dólares la economía internacional. En Bretton Woods también se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento el que, por su parte, abastecería de capital a largo plazo para la realización de inversiones productivas.

Escasos tres años más tarde, Estados Unidos logra que un número significativo de países, por su participación en el comercio internacional, firmen el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Después de obstaculizar la ratificación de la Carta de La Habana, y con ello la creación de la Organización Internacional del Comercio, Estados Unidos propuso que se iniciaran negociaciones arancelarias tendientes a reducir las barreras al comercio y a fincar un sistema de libre comercio. Con el GATT y por inmejorable posición económica, Estados Unidos logra asociar un intercambio forzado, que se disimula como libre cambio, entre países con desigual grado de desarrollo, y una manipulación de los precios internacionales. Pero no solo eso, sino que el GATT tendía a crear una zona mundial de libre comercio abierta a Estados Unidos. En realidad, y esto es particularmente cierto para los países subdesarrollados, con el Acuerdo se actualizó la estrategia del intercambio de productos manufacturados por productos agropecuarios y mineros. Al mismo tiempo, se fomentó una industrialización incipiente de productos de fácil manufactura en los países subdesarrollados, convirtiéndolos, finalmente, en países subcontratistas de la economía y de las empresas transnacionales de Estados Unidos.

Por su parte, en los países latinoamericanos se desarrolla un proceso de cambio: de una economía agroexportadora a una industrializadora, sustitutiva de importaciones, que marca también el inicio de un reacomodo de las diversas fracciones de los bloques dominantes, en donde una de ellas intenta establecer su hegemonía mediante la movilización de masas valiéndose, para ello, de las aspiraciones de las clases explotadas. El populismo en América Latina, que tiene sus primeras manifestaciones en los años treinta, refuerza su presencia en la vida política de la región en los años de la posguerra. Los movimientos, los partidos y los gobiernos populistas (33) propugnan por el abandono de las

(33) El populismo fue el movimiento que derrocó al Estado oligárquico en América Latina, al tiempo que se constituyó en la fuerza política que definió las políticas de desarrollo económico. Fueron populistas: El peronismo argentino (1947-55 y 1973-76); el varguismo (1930-45 y 1951-54) y en menor medida el gobierno de Goulart, en Brasil; el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-57) y la fracción liberal de Eliacer Gaitán, en Colombia; los gobiernos de José Velasco Ibarra desde la década de los treinta hasta los años setenta, así como el movimiento Concentración de

políticas económicas de inspiración liberal, de las que se nutrían las oligarquías agroexportadoras.

Los populistas postularon la intervención amplia y directa del Estado en la vida económica. La política de industrialización que el populismo latinoamericano implantó en un gran número de países tendía -usando el lenguaje cepalino- a sustituir "el desarrollo hacia afuera" por un "desarrollo hacia adentro". Este es el proyecto de la burguesía industrial y comercial orientada hacia el mercado interno que, para poder desarrollarse como tal, inicia un proceso de sustitución de importaciones, aunado a la expansión del mercado nacional. Sabedora de que para lograrlo era necesaria una alianza con el proletariado y los demás sectores populares, se implementan proyectos con tintes nacionalistas, populares y antiimperialistas. El proyecto populista de desarrollo se basó en un creciente proteccionismo de las industrias nacionales, en el subsidio a la compra de maquinaria y en la también creciente participación del Estado en la creación de la infraestructura para tal desarrollo. Sin embargo, la introducción de la política económica y social distributiva (que se expresa en la ampliación de la legislación laboral, una mayor cobertura para la previsión social y el establecimiento de salarios mínimos) posibilitó el acceso de las clases subordinadas a los artículos de consumo primario e incluso a algunos de lujo, que de ninguna manera afectó las relaciones de producción de las formaciones económicas latinoamericanas.

A la política de asociación de capitales y empresas, así como la creciente interdependencia política, militar, económica y cultural que Estados Unidos propugnó sobre todo desde el fin de la guerra, se le antepusieron en América Latina, de alguna manera, nuevos estilos de liderazgo que enarbolaban banderas nacionalistas en todos los órdenes, de reformas institucionales y desarrollismo; por lo que las nacionalizaciones se pusieron al orden del día y proliferó la creación de empresas estatales en los sectores estratégicos de las economías del área, el Estado (que se acerca mucho a la idea de Welfare State anglosajón) pasó a ser un agente de transformación directa del proceso económico.

Esta claro que América Latina vivía uno de los momentos más críticos, contradictorios y trascendentales en su proceso histórico. En la posguerra, el populismo logró crear incipientes proyectos nacionales autónomos, en un momento de recuperación del

Fuerzas Populares, sobre todo con Carlos Luján Moreno (1949-60) y el Partido Nacionalista Revolucionario fundado en 1966, en Ecuador; el Partido Revolucionario Institucional de México, hasta la década de los setenta; el gobierno del Gral. Carlos Ibañez (1952-56) y el del democristiano Eduardo Frei (1964-70), en Chile; el gobierno de Luis Batlle Berres (1947-54), en Uruguay; los gobiernos del Movimiento Nacional Revolucionario (Faz Estenssoro y Siles Luazo) de 1952 a 1964 y el de Juan José Torres, en Bolivia; el APRA, la Unión

imperialismo, lo que provocó continuos choques con los intereses norteamericanos.

La depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial, habían creado un período relativamente largo y continuo de recesión en el comercio internacional, lo que represento para América Latina una oportunidad sin precedentes para industrializarse. La burguesía industrial latinoamericana ligada al mercado interno, en un esfuerzo de sustitución total o parcial de bienes importados, intentó aprovechar la situación. Sin embargo, "el incremento de la producción" manufacturera de bienes de consumo corriente, que se dio al iniciarse el proceso de sustitución, se tradujo en un incremento de la demanda de productos intermedios y de equipos en general" (34).

El carácter del modelo sustitutivo provocó al interior de los sistemas productivos nacionales en América Latina, un desarrollo industrial desintegrado y con graves problemas para autorreproducirse. Es decir, el intento de industrialización, al haberse emprendido de la más simple a lo más elaborado (de bienes de consumo a bienes de capital), a partir de la sustitución de importaciones, continuó superditado a la decisión de los países desarrollados (sobre todo para el suministro de maquinaria pesada, tecnología e insumos industriales).

El rápido agotamiento del modelo de sustitución de importaciones indujo a concentrar nuevamente los esfuerzos hacia la exportación, "se abandona el modelo de desarrollo hacia adentro" y se vuelve al más tradicional "hacia afuera", que se complementa con un novísimo "desde fuera" (35). En efecto, la fiebre del "desarrollismo" que se extendió por América Latina durante la década de los cincuenta, facilitó el camino para que el gran capital internacional se volviera a invertir en América Latina. De hecho el valor de las inversiones norteamericanas en la región, se incrementaron casi el doble en esos años y para 1967 eran 3.3 veces mayores que las existentes en 1946. Al mismo tiempo, sin embargo, la radicalización generalizada de los sectores populares llevan a alienarles el apoyo de los otros miembros de la alianza populista, pues para la burguesía industrial una cosa era valerse de la movilización de las masas para realizarse como clase "para sí", y otra muy distinta era percibir como la movilización popular adquiría una fuerza inicitada que por momentos ponía en entredicho la hegemonía del

Nacional Obrero y el gobierno de Belaunde Terry (1960-68), en Perú; el Partido Democrático en la República Dominicana; el Partido Nacional de José Figueres, en Costa Rica; el Partido Revolucionario de Arevalo y el gobierno de Arbenz, en Guatemala; Acción Democrática en Venezuela.

(34) Celso Furtado. La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos p. 141.

(35) Gustavo Ernesto Emmerich. Votos y Hegeemonía y dominación en Argentina, Brasil y Venezuela. p. 66.

bloque dominante. Se creaban así las bases internas objetivas para un posible surgimiento de un período de represión política en contra de los sectores que se radicalizaran. El incremento de la presencia del capital internacional (norteamericano, básicamente) en la industria local chocaba de manera frontal con la creciente radicalización de movimientos, partidos y gobiernos, lo que les valió un aumento de las presiones en todos los órdenes.

En este contexto, la región entra en un período de crisis global en el que se entremezclan la crisis de acumulación, la crisis de hegemonía y dominación al interior de cada formación social y la crisis geopolítica al sentir Estados Unidos amenazada su zona natural de influencia, aspecto que se agrava con la revolución cubana y su posterior socialización.

La corriente populista cuestionaba, con particular firmeza, el modelo de dominación política y explotación económica y proponía cambios necesarios para invertir el orden de las cosas hacia un desarrollo con las mayorías. Estados Unidos pondera la visión geopolítica -frente a su enemigo mundial y la capacidad que manifiesta América Latina para retomar ideas que van en detrimento de lo que Estados Unidos considera como su interés nacional- e instrumentaliza la militarización como eje de acción en la región, y como la mejor solución para afrontar la crisis que convergen al interior de los países de América Latina.

CAPITULO II

LA REVOLUCION CUBANA: EL ENEMIGO EXTERNO SE INTERIORIZA

Ha quedado establecido en el primer capítulo que la mayor amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, era la Unión soviética y con ella, la expansión del marxismo, con su nueva idea del futuro del mundo y del hombre, que cuestionaba no sólo la validez del sistema capitalista, sino que propugnaba por su desaparición. Asimismo, se dijo que América Latina, como la zona "natural" de influencia de Estados Unidos era una región de garantía indiscutible para la seguridad norteamericana. El marxismo, por ello, no podía tomar carta de naturalización en el hemisferio y éste sólo sería amenazado por aquello que Estados Unidos consideraba como la ambición expansionista de la Unión Soviética, es decir, por un enemigo externo al continente.

La situación cambiaría, radicalmente, escasos catorce años después. La revolución cubana haría pedazos el mito del enemigo externo en continuo acecho contra una indefensa América Latina y de unos Estados Unidos prestos a salvarla de las "garras" del comunismo soviético.

Las relaciones de Cuba con Estados Unidos eran la versión llevada al extremo de lo que para los países latinoamericanos representaba tener que convivir con los vecinos del norte. En efecto, para la década de los cincuenta la presencia norteamericana en la isla era una carga particularmente pesada para un país que se decía independiente. No sólo su economía se encontraba sujeta a la norteamericana, sino que este había logrado el arrendamiento a perpetuidad del territorio cubano, recuérdense los tratados de 1902 (Enmienda Platt) y 1903 (Convención Sobre la Base Naval de Guantánamo) como parte del precio que los cubanos tuvieron que pagar por haberles concedido una independencia puramente nominal. La historia de Cuba era un ejemplo claro de como el dominio norteamericano sobre los países de América Latina provenía de la exclusión de potencias ajenas al continente. De esa manera, "Cuba había pasado, sin transición, de posesión europea a satélite de los Estados Unidos" (1).

El 10 de marzo de 1952 tomó el poder en Cuba, mediante golpe de Estado, Fulgencio Batista. Habiendo alcanzado el poder en plena Guerra Fría contó siempre con el apoyo de Estados Unidos, quien había preferido como política general- a las dictaduras que cooperaban con él, a los gobiernos democráticos propensos a

(1) Gordon Connell-Smith, Los Estados Unidos y la América Latina, p. 258.

iniciar reformas que pudieran resultar desfavorables a sus intereses. Batista disolvió el Parlamento y depuso a las autoridades municipales que no se sometieron, al tiempo que implementaba un programa económico de tintes desarrollistas con claras ventajas para los intereses dominantes. Las manifestaciones de inconformidad no se hicieron esperar, pues el rechazo popular a la dictadura fue siempre muy marcado. La muestra más clara del repudio al gobierno de Batista fue el asalto a los cuarteles de Santiago y Bayamo el 26 de julio de 1953.

La represión y la corrupción se convirtieron rápidamente en hechos cotidianos de la vida pública y privada en la isla. Por su parte, la dependencia hacia Estados Unidos se hacía más evidente. En 1955, una vez liberados los rebeldes del 26 de julio, prepararon la lucha frontal contra la dictadura y ya para fines de 1957 estaban en condiciones de resistir los embates del ejército cubano. Desde entonces sus continuos triunfos motivaron que la lucha se extendiera por todo el país. Incapaz de detener la ola de rebeldía, Fulgencio Batista abandona la isla en las primeras horas del mes de enero de 1959.

La revolución cubana no fue un acontecimiento fortuito. Existían condiciones objetivas que orillaban a la búsqueda de un cambio radical. Existía, por una parte, una enorme dependencia hacia Estados Unidos, que controlaba no solo la industria de exportación más importante, sino incluso, el suministro de la energía eléctrica y de los hidrocarburos, parte de la industria lechera y el crédito bancario; por otra parte, la estructura económica era predominantemente agrícola, basada en una explotación extensiva de la tierra, organizada en latifundios tanto en las propiedades de las compañías extranjeras como en las de la oligarquía cubana. Asimismo, el desempleo y el subempleo permanentes y masivos, habían llegado al 25% de la fuerza de trabajo.

La imagen de Cuba en 1958 es la de un país cada vez más productivo, pero tributario del exterior y con una creciente desigualdad en la distribución del ingreso. Era necesario lograr aquello que en la guerra contra España no se había conseguido, debido a la presencia de Estados Unidos, la liberación nacional. De ahí la marcada característica antimperialista de la revolución cubana. Sin embargo, es evidente que sin cambios al interior en las relaciones económicas y con ellas en las de dominio, era imposible un cambio en las relaciones con el exterior, por ello se hacía necesario romper con las relaciones cuasi-feudales que el poder oligárquico mantenía en la isla (2).

Fidel Castro, el dirigente del movimiento rebelde que derrocó a la dictadura, afirmaba en los primeros meses del

(2) Vid. Carlos Rafael Rodríguez Cuba en el tránsito al socialismo, pp. 66-68.

triunfo de la revolución, que la ideología que la sostenía era humanista, y en el viaje realizado en abril de 1959 a Estados Unidos definió al humanismo como "justicia social con libertad y derechos humanos; humanismo significa -dijo- democracia, derechos humanos sin hambre, porque solamente una oligarquía puede ser erigida con hambre y miseria" (3). Por su parte, la Administración Eisenhower no tuvo reparos en reconocer al nuevo gobierno cubano. Es probable suponer, como lo afirma Connell-Smith, que "sobre los dirigentes estadounidenses influyó sobre todo la convicción -aparentemente justificada por la experiencia histórica, así como por las circunstancias corrientes- de que una vez Castro en el poder, se vería forzado por la posición de Cuba respecto a los Estados Unidos a modificar radicalmente sus propósitos revolucionarios" (4). Los acontecimientos posteriores, demostrarían lo contrario.

Conforme a una interpretación muy generalizada, la revolución cubana alcanzó a madurar ideológicamente debido a la presión norteamericana. El propio desarrollo de los sucesos parece confirmar tal suposición, pues inicialmente los impulsos renovadores contenidos en el movimiento revolucionario tuvieron una marcada tendencia democrático-burguesa.

Los sucesos se continuaron de una manera vertiginosa. El nuevo gobierno cubano procedió, de manera inmediata, a liquidar los instrumentos de represión de la dictadura: policía, ejército, marina y los servicios secretos. Al mismo tiempo se tomaron otras medidas que no atacaban de raíz al sistema establecido. Lo que se intentaba realizar era la instauración de una democracia política; de combatir la corrupción y sanear las finanzas públicas; así como los vicios burocráticos; de erradicar el desempleo; de ensanchar el mercado interno; y de diversificar la producción y el comercio exterior. Así pues, las posiciones para un incremento real de los salarios, la rebaja del costo de los servicios públicos y en las rentas de las casas, equivalían a una reducción sustancial del costo de la vida. Estas medidas, junto con la primera Ley de la Reforma Agraria, constituían acciones de una misma política de redistribución del ingreso, que tenía como propósito crear las condiciones internas adecuadas para iniciar un proceso de desarrollo.

Mención aparte merece la ley agraria proclamada el 17 de mayo de 1959, "tal y como lo anunciaba su preámbulo, al liberar a los campesinos del pago de la renta, aumentar el precio de sus productos y crear en el campo posibilidades de trabajo durante todo el año para los obreros agrícolas, traería como consecuencia la ampliación decisiva del mercado interior para las industrias nacionales de consumo" (5). Con la primera Ley de la Reforma

(3) Citado por Rubén Salazar Mallén. El pensamiento político en América. p. 288.

(4) Gordon Connell-Smith, op. cit., p. 259.

(5) Carlos Rafael Rodríguez, op. cit., p. 127.

Agraria se logró expropiar los latifundios de más de 30 caballerías (402,6 hectáreas), aunque las tierras así expropiadas no serían repartidas a los campesinos, sino que se utilizarían para organizar cooperativas de producción administradas por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria.

Esta actitud que incluía liberación de fuerza de trabajo y ampliación del mercado interno, encuentra similitud con las revoluciones democráticas-burguesas europeas y con las medidas agrarias que tomaron algunos gobiernos populistas en América Latina. Pese a estar dirigida a quebar el poder oligárquico, la ley del 59 afectó de manera decisiva a los intereses norteamericanos, por la sencilla razón de que en Cuba como en ningún otro Estado latinoamericano, se habían creado tantos intereses. La dictadura había reforzado la interconexión entre el régimen político y el ordenamiento socio-económico, por lo que las nuevas medidas -democráticas y redistributivas- iban necesariamente en contra del statu quo, afectando por igual a la oligarquía y a los intereses norteamericanos, de hecho, "por el carácter de la penetración imperialista en Cuba las tareas de la revolución democrática de liberación nacional estaban indisolublemente ligadas a la lucha contra el imperialismo" (6). La Ley propició la concertación de los norteamericanos y de la oligarquía local para la defensa de sus intereses contra el nuevo gobierno. Poco después de promulgada, comenzaron los ataques armados contra la revolución, ya que de avionetas provenientes de Florida caían bombas incendiarias sobre los cañaverales, rubro básico para el sostenimiento del nuevo régimen.

Puede constatar, sin embargo, que hasta ese momento "las intenciones del gobierno revolucionario, objetivamente consideradas, no suponían un cambio inevitable hacia posiciones socialistas" (7), empero cada medida adoptada por el gobierno cubano profundizó las discrepancias entre los elementos moderados y radicales del movimiento que derrocó a la dictadura, así como la hostilidad creciente de Estados Unidos.

La desconfianza y la inquietud de Estados Unidos aumentaban a medida que la revolución daba señales de no estar dispuesta a retroceder en su proyecto y, por el contrario, con cada medida adoptada reafirmaba su voluntad de continuarlo. Dicho proyecto, basado en un legítimo interés nacional, lesionaba los intereses norteamericanos. De ahí que emprendiera acciones decididamente orientadas a debilitar al gobierno revolucionario y lo tacharan prematuramente de comunista.

A menos de un año de la huida de Batista, se cortaron los créditos del exterior, lo que motivó -entre otras cosas- un acercamiento más estrecho con la Unión Soviética, quien en ese

(6) Gérard Pierre-Charles. Génesis de la revolución cubana. P. 157.

(7) Carlos Rafael Rodríguez, op. cit., p. 132.

de la visión norteamericana sobre el papel que debía jugar América Latina en su sistema de seguridad. Después de aquel 16 de abril en que Cuba se declaró socialista, no tardarían en trastocarse las relaciones interamericanas. El enemigo, estaba claro, no podía de manera efectiva venir desde afuera a amenazar la seguridad norteamericana. Estaba adentro de su propia zona de influencia y amenazaba -en términos reales- con expandirse por todo el continente.

Si Estados Unidos deseaba mantener, entonces, su dominio y control en el área debía abandonar las viejas ideas del enemigo externo, de la represalia masiva y de una América Latina pasiva sujeta al imperialismo norteamericano. Y así lo hizo.

II. 1. EXPANSION DE LA INFLUENCIA REVOLUCIONARIA EN AMERICA LATINA.

La revolución cubana no fue el factor disruptivo de la paz y la estabilidad en América Latina, sino solo un elemento catalizador del descontento que existía. Sin embargo, acarreó una serie de acontecimientos que parecieron cimbrar los cimientos del dominio norteamericano en la región.

En el inevitable encuentro con Estados Unidos, los dirigentes cubanos pronto percibieron que la revolución sólo podría sobrevivir si contaba con un apoyo lo suficientemente fuerte que le permitiera paliar las empujadas de los norteamericanos. La Unión Soviética intentó capitalizar la situación a su favor y ofreció su apoyo al régimen cubano. Pero si para Estados Unidos, la sola existencia de un Estado socialista aliado con la Unión Soviética, era una amenaza a su seguridad y a la paz del continente (conforme a su propia idea de seguridad nacional), también lo sería la oleada de movimientos guerrilleros que recorrió durante la década de los sesenta y primeros años de la siguiente todo el continente, enmarcada dentro del cuadro político resultante de la victoria de la revolución cubana, que ejerció una gran influencia para que prácticamente en toda América Latina se intensificara un sentimiento antimperialista; para que se intensificara también el cuestionamiento del reformismo y se pusiera la alternativa socialista al orden del día.

Conforme se radicalizó la revolución, Estados Unidos intentó desprestigiarla ante la comunidad internacional. En abril de 1961 el Departamento de Estado publicó el Libro Blanco sobre Cuba, en el que se afirmaba que los dirigentes revolucionarios habían traicionado su proyecto original y que habían puesto a Cuba en manos de potencias extrahemisféricas. Empero, el objetivo no prosperó, por el contrario surgieron manifestaciones de inconformidad y rebeldía influidas por el triunfo de los guerrilleros cubanos.

Sin embargo, esto no implica que con la revolución cubana se haya hecho efectiva la llamada Teoría del Dominó (falling dominoes), basada en un efecto demostración. Sucedió, más bien, que los pueblos latinoamericanos sentían próximo el agotamiento de los modelos desarrollistas que --contundiendo crecimiento con desarrollo-- habían emprendido políticas económicas de crecimiento sin una adecuada redistribución del ingreso, aunado también a una creciente intolerancia política y al gradual abandono de posiciones populistas por algunos gobiernos del área.

Frente al sufragio --que para muchos latinoamericanos ya resultaba inútil-- ofrecido por las sociedades democrático-burguesas, el ejemplo cubano proponía una alternativa distinta por la vía de levantamiento armado con el que podía iniciarse, se creía, la construcción de una sociedad mejor. La revolución cubana no sólo había contribuido a modificar las tradicionales relaciones Estados-América Latina y a transformar las alianzas de los partidos latinoamericanos dentro del Estado, sino que con ella se había formulado una auténtica alternativa ideológica para los movimientos latinoamericanos de izquierda; pero los rebeldes de Sierra Maestra habían propuesto algo más que una simple ideología, habían propuesto una estrategia revolucionaria: la guerra de guerrillas.

En 1960 Ernesto Guevara había establecido en su libro La Guerra de Guerrillas los postulados fundamentales de la teoría del foco:

1. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército;
2. No siempre hay que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución;
3. En la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo.

Los principales dirigentes de la revolución cubana estimaban que tales postulados servirían para el desarrollo de la lucha revolucionaria en América Latina y podrían aplicarse a cualquiera de los países de la región donde existieran las condiciones objetivas como las hubo, en su momento, en Cuba.

De manera inmediata la influencia de la revolución cubana se hizo sentir a todo lo largo del continente. La teoría y la práctica del foco insurgente se generalizó para incluir, primero, una ola insurreccional contra las dictaduras del Caribe, encabezadas por líderes exiliados que encontraron un apoyo efectivo en el gobierno revolucionario de Cuba, en un intento por derrocar a Trujillo en la República Dominicana y a Duvalier en Haití, principalmente; después las actividades guerrilleras se extendieron para enfrentar a gobiernos democráticos como los de Acción Democrática en Venezuela y Acción Popular en Perú. Las

guerrillas se fueron organizando subsecuentemente en los países donde la lucha legal estaba --aunque sea en parte-- limitada y donde era necesario para los sectores dominados un cambio en las condiciones económicas y políticas prevalecientes. Conforme a la experiencia cubana, el principal enemigo era el poder oligárquico, reforzado en varios países con una dictadura militar, por lo que el objetivo central de la insurgencia fue su eliminación a través del apoyo campesino, al tiempo que se desataba una lucha contra su aliado imperialista. La guerrilla desataría finalmente una guerra de liberación nacional con la que se intentó eliminar la opresión oligárquica y la dominación imperialista.

La teoría del foco se generalizó, por último, para cubrir a la región como un todo, el inicio y fin de esta etapa se desarrolló en Bolivia, la que se convertiría --conforme a las tesis de Guevara y Debray-- en el centro de radiación para la vietnamización de América Latina. Con su "Mensaje a la Tricontinental", Guevara sistematiza y hace público el deseo de levantar a América Latina, en su conjunto, en contra del imperialismo norteamericano, identificado ya como el verdadero enemigo de los pueblos latinoamericanos (10).

La influencia de Cuba en la política y estrategia de los movimientos insurreccionales es evidente, en un balance de la proliferación de las guerrillas en la década de los sesenta:

Encontrándose la República Dominicana en la esfera de influencia inmediata de la revolución cubana, su Partido Comunista fue reorganizado, asumiendo su liderazgo el grupo cubano. En 1959 se organizó el movimiento guerrillero "14 de junio", al mando del Comandante Enrique Jiménez Maya, que no pudo, sin embargo, poner en peligro la permanencia de la dictadura de Trujillo.

En Haití fue reorganizado inmediatamente el Partido Comunista, bajo la influencia de la nueva dirigencia cubana con el propósito de derrocar a la dictadura. Empero, la fortaleza del Gobierno de Duvalier minimizó cualquier intento de rebeldía. En otro país de la Cuenca del Caribe, en Honduras, el ala pro-cubana del Partido Comunista asumió el control del Comité Central, sin lograr resultados alentadores para el inicio de la lucha revolucionaria.

La represión desatada por Anastasio Somoza preparó el terreno para que en 1957, poco después del triunfo de la revolución cubana, comenzaran a surgir diversos focos guerrilleros en Nicaragua. Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge y

(10) Vid. Donald Hodges. The Latin American revolution. Politics and strategy from Apro-marxism to guevarism. pp. 101 et seq.

Silvio Mayorca, jóvenes de la generación marxista nacida bajo la influencia de la revolución cubana, ya desde entonces habían tomado el camino de las armas para enfrentarse a la dictadura y en 1962 fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional que, continuando con la lucha campesina de Sandino, se constituyó un movimiento guerrillero para aniquilar el poder oligárquico en Nicaragua y la influencia de Estados Unidos en ese país.

Aparecieron en Panamá en 1959, siguiendo el ejemplo de la revolución cubana, dos pequeños grupos guerrilleros que fueron rápidamente controlados por la Guardia Nacional. El ejemplo de la efímera guerrilla panameña ilustra con claridad como con frecuencia los guerrilleros se lanzaban a la lucha espoleados por el ejemplo cubano, sin que realmente existieran las condiciones propicias para hacerlo.

La forma en que Estados Unidos resolvió la creciente tendencia nacionalista del Gobierno de Arbenz en 1954, exacerbó en muchos sectores guatemaltecos el espíritu antiimperialista. El 13 de noviembre de 1960, jóvenes oficiales nacionalistas, entrenados en técnicas contrainsurgentes por Estados Unidos, se sublevaron contra el ejército e intentaron derrocar al Gobierno Ydigoras, sin lograrlo. Entre esos oficiales se contaban Yon Sosa, Turcio Lima y Luis Trejo, quienes decidieron fundar el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) con el apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista). En diciembre de 1962 ellos mismos decidieron fundar las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) para consolidar su lucha guerrillera de base campesina. En la radicalización de la lucha influyó el hecho de que el Gobierno haya consentido utilizar a Guatemala como campo de entrenamiento de la CIA, en la preparación de la invasión de Bahía de Cochinos. La lucha continuó hasta 1966 cuando el Gobierno de Mendez Montenegro lanzó una ofensiva contrainsurgente en la que murieron Turcio Lima y Yon Sosa. Fue hasta 1973 en que se realiza la reorganización de las FAR y del PGT, se crea el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y más tarde la ORFA.

Con la caída del dictador Pérez Jiménez, asume la presidencia en Venezuela Rómulo Betancourt. Sin embargo, adopta dos posiciones que contribuirían posteriormente a la aparición de grupos guerrilleros. Por otra parte, no respeta del todo el Pacto del Punto Fijo al no integrar en su Gabinete a miembros del Partido Comunista y, por otro lado, asume una posición de fuerza en contra de las manifestaciones populares. Así las cosas, una fracción del ala juvenil de Acción Democrática funda un nuevo partido, el Acción Democrática Izquierdista, que ese mismo año se transformaría en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Ideado como un movimiento pacífico, pronto cambio debido a los abusos y arbitrariedades que el Gobierno de Betancourt continuó cometiendo y por no cumplir con la prometida reforma agraria, así como por su estrecho acercamiento a Estados Unidos. Poco después aparecerían auténticos grupos guerrilleros --casi todos surgidos del Partido Comunista-- que en 1962 iniciaron sus ataques. El

principal fue el Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos, encabezado por Douglas Bravo, Elías Manuít Camero y Fabricio Ojeda; el segundo grupo en importancia, fue "El Charal" dirigido por Juan Vicente Cabezas; otras guerrillas menores fueron encabezadas por Luben Petkoff y José Manuel Saher. Tras los fracasos iniciales, las principales guerrillas decidieron unirse y formaron, el 20 de febrero de 1963, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional.

En Argentina se radicalizan de manera inmediata diversos grupos guerrilleros como el movimiento "Uturuncó" de peronistas revolucionarios en el noroeste de Tucumán, el Movimiento Peronista Revolucionario "Montoneros", las fuerzas Armadas Peronistas, con una orientación decididamente influida por el movimiento cubano, aunque el segundo de los mencionados tenía un radio de acción urbano. En unión con el Ejército Revolucionario del Pueblo, de orientación trotskista, y con las Fuerzas Argentinas de Liberación, surgida de las juventudes del Partido Comunista Argentino, contribuyeron a que los militares efectuaran elecciones que permitieron el retorno al poder del peronismo.

Cancelado todo espacio legal para la izquierda paraguaya, por la dictadura de Stroessner, y en un momento cuando la influencia de la revolución cubana se hacía presente en todo el continente, representantes del Partido Comunista y las juventudes febreristas organizaron el Frente Unido de Liberación Nacional (FULN); se crearon, asimismo, la columna guerrillera Yororó y el Movimiento 14 de Mayo, con bases rurales y tendencias foquistas Empero, para 1962 las fuerzas gubernamentales se había impuesto sobre los grupos guerrilleros.

La nueva izquierda revolucionaria brasileña surgida luego del triunfo cubano, tuvo su primera expresión en la Política Obrera (FOLOP), la que planteó por primer vez el carácter socialista de la revolución brasileña; inspiradas también en el ejemplo cubano, las ligas campesinas dieron origen al Movimiento Radical Tiradentes; asimismo la influencia cubana se hizo sentir entre los jóvenes cristianos de izquierda que fundaron Acción Popular (AP). Pero no fue sino hasta que los militares tomaron el poder que la dirección de la FOLOP, la organización proclamó a la guerra de guerrillas como el camino a seguir frente a la nueva situación e instaura el primer foco guerrillero en el país. En 1966 se crea, asimismo, el Movimiento Nacional Revolucionario con una tendencia foquista, pero es aniquilado el año siguiente, durante el cual surge el movimiento encabezado por Carlos Marighella: Acción Liberadora Nacional.

Como en cada una de las formaciones sociales aludidas, Colombia presenta también un desarrollo particular, antes de la revolución cubana ya contaba con una larga tradición de lucha guerrillera, con la singularidad de haber surgido por una pugna interburguesa entre el partido Liberal que intentaba apoderarse del poder, que era detentado por el Conservador. La violencia

partidista concluyó con el prebiscito por el que se logró crear el Frente Nacional, para la rotación de ambos partidos en el gobierno. En 1963 estaban prácticamente eliminadas las bandas armadas, aunque se conservaron los grupos de autodefensa. En 1964 el ejército intentó eliminarlos por la fuerza, lo que provocó su radicalización. En efecto, poco después de los ataques, los grupos de autodefensa expresaron que les habían sido cerradas las puertas de la lucha democrática, pacífica y legal, por lo que en adelante se inclinarán por la lucha armada. En 1965 se crea el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encabezado por Fabio Vázquez, apegado estrictamente a la estrategia sistematizada por Guevara (foquista-rural); un año después de los diversos grupos nacidos de la autodefensa realizaron una unidad estratégica que se proponía la toma del poder político y crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En 1967 se crea el Ejército Popular de Liberación Nacional. Mención aparte merece Camilo Torres, que encabezó al pacífico Frente Unido del Pueblo, pero que en cuanto encontró severas restricciones para llevar a cabo su labor, se unió al ELN, el grupo guerrillero que más fue influido por la revolución cubana y cuyos objetivos eran liberar al pueblo de la explotación oligárquica y del imperialismo, lo que anteriormente los dirigentes cubanos habían expresado como la tarea revolucionaria en América Latina.

Con una larga tradición democrática, un sistema político abierto y con amplias oportunidades para la participación popular que, por otra parte, empezaba a resentir lo equivoco de la conducción económica, Chile vivió exento de acciones guerrilleras durante la década de los sesenta. Sin embargo, en 1965 se creó el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), con la fusión de las secciones juveniles de los partidos socialistas y comunistas (Vanguardia Revolucionaria Marxista) y del Partido Obrero Revolucionario (trotskista). Influido por la revolución cubana y por el desarrollo de los movimientos guerrilleros en toda la región, el MIR planteó que la lucha de clases revestiría la forma de una guerra revolucionaria, sin perjuicio de utilizar todas las demás formas de lucha legales e ilegales. Pese a que no emprendió acciones guerrilleras, en poco tiempo se convirtió en uno de los movimientos pro-cubanos más numerosos e influyentes de América Latina.

La crisis política que atraviesa Ecuador al final de la década de los cincuenta, culmina con la matanza ordenada por el Presidente Camilo Fonce en 1959, por lo que en las elecciones de ese año el electorado apoyó mayoritariamente el retorno del populista Velasco Ibarra, que asume por tercera ocasión el poder en 1960, año en que también la sección juvenil del partido Comunista, conocida como Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatoriana (URJE), se transforma en una organización paramilitar que logró crear, aunque sin éxito, el único foco guerrillero durante los años sesenta. Su actitud, lejos de crear condiciones revolucionarias viables, contribuyó a forjar una fuerte reacción de la derecha ecuatoriana.

México tampoco se vio privado de la proliferación de grupos guerrilleros, los que fueron rápidamente controlados, como la guerrilla del profesor Arturo Gámiz que en 1965 fue derrotada cuando intentaba tomar Ciudad Madero, en Chihuahua.

Perú fue sin duda el país que más actividad guerrillera tuvo en los años sesenta. Hasta 1959 nadie de la izquierda revolucionaria peruana parecía tomar seriamente la captura del poder como finalidad concreta e inmediata de la lucha, ni examinaba su conducta real en esos términos. La revolución cubana significó para la izquierda peruana un nuevo punto de orientación ideológico y político. En octubre de 1959 durante la Cuarta Convención del APRA, un grupo de jóvenes apristas encabezados por Luis de la Fuente Uceda criticó abiertamente tanto al gobierno de Manuel Prado como a la actitud de su partido frente a aquél. El grupo fue expulsado del APRA. No obstante fundaron el "Comité Aprista de Defensa de los Principios y de la Democracia Interna", que pronto cambió de nombre por el de Comité Aprista Rebelde, para que un año después se llamara APRA Rebelde. En junio de 1962 bajo la influencia y en pleno contacto con la dirigencia cubana, rompió definitivamente con el APRA y se denominó Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), el cual emitió su documento político más importante en julio de 1964 siguiendo los lineamientos marcados por la estrategia cubana. Para ese entonces habían surgido otros grupos guerrilleros procubanos, como el de Javier Heraud que fue aniquilado el 15 de mayo de 1962. Pese a que el MIR fue derrotado en 1965, ese año bajo los principios establecidos por Luis de la Fuente se formaron varios grupos guerrilleros que finalmente se unieron en torno a Guillermo Lobatón, en la guerrilla Tupac Amaru. En 1963, con los seguidores de Heraud se formó el Movimiento 15 de Mayo (M-15M), y poco después con las juventudes comunistas las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Tras la muerte de De la Fuente el M-15M cambia su nombre por el Ejército de Liberación Nacional para llenar el hueco dejado por el MIR. También mención aparte merece el movimiento campesino iniciado por Hugo Blanco en 1957, al fundar el Frente de Izquierda Revolucionario de orientación trotskista, pero debe destacarse que con la revolución cubana deja de ser un movimiento estrictamente reivindicativo del campesino y asume una voluntad efectiva de poder, como lo demuestran sus documentos posteriores a 1963.

Desde 1960 Raúl Sendic realizó trabajos de politización en algunos sectores rurales en Uruguay, pero no es sino hasta 1963, una vez que abandona al partido Socialista, que se coordina con otros sectores de la izquierda para iniciar la lucha revolucionaria, con la creación del Movimiento de Liberación Nacional "Tupamaros". Tres años después esa guerrilla realiza su primer enfrentamiento contra las fuerzas armadas del Gobierno, siguiendo de cerca la estrategia de guerra de guerrillas, con una importante modificación: la lucha no sería rural, sino urbana. El surgimiento de los Tupamaros es producto del desgaste del tradicional sistema económico uruguayo agro-exportador, que para

entonces entra en una profunda crisis y de la inviabilidad de mantener un sistema político que ya no respondía a la nueva situación del país. Los Tupamaros no sólo piden una reordenación de la economía nacional, sino que también luchan por una reivindicación nacionalista frente a la cada vez mayor presencia del capital extranjero, así como la exigencia de que el ejército deje de influir en las decisiones políticas de un país que ha dejado de parecer desde entonces lo que muchos vieron como "la Suiza de América". Por su parte, la influencia de la revolución cubana es innegable no sólo para la formación de los Tupamaros, sino también para la formulación de su estrategia de lucha y por el carácter socialista y antimperialista que asumió.

En Bolivia la influencia de la teoría del foco no se manifestó de manera abierta --salvo por las incursiones de las guerrillas peruanas-- debido sobre todo a la labor desarrollada por el gobierno revolucionario en unión estrecha con la Confederación Obrera Boliviana (1952-1964), sino hasta bien entrada la década de los sesenta, cuando Guevara y Debray eligieron su territorio para formar un foco guerrillero con el que se vietnamizaría a toda América Latina. El plan político inmediato de la guerrilla fue convertirse en un irritativo para el Gobierno del General René Barrientos y para el sistema de seguridad interamericano.

Visto así el panorama de la lucha armada en América Latina, la revolución cubana le proporcionó dos elementos de gran significación. Por un lado, la novedad de la estrategia adoptada que se alejaba de todos los esquemas de lucha de la izquierda tradicional en la región y, por otro, el estímulo para conformar una efectiva voluntad de poder como punto de partida de la lucha revolucionaria.

Sin embargo, la posición de ayuda y de franco apoyo que los dirigentes cubanos otorgaron, en primer instancia, a dirigentes rebeldes caribeños y, posteriormente, a todos los guerrilleros que de una u otra forma adoptaron las tesis emanadas de la revolución cubana, le acarrearón al nuevo gobierno una embestida diplomática que finalmente lo aisló en el continente. Hecho que, por otra parte, demostraba la magnitud del avance de las fuerzas revolucionarias.

Escasos cuatro meses después del triunfo cubano, Panamá elevó una energética protesta, el 27 de abril de 1959, ante el Consejo de la OEA en la que denunciaba la invasión de su territorio por fuerzas armadas provenientes de Cuba. En julio del mismo año, la República Dominicana llamó la atención del Consejo de la OEA "sobre la grave situación que ha surgido en el área del Caribe como resultado de dos invasiones del territorio dominicano perpetradas por grupos armados, organizados, entrenados y equipados en territorio de la República de Cuba" (11). Al mes

(11) Citado por Gordon Lonnel-Smith. El Sistema Interamericano. p. 284.

siguiente durante la V Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, Haití se quejó por una invasión de su territorio que --afirmaba-- había partido de Cuba. En enero de 1962 se efectuó la VIII Reunión de Consulta del Consejo de la OEA, a petición de Colombia, con el objeto de considerar "la amenazas a la paz y a la independencia política de los Estados americanos que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales encaminadas a quebrantar la solidaridad americana (y para) determinar las medidas que convenga tomar para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente" (12). A iniciativa de Venezuela se celebró en 1964 la IX Reunión de Consulta para estudiar "las medidas que deben adoptarse frente a los actos de intervención y agresión del Gobierno de Cuba que afectan la integridad territorial y la soberanía de Venezuela, así como la vigencia de sus instituciones democráticas" (13).

Siendo la lógica de la política exterior de cualquier Estado constituir un entorno favorable a su proyecto nacional, Cuba no sólo ofreció su apoyo y su contribución para el éxito de los movimientos rebeldes en América Latina, sino que fomentó su creación y proliferación. Aún más, en enero de 1966, el Gobierno cubano fue el anfitrión de la Primera Conferencia Tricontinental en la que se creó la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) encaminada a promover la revolución en la región. En la primera conferencia de la OLAS, un año más tarde, se proclaman a los principios del marxismo-leninismo como orientadores del movimiento revolucionario en América Latina y a la guerrilla como el método más eficaz para el éxito de la revolución; asimismo, se establecen como una de sus finalidades coordinar la lucha contra el imperialismo norteamericano para lograr una respuesta conjunta de los pueblos latinoamericanos en su estrategia continental.

Desde 1962 cuando escribe Guerra de guerrillas, un método, Guevara entiende que habrá una profunda reacción norteamericana al proceso revolucionario en América Latina y, desde entonces, cree decididamente en la creación de una organización continental de revolucionarios para lograr el triunfo:

Los yanquis intervendrán por solidaridad de intereses y porque la lucha en América es decisiva. De hecho, ya intervienen en la preparación de las fuerzas represivas y la organización de un aparato continental de lucha. Pero de ahora en adelante lo harán con todas sus energías, castigarán a las fuerzas populares con todas las armas de destrucción a su alcance; no dejarán consolidar el poder revolucionario ... Dado este panorama americano, se hace difícil que la victoria se logre y consolide en un país aislado. A la unión de las fuerzas represivas debe

(12) Citado por Ismael Moreno Pino. Orígenes y Evolución del Sistema Interamericano, p. 199.

(13) Ibid. p. 207.

contestarse con la union de las fuerzas populares (14).

Sin embargo, pese a entender que la expansión de la revolución en América Latina fomenta la reacción norteamericana - o quizá debido a eso-, se apoya el proceso con el fin de exacerbar la lucha. Los dirigentes cubanos desviaron su atención poniendo demasiado énfasis en el imperialismo, olvidándose de las fuerzas institucionales internas -en los países de la región- que finalmente llevarán a una oleada de reacción triunfante por todo el continente. A la distancia, es claro que el deseo de continentalizar la lucha contribuyó a la imposición de la reacción, y es que la estrategia continental fomentó, al igual que toda la violencia revolucionaria, a que sectores favorecidos por el desarrollismo -como las clases media- se inclinaron hacia la derecha para apoyar a los proyectos conservadores.

El proyecto cubano, aceptado por la gran mayoría de los movimientos guerrilleros latinoamericanos en la década de los sesenta, se basó en la errónea interpretación de la existencia de problemas que le eran comunes a toda América Latina, enmarcadas - además - en el contexto de un desarrollo histórico común. Se generalizó el ejemplo cubano hasta convertirlo en un modelo aplicable a todas partes. La estrategia revolucionaria para América Latina, dice Carlos Tello, se basó "en una interpretación incorrecta del proceso revolucionario en Cuba y en la suposición, injustificada, de que sus lineamientos eran válidos para todo el continente" (15). El costo pagado por América Latina sería enorme.

En la esperanza y en el fracaso se soslayaron dos hechos determinantes: por un lado, que la visión estratégica de seguridad nacional norteamericana para América Latina no era la misma que en 1958 y, por otro lado, el cambio operado en los ejércitos nacionales de entonces, en relación a los de los años cincuenta.

II. 2. LA NUEVA SITUACION DE AMERICA LATINA EN LA ESTRATEGIA DE LA SEGURIDAD NORTEAMERICANA.

Ha quedado apuntado que desde los primeros años de la década de los cuarenta, Estados Unidos implementó una serie de medidas para garantizar la defensa del hemisferio ante cualquier agresión externa. Sin embargo, en la década de los sesenta esta política cambió radicalmente.

El presidente Kennedy, en su primer mensaje al Congreso sobre asuntos militares en marzo de 1960, expresó que

(14) Ernesto Guevara. "Guerra de guerrillas. un método" en Michael Lowy. El marxismo en América Latina (de 1900 a nuestros días). Antología. p. 267.

(15) Carlos Tello Díaz. "El regreso del Che" en Notas, No. 118 p. 17.

la seguridad del mundo libre está amenazada no solamente por la posibilidad de un ataque nuclear, sino también por su lento desgaste en la periferia. Pese a nuestro poderío estratégico, esta amenaza proviene de las fuerzas de subversión, infiltración, intimidación, agresión encubierta e indirecta, revolución interna, guerra de guerrillas o una serie de guerra limitadas (16).

Se iniciaba pues, una reformulación de la estrategia norteamericana para garantizar lo que Estados Unidos ha considerado como su derecho de defensa -para preservar su seguridad- en el continente americano.

El cuestionamiento y la reelaboración son globales. No sólo se percibe la inutilidad del sistema de seguridad continental, sino -sobre todo- la falta de aplicación de la estrategia de la represalia masiva. La Unión Soviética no se comprometía directamente. No había ataques frontales contra los "pueblos libres" que resisten a presiones externas, como lo aseguraba la Doctrina Truman.

Estados Unidos apoyo en principio el proceso descolonizador desatado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el cual llegaría a su máxima expresión en los últimos años de la década de los cincuenta y primeros de la siguiente. Empero, nunca comprendió cabalmente las causas objetivas de los pueblos coloniales, no sólo de luchar por su independencia, sino también el cuestionamiento que muchos hicieron a las relaciones económico-sociales, a las que continuarían sometidos en caso de no haber una transformación real de estas. Por su parte, la Unión Soviética sí pareció comprenderlas y por ello estuvo en condiciones de apoyar y fomentar a los movimientos guerrilleros (hecho que también le significaba una importante ventaja táctica).

Fronto entendió Estados Unidos que no poseía una estrategia militar capaz de hacer frente a esta nueva situación en la que los pueblos que supuestamente deberían ser "libres", fomentaban el establecimiento de regímenes que no coincidían con el patrón liberal-democrático propuesto por los norteamericanos. La represalia masiva condenaba a Estados Unidos a la inacción a partir de utilizar lo nuclear en conflictos periféricos. No había condiciones políticas ni técnicas para enfrentar la subversión y la guerrilla con dicha estrategia. La Administración Kennedy intentaría poner remedio a la situación.

En América Latina, cuyo proceso de independencia había prácticamente concluido en el siglo pasado, el problema adquirió

(16) J.F. Kennedy. "Recommendations relative to our defense. Budget". HR Doc. no. 123, Congress. Washington, pp. 1 et seq., citado por J. Sain-Fernandez De la seguridad nacional, p. 167.

otro matiz. La gran mayoría de los pueblos de la región no enfrentaban el problema de la colonización, sino el de la subyugación económica y la presión político-militar por parte de Estados Unidos. No se trataba, pues, de luchar por la descolonización, sino de consolidar el proceso de independencia en algunos casos, o bien, de liberarse de viejas dictaduras personalistas que se sostenían -invariablemente- gracias al apoyo norteamericano.

La Revolución Cubana y sus secuelas -su viraje socialista, a su apoyo decidido a otros movimientos guerrilleros de América Latina y la posibilidad de emplazar armamento nuclear soviético en la región- finalmente sacudieron a todo el sistema norteamericano de seguridad y defensa. Estados Unidos implementó entonces, sistemática y coherentemente una doctrina, una financiación y una administración contrarrevolucionarias. Se iniciaba así, una nueva era en la historia del continente. El enemigo -no de América Latina, sino de Estados Unidos- estaba en el interior del hemisferio y adentro había que combatirlo.

Si Estados Unidos deseaba continuar ejerciendo su influencia en el mundo subdesarrollado y preservar lo que estimaba era su seguridad, necesitaba con urgencia de una estrategia coherente para la intervención, particularmente en sus relaciones con el mundo subdesarrollado. Así pues, la respuesta norteamericana debía ser acorde a la nueva situación, responder a todas las posibilidades de agresión.

La Administración Kennedy, en términos militares, adoptó la doctrina estratégica de la respuesta flexible, proyectada por el General Maxwell Taylor en los últimos años del gobierno de Eisenhower. Bajo este concepto global se encerraba el de la estrategia de la contrainsurgencia, aplicable a todos los movimientos guerrilleros de los países subdesarrollados. La Administración Kennedy se propuso no solo ampliar su potencial en armas nucleares, sino preparar a Estados Unidos para enfrentar a los movimientos guerrilleros, no a través de apoyo directo a gobiernos locales sino por medio de las propias fuerzas de estos últimos, además de ponerlos en posibilidades de resolver de manera efectiva los problemas económicos, sociales y políticos.

En este contexto, se cambió la ayuda militar norteamericana otorgada a América Latina para la defensa hemisférica contra un supuesto enemigo externo (U.R.S.S.), por la ayuda a la seguridad de los regímenes establecidos, contra un potencial enemigo interno (movimientos insurgentes con apoyo o de inspiración comunista). De esta manera, la Revolución Cubana y la influencia que tuvo para que diversos sectores sociales latinoamericanos cuestionaran no solo las formas de gobierno a que estaban sometidos, sino las mismas relaciones económico-sociales que los oprimían, fueron el argumento utilizado por Estados Unidos para hacer "del panamericanismo un movimiento dirigido contra el nuevo enemigo potencial de Estados Unidos en América Latina: el

socialismo" (17)

Debe quedar claro que la política de defensa externa (seguridad hemisférica) para el continente, implementada por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, se abandonó en favor de una política de seguridad interna (seguridad intercontinental). La llamada crisis de los misiles (octubre de 1962) no hizo sino confirmar ese hecho. El enemigo para la seguridad norteamericana en el continente no podría ser directamente la Unión Soviética, sino los propios pueblos latinoamericanos que se levantaran en contra de la situación que los acontecimientos de la posguerra habían reforzado: una relación de dependencia económica y una subordinación política y militar reales hacia Estados Unidos. Es decir, en contra de los intereses básicos norteamericanos, lo que incluía su propia seguridad.

La proyección intrahemisférica de la seguridad nacional norteamericana derivó en una política encaminada a subvertir o desestabilizar a las naciones latinoamericanas en las cuales las ideas socialistas -reales o imaginarias- fueran ganando terreno, con el fin manifiesto de incrementar la capacidad de Estados Unidos para la manipulación externa de los asuntos internos en los países de América Latina.

En este nuevo período de las relaciones intrahemisféricas, caracterizado por una recurrente preocupación por la seguridad, se renueva -por otros medios- la violencia sistemática de la "diplomacia" norteamericana hacia los países latinoamericanos. La desestabilización, la contrainsurgencia y la contrarreformación fueron los elementos fundamentales en la introyección de las concepciones de seguridad nacional de Estados Unidos en América Latina.

La preocupación norteamericana para la preservación de su seguridad, durante la década de los sesenta, así como la orientación táctica que tenía fueron claramente descritas por Richard Barnett, cuando escribió que "la mayor parte de las fuerzas de objetivos generales se mantienen, no para defender a nuestros aliados de un ataque exterior, sino para defender a sus gobiernos de su propio pueblo" (18).

Durante la Administración Kennedy todo se mueve en ese sentido. En los tres años que duró su gobierno, creció como pocas veces el aparato militar norteamericano y en especial los medios de lucha contra los movimientos de liberación que alcanzaron hasta un 60% de crecimiento (19).

(17) Jorge Alberto Lozoya. El ejército mexicano p. 100.

(18) Op. cit., p. 44.

(19) Cfr. Dieter Senghaas, op. cit., pp. 78 y 85.

El Secretario de Defensa del Presidente Kennedy expresó ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes que el reconocimiento de la "ausencia de amenazas exteriores en este hemisferio, nos ha ayudado a reorientar las energías de los signatarios del Tratado de Río de Janeiro hacia los problemas comunes de la insurrección armada" (20). Dicha reorientación estratégica se encaminó a incrementar la capacidad militar de las fuerzas armadas latinoamericanas para que estuvieran en posibilidad de controlar el ambiente político y la seguridad interna en sus países.

La confrontación soviético-norteamericana en el plano ideológico y la evolución que experimentó en el plano político y militar derivó, en la década de los sesenta, en la idea de que la guerra sólo podría darse -en términos reales- como una guerra convencional y limitada. La estrategia de la reacción flexible se encaminaba, en el fondo, a esa dirección.

A partir de entonces y hasta bien entrados los años setenta, los estratègas norteamericanos sostuvieron que la verdadera guerra era de contenido ideológico-político, abarcaba todo el mundo y sus frentes de combate no sólo se encontraban en aquellos gobiernos que se apartaban de los intereses norteamericanos, sino también dentro de cada sociedad con aquellos grupos que intentaban apoderarse del gobierno en sus países para implantar regímenes no acordes con la tradición política norteamericana. A los primeros, era necesario desestabilizarlos y -llegado el caso- derrocarlos mediante golpes de Estado. A los segundos, debería aniquilarlos con sus propios medios: la contrainsurgencia.

Lo que condujo a esa posición, fue la convicción de que la guerra ideológico- subversiva era el medio a través del cual el movimiento comunista internacional pretendía conquistar el mundo, valiéndose de las condiciones de los países subdesarrollados y utilizando como títeres a todos los que luchaban por mejorar sus condiciones de vida.

América Latina no podía mantenerse al margen de esta nueva visión de la guerra. Por el contrario, fue el área de influencia norteamericana en donde mejor se sistematizó su aplicación, pues "otra Cuba debía ser evitada".

En América Latina fue en donde más se experimentó con la idea de que la guerra había dejado de tener frente y retaguardia, lo que existía era un enemigo interno aliado del comunismo, cuya acción se encaminaba a subvertir el orden establecido. Las tácticas que los norteamericanos concibieron, desarrollaron y difundieron fueron la guerra contrainsurgente y la acción cívica, para las cuales implementaron programas de entrenamiento a los oficiales latinoamericanos, cuya meta era proporcionarles los

(20) Citado por Saxe-Fernández. Proyecciones hemisféricas de la paz americana, p. 55.

medios necesarios para que pudieran estar en condiciones de asumir la responsabilidad del orden y la estabilidad política interna de sus países. Por el lado civil, se difundió la idea del desarrollo interno, como medida que suprimiría las condiciones de miseria, aprovechadas por los guerrilleros para lograr apoyo del pueblo.

Esta manera de enfrentar al "enemigo" por parte de Estados Unidos, contribuyó a que en poco tiempo se transformaran los objetivos militares nacionales de gran parte de los países de América Latina, en objetivos de clase.

El lugar de América Latina en la estrategia norteamericana se caracterizó, desde entonces, por la aplicación táctica de dos variables --contrainsurgencia y acción cívica-- que Robert McNamara sistematizaría durante el gobierno de Johnson, en la doctrina de la Seguridad y Desarrollo.

Desde entonces el panamericanismo, con sus organismos e instrumentos jurídicos (OEA, TIAR), se convirtió en lo que la crisis guatemalteca de 1954 había presagiado: un mecanismo utilizable por Estados Unidos para preservar su seguridad contra los gobiernos y/o pueblos latinoamericanos, en vista de que un ataque extracontinental contra algún Estado del hemisferio -- justificación para la creación del TIAR-- era cada vez menos probable.

La importancia fundamental de la nueva orientación que durante la Administración Kennedy se le imprimió a las relaciones políticas con América Latina, radica esencialmente en sus aspectos estratégicos de seguridad y defensa, que de alguna u otra forma serían continuados por las administraciones Johnson, Nixon y Ford. A partir de entonces se abandonó por entero la práctica de no reconocimiento a gobiernos golpistas y se otorgó un abierto apoyo a los regímenes militares, como escudos de seguridad para los intereses públicos y privados norteamericanos.

11.3 EL DESAFÍO LATINOAMERICANO FRENTE A LA SEGURIDAD NORTEAMERICANA.

Connell-Smith ha escrito que la revolución cubana llevó en sí la afirmación de la patria como nación, de la dignidad de los cubanos después de más de medio siglo de dependencia y un rechazo total de la autoimagen de Estados Unidos como libertador y benefactor de la isla (21). Lo cierto es que el impacto de la revolución, reforzado por los movimientos guerrilleros, la radicalización de algunos gobiernos y las protestas de los clérigos rebeldes, confirmó en los pueblos latinoamericanos la

(21) Gordon Connell-Smith, Los Estados Unidos... p. 256.

certidumbre de su sujeción a Estados Unidos y engendro o incrementó sentimientos de inconformidad frente a esta situación.

Se había creado una situación única en la historia de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y una oportunidad singular para que los pueblos latinoamericanos confirmaran el poder soberano sobre su presente y su futuro. Es bien sabido que los Estados latinoamericanos surgen a la vida independiente frente a un mundo que no dominan y que se encuentra estructurado para no darles cabida sino como participantes secundarios del mismo; pero que sin embargo los reclama: América Latina, dominada por relaciones socio-económicas capitalistas, no tiene posibilidades de sobrevivir a menos que acepte la posición que le correspondía y, por otro lado, las grandes potencias de la época reclamaban para sí los mercados latinoamericanos y la posibilidad de explotar sus recursos.

Se ha dicho que la historia de América Latina es la historia de la lucha por su liberación y es que América Latina no ha podido o no le han permitido ser soberana. ¿Qué pueblo latinoamericano ha podido diseñar y ejecutar un proyecto nacional verdaderamente autónomo, en el que no se consideren de manera significativa intereses ajenos al mismo? ¿Qué gobierno latinoamericano, como depositario del poder supremo para constituir un proyecto nacional que vele sólo por el interés de la nación? ¿Qué gobierno latinoamericano no ha sentido --antes de tomar una decisión trascendental para la historia de su pueblo-- que existe otro poder del que no sólo hay que cuidarse sino incluso tratar de no perjudicar?

Los factores externos han tenido una relevancia decisiva en la historia de América Latina, a partir de las estructuras de poder mundial. Ello es más evidente en este siglo con la dominación general del gobierno de Estados Unidos y sus empresas transnacionales, los cuales se han constituido de manera real en poderes que influyen de forma determinante en la vida de la región.

Tomar decisiones básicas para cada país latinoamericano y para la región, que los respectivos Estados deben considerar y acatar en la formación y ejercicio de su política como límites a los recursos y posibilidades de decisión autónoma y de voluntad planificadora. Una constelación de circunstancias creadas y controladas desde fuera escapan en lo esencial a la esfera de acción del país y del Estado (...). Los Estados latinoamericanos se ven privados de una parte considerable de sus poderes, especialmente los socioeconómicos. La soberanía, la conciencia, la identidad nacionales, la nación misma como realidad substancial y operativa se van reduciendo en su funcionalidad... (22)

(22) Marcos Kaplan. "El nacionalismo en América Latina: vicisitudes y perspectivas (1810-1980)" en Varios autores. El nacionalismo en América Latina, pp. 61 et seq.

No debe perderse de vista que las sociedades latinoamericanas son formaciones economico-sociales capitalistas y por ello se rigen --hacia su interior-- por la lógica de las relaciones sociales del modo de producción capitalista, además de encontrarse insertas en un sistema mundial capitalista.

En general en América Latina, las fuerzas sociales que conforman lo diversos proyectos nacionales solo tuvieron de los mismos una definición ideológica. No existió durante mucho tiempo una fracción de clase claramente identificable capaz de constituir un Estado nacional-burgués que pudiera no sólo superar de manera decisiva los arcaísmos oligárquicos, sino que también --y con éxito-- hiciera frente a las influencias externas imperialistas. Sin embargo, "la realización nacional de las sociedades latinoamericanas sometidas al dominio del capital imperialista no contó con posibilidades para la plena decantación burguesa de las fracciones dominantes, y cuando ello sucedió el capital extranjero ya estaba adentro del mercado interno, internacionalizando sus mecanismos de control" (23), por lo que no podrá existir un auténtico proyecto nacional sin autonomía económica ni integración popular porque estas son, justamente, las deficiencias históricas que han permitido la penetración y el control del capital imperialista, hecho que ha tenido una influencia negativa en el ejercicio de la soberanía de los estados latinoamericanos. Y es que la noción de soberanía nacional ha tenido necesariamente que modificarse frente a los procesos de internacionalización de las economías nacionales. El problema de la soberanía nacional, por lo menos entre los estados latinoamericanos, ya no puede ser planteado como un asunto de unidad nacional en abstracto, que desea conservar una cultura autóctona y una identidad común sobre la base de un mismo pasado.

Es, por el contrario, la capacidad de construir un estado nacional independiente, orientado no solo a la consecución de un auténtico desarrollo, sino sobre todo a la recuperación de la capacidad del control efectivo de decisión sobre su presente y sobre su futuro. Es por tanto un problema de poder, de un proyecto de clase, que sólo adquirió sentido en el marco de las luchas sociales que América Latina libró durante la década de los sesenta y los primeros años de la siguiente.

El marco económico que se presenta en el parágrafo 1.3, muestra que la fase de expansión de las empresas transnacionales de Estados Unidos coincide con el momento más crítico del modelo sustitutivo de importaciones, al mismo tiempo que patentiza el fracaso del mismo como alternativa de América Latina para conseguir su autonomía en materia económica. A partir de entonces se hace más evidente --por lo menos en los países más adelantados-- que la industrialización latinoamericana asumía la forma de internacionalización de las actividades productivas

(23) Edelberto Torres Rivas. "La nación: problemas teóricos" en Estado y política en América Latina, p. 112.

ligadas a los mercados internos. Ese hecho acarrearía profundas consecuencias para los países de la región:

a) debilita los centros nacionales de decisiones y creando una nueva forma de articulación al sistema capitalista mundial;

b) limita las posibilidades de integrar al sector industrial con las actividades de exportación; y

c) acelera la inserción de América Latina al proceso de integración económica mundial, basado en la articulación de objetivos y decisiones de las empresas transnacionales. Debe tenerse presente que las transnacionales que se han instalado en América Latina forman parte de un sistema global de decisiones económicas que trasciende el marco nacional de cada país aisladamente considerado (24).

La internacionalización del mercado interno y la presencia del capital transnacional se expresó --en última instancia-- en las formas que adoptaron las relaciones entre las clases y el Estado en el interior, y en las contradicciones/alianzas que se produjeron externamente. De hecho, la influencia económica transnacional se internaliza en nuevas alianzas de clase y en los apoyos políticos del Estado.

Este período expresa, sin más, el ocaso del nacional-populismo latinoamericano y la apertura a una masiva inversión directa del capital monopolístico norteamericano. Frente al evidente fracaso del modelo sustitutivo, a las burguesías nacionales de América Latina no les quedaba más alternativa que aceptar la situación de socio menor del poder transnacional o intentar sobrevivir en una posición absolutamente marginal, pero insertas dentro del sistema capitalista internacional.

Aunque en diversos grados, las fracciones dominantes optan por la primera posición, renunciando --de esa manera-- a cualquier proyecto propio de desarrollo autónomo. Con ello se frustran los intentos democrático-burgueses que las burguesías nacionales habían aceptado como solución durante el período populista.

No podrían las fracciones burguesas dominantes en América Latina hacer frente a la creciente influencia económica de Estados Unidos: la respuesta proporciona la clave para la comprensión del abandono de la postura nacionalista-populista en América Latina, ya que para oponerse, de manera efectiva, al proceso de control de las economías latinoamericanas por parte del imperialismo, las burguesías locales no podrían hacerlo si no contaban con el apoyo de las masas obreras, campesinas y pequeño-

(24) Cfr. Pedro Henriquez. "Las nacionalizaciones en América Latina" en Pablo González Casanova. No intervención, autodeterminación y democracia en América Latina, p. 210.

burguesas. Tendrían que crear una estrecha alianza con las clases dominadas que, en el marco de la convulsión revolucionaria de la región, tratarían de imponer sus intereses y garantizarlos por medio de gobiernos que fueran la expresión de éstos. Es obvio que esto no les convenía. La experiencia populista había demostrado que las masas, una vez radicalizadas, eran difícilmente controlables y, por otro lado, sus intereses de clases dominantes sólo se mantendrían con la continuidad del capitalismo, como modo de producción dominante en sus formaciones sociales.

Ello explica, en buena medida, la creciente penetración económica de Estados Unidos durante la década de los sesenta y la aceptación de su ayuda económica-militar en contra de la ola revolucionaria que la revolución cubana había contribuido a desatar.

Pero este mismo proceso histórico había permitido que se definieran los objetivos de la lucha revolucionaria en América Latina y que asumiera como modelo a la revolución cubana. Se pretendía, a un tiempo, alcanzar la independencia nacional y hacer la revolución social. Ninguno se pudo alcanzar. Por el contrario, la influencia del imperialismo norteamericano en todos los órdenes en América Latina y la propia situación de redefinición de las fracciones dominantes latinoamericanas en los bloques de poder de sus países, acarrearían una oleada de radicalización militar que tendría como premisa fundamental, mantener la seguridad de los Estados, que no era otra sino la seguridad de los proyectos burgueses subordinados al capital transnacional y la seguridad de su inserción --de manera estable-- dentro del esquema internacional capitalista, valga decir, la seguridad de Estados Unidos como potencia dominante del mismo. Y es que cuando se aceleran los procesos de acumulación de capital y de inversión extranjera al mismo tiempo que se perfila en el panorama continental el surgimiento de movimientos con alternativas políticas y económicas autónomas (insurreccionales y/o nacionalistas) incompatibles con el proceso de integración transnacional, se hace necesario reestructurar los elementos institucionales que favorezcan el desarrollo de los primeros y la destrucción de los últimos.

De esa forma, el desafío histórico de América Latina mantiene su continuidad. Los países de la región siguen teniendo una independencia relativa, caracterizada por la ausencia de un ejercicio efectivo de la soberanía. A menos que se entienda por soberanía la facultad de subordinarse a intereses externos.

Pero como perdió América Latina la oportunidad que tuvo en la década de los sesenta y primeros años de la siguiente. Como se dio la influencia de poderes externos a la región para la rápida expansión de la oleada antirrevolucionaria, durante ese mismo período? En el siguiente capítulo se explican las políticas que Estados Unidos implementó para que, en nombre de la seguridad hemisférica, afianzara su posición dominante y evitara "otra

Cuba" en su zona de influencia mas cercana. Sin perder de vista la característica que tomó en cada país, conforme a su singular desarrollo histórico.

CAPITULO III

DISEÑO Y APLICACION DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD NACIONAL NORTEAMERICANA EN AMERICA LATINA, POSTERIORES A LA REVOLUCION CUBANA

El cambio estratégico a nivel global que efectuó la Administración Kennedy, derivó en un reforzamiento considerable de las fuerzas armadas norteamericanas, que coincidió con un estilo de gobierno concientemente dinámico y un aparato militar con un activismo en ascenso. El resultado fue una política exterior militarizada.

América Latina no fue ajena al cambio de la estrategia militar norteamericana, como tampoco lo fue a las acciones emprendidas con base en la nueva visión que Estados Unidos tenía sobre la preservación de su seguridad. De hecho, durante la década de los sesenta se consolida todo un sistema interamericano de defensa, compuesto tanto por organismos militares en los que participaban prácticamente todos los países de continente (I.D., Colegio Interamericano de Defensa, Conferencia de Comandantes en Jefe de Ramas, etc.), como por relaciones de seguridad recíproca y de relaciones de dependencia logística (TIAR, PAM, Convenios con fundamento en la Ley de Seguridad Mutua, maniobras militares conjuntas, etc.) y todo un sistema de entrenamiento y adoctrinamiento (escuelas en territorio norteamericano, escuelas militares de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá y grupos móviles de adiestramiento). El énfasis, sin embargo, fue puesto en la seguridad interna de cada país, conforme a la exigencia de los nuevos acontecimientos derivados de la revolución cubana.

En complemento a esto --y a la distancia parece ser que fue solo una parte complementaria-- Estados Unidos implementó toda una contrarrevolución ("la revolución pacífica") encaminada a eliminar aquello que consideró el origen del descontento popular: el atraso económico y la miseria. Los programas de acción cívica y la Alianza para el Progreso (ALPRO) representaron el esfuerzo norteamericano, por la vía pacífica, para contrarrestar el movimiento revolucionario y con ello, salvaguardar la seguridad continental y la suya propia:

A pesar de que las fuerzas revolucionarias no constituyen una amenaza directa en ninguno de los países latinoamericanos, sin embargo hay núcleos que pueden ser apoyados desde afuera... Este factor, combinado con la continuada existencia de inadecuadas estructuras económicas y sociales, que son vulnerables a la subversión, hacen necesario mantener la capacidad contrarrevolucionaria de las fuerzas armadas latinoamericanas a fin de que pueda existir una atmósfera interna que conduzca hacia el progreso

económico (1).

Esto se da en medio de un proceso de cambio del papel de los militares en los estados latinoamericanos. Hasta entonces las fuerzas armadas habían sido las garantes de la integridad territorial, de la soberanía y de la independencia política nacionales, además de servir de árbitros y de elemento de transición en las crisis hegemónicas. Sin embargo, con la difusión de los conocimientos de la geopolítica, de las nuevas dimensiones de la estrategia militar que conocieron en los centros castrenses norteamericanos y de la aplicación de los programas de la acción cívica, las fuerzas armadas latinoamericanas politizaron más que nunca su actividad nacional. Se desarrolla entonces "una dinámica interna en las instituciones castrenses, cuya mayor aceleración se da a mediados de los años sesenta, que impulsa o hace proclives a las F.A. como institución a asumir roles gubernamentales" (2).

La idea primaria de la Administración Kennedy en relación a los programas norteamericanos de asistencia y ayuda militar, en lo que respecta a inducir a los oficiales latinoamericanos a abstenerse de hacer política y a apoyar a los regímenes civiles, se revirtió totalmente, pues el énfasis puesto en las acciones contrainsurgentes (tanto militares como económicas) tendió a legitimar, a los ojos de las mismas instituciones castrenses, la participación política de los militares latinoamericanos hasta hacer del golpe de Estado y de la represión hechos cotidianos (3).

III. LA AYUDA MILITAR NORTEAMERICANA PARA AMERICA LATINA.

El concepto de seguridad que prevaleció desde el fin de la Segunda Guerra Mundial fue hemisférico, conforme al cual todo ataque o acto de agresión contra cualquier Estado americano, por algún otro motivo, era considerado como un ataque o agresión contra todos que, en consecuencia, deberían de responder colectivamente contra el agresor. Ese fue el espíritu del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en Río de Janeiro en 1947 y de la política norteamericana de ayuda militar hacia América Latina, orientada básicamente a abastecer a las fuerzas armadas de la región de armas para repeler un posible ataque externo.

- (1) Declaración de Charles A. Meyer, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos del Senado, el 8 de julio de 1969. Citado por J. Saxe-Fernandez, Proyecciones hemisféricas de la paz americana, p. 110.
- (2) Antonio Cavalla Rojas, Estados Unidos-América Latina: Fuerzas armadas y seguridad nacional, p. 82.
- (3) Cfr. Abraham F. Lowenthal, "La Alianza para el Progreso en retrospectiva", p. 398.

Con la Ley de Seguridad Mutua de 1951, Estados Unidos creó un mecanismo a través del cual los estados latinoamericanos tenían previamente que aceptar una serie de condiciones para poder ser considerados sujetos de ayuda militar. Esta se pactaba mediante un tratado bilateral, en el que los países latinoamericanos se comprometían a participar junto con Estados Unidos en la defensa del hemisferio. Al año siguiente se creó el Programa de Asistencia Militar (PAM), con la finalidad de hacer efectivos los tratados bilaterales, pactados conforme a la Ley de Seguridad Mutua y de facilitar la producción y transferencia de materiales estratégicos que Estados Unidos necesitaba.

La inutilidad de la estrategia de la represalia masiva, la improbabilidad de un ataque soviético a América Latina y el brote de los movimientos guerrilleros en la región, hicieron plantear a Estados Unidos una política de seguridad interna en cada uno de los países del hemisferio. Este hecho haría cambiar radicalmente las formas y contenidos de la ayuda militar norteamericana. No sólo se incrementaron los volúmenes de la ayuda, sino que todos los países latinoamericanos (Cuba y Haití fueron exceptuados) se incluyeron como sujetos de asistencia dentro del PAM, sin necesidad de firmar acuerdos bilaterales, al tiempo que se implementaban otros programas, como los de contrainsurgencia y acción cívica.

Desde entonces se reforzaron los tres elementos básicos de la ayuda militar norteamericana para América Latina: aprovisionamiento y donación de materiales militares; venta de armamento a precios reducidos y, preparación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en Estados Unidos o en el extranjero, con un énfasis sustancial en este último:

Fosiblemente los mayores beneficios de nuestra inversión para la ayuda militar resultaran del entrenamiento de oficiales elegidos y de especialistas, en nuestros colegios militares y en los Centros de adiestramiento de los Estados Unidos y del extranjero. Sus países nombran instructores a esos estudiantes cuando regresan. Ellos son los futuros dirigentes de sus pueblos (4).

De esa manera la aplicación de la política de seguridad nacional norteamericana para América Latina se encaminaba, por una parte, al equipamiento y entrenamiento de las fuerzas armadas de la región con el fin de dotarlos de eficiencia para garantizar la seguridad nacional de sus países y, por la otra, al fomento del desarrollo económico con el objeto de atender las exigencias que la lucha contra el supuesto enemigo interno imponía. Enemigo que, en última instancia, no lo era de la nación afectada sino

(4) Declaraciones de Robert McNamara ante el Comité de Relaciones Exteriores, Audiencias del Acta de Asistencia Exterior de 1962. 87o. Congreso, segunda sesión, p. 69. Citado por J. Saxe-Fernández, Proyecciones... p. 67.

que representaba -para los estrategas y politicos norteamericanos- una amenaza directa a los intereses nacionales de Estados Unidos, entre ellos su propia seguridad.

El enfoque contrainsurgente que se le dio al FAM, para lograr una combinación eficientista de acciones militares, paramilitares, politicas, económicas, psicológicas y civiles con el fin de aniquilar no sólo cualquier movimiento de insurgencia subversiva, sino incluso a aquellos gobiernos "incapaces de mantener el régimen democrático", fortaleció y movilizó a las fuerzas armadas para el control del descontento de la población. La necesidad imperativa de la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana -en relación a América Latina- era contar con "oficiales total y completamente entrenados en la doctrina y la práctica de la guerra política, a través de grupos de expertos que trabajen en las respectivas escuelas profesionales en los Estados Unidos y en la Zona del Canal..." (5).

A partir de entonces las operaciones de la "guerra política" fueron conocidas como técnicas de desestabilización y se realizaron con el concurso combinado de los organismos encargados de la seguridad nacional de Estados Unidos, de las fuerzas armadas latinoamericanas relacionadas con el FAM y de las empresas transnacionales norteamericanas con intereses en América Latina.

Fese a lo que continuamente se ha establecido, la actitud de la Administración Nixon no rompió con los esquemas diseñados por sus predecesores demócratas. Al contrario, la llamada "low profile" y la Doctrina Nixon sólo adecuaron dichos esquemas a la nueva situación: un régimen castrista que había perdido prácticamente toda influencia efectiva en el movimiento revolucionario latinoamericano, el fracaso real de este último y la creciente presencia de los militares en los gobiernos de la región.

Para entonces a los estrategas norteamericanos les era claro que deberían lograrse modos óptimos para proporcionar la máxima ayuda a los gobiernos y a las fuerzas armadas de América Latina al mínimo costo para Estados Unidos (en material bélico y recursos humanos) y con escasa visibilidad de su participación. Con la guerra contrarrevolucionaria, Estados Unidos evitó involucrarse directamente, eso le correspondió a las fuerzas armadas de la región que habían sido abastecidas, entrenadas y adoctrinadas por Washington.

Las mismas que deberían de ocuparse -a veces inconcientemente- de la defensa del continente, al garantizar la seguridad interna.

(5) Irvin Kent, "Political Warfare for Internal Defense" en Military Review. Professional Journal of the U.S. Army, Agosto de 1970. Citado por J. Tapia Valdes, El terrorismo... p. 69

III. 1.1. CENTROS DE ADIESTRAMIENTO NORTEAMERICANOS PARA MILITARES LATINOAMERICANOS.

En 1960 al cambiar los programas de asistencia y entrenamiento militares, los centros educativos castrenses norteamericanos -en Estados Unidos y en el extranjero- dedicados a la enseñanza y entrenamiento en la lucha contrainsurgente fueron presentados como garantes del orden público, pues contribuirían -se decía- al control de los disturbios civiles de inspiración comunista, a la vigilancia y control de los movimientos de la subversión y a la observación y patrullaje de áreas rurales para detectar y dispersar a los movimientos guerrilleros.

La preparación en tácticas contrarrevolucionarias de oficiales latinoamericanos seleccionados para ser adiestrados en las diversas academias militares de Estados Unidos, recibió su impulso definitivo en 1962, cuando se destacaron a integrantes de las Fuerzas Especiales norteamericanas (boinas verdes), que habían luchado en el Sureste asiático, para la preparación de la oficialidad latinoamericana.

El centro de adiestramiento contrainsurgente más importante, por estar dirigido sobre todo a los altos jefes de las fuerzas armadas latinoamericanas, fue el Army Special Warfare Center en Fort Bragg, Carolina del Norte, que se encuentra bajo la supervisión del United States Continental Army Command. En el mismo fuerte se encuentra la U.S. Army Psychological Warfare School, a la que también han tenido acceso los oficiales de América Latina.

De los centros militares pertenecientes al ejército de Estados Unidos y ubicados en su territorio, con acceso para oficiales latinoamericanos, se encuentran también el U.S. Army Command and General Staff College en Fort Leavenworth, Kansas; la U.S. Army Infantry School en Fort Benning, Georgia; la U.S. Army Civil Affairs School en Fort Gordon, Georgia y la U.S. Army Engineering School en Fort Belvoir, Virginia.

La Maxwell Air Force Base en Montgomery, Alabama y el Special Air Warfare Center en Elgin Air Force Base, Florida, son los dos centros de capacitación militar pertenecientes a la fuerza aérea norteamericana, ubicados en territorio de Estados Unidos y con acceso para oficiales de América Latina. En tanto que la armada de Estados Unidos abre sus puertas a la oficialidad latinoamericana en los siguientes centros militares de adiestramiento: el U.S. Naval War College en Newport, Rhode Island; el U.S. Marine Corps Command and Staff College y la U.S. Naval Intelligence School en Washington D.C., así como a los Seabee Technical Assistance Teams.

En el área del Canal de Panamá, tuvieron la oportunidad de contar con el acceso a los siguientes centros de entrenamiento:

la U.S. Army Jungle Warfare School en Fort Sherman, para capacitarse en guerra en la selva; la Cartographic School of the Inter American Geodetic Survey en Fort Clayton, para la aplicación de la cartografía en la contrainsurgencia; la U.S. Air Force School for Latin American en Albrook Air Force Base; la U.S. Air Commands Howard Air Force Base y sobre todo la U.S. Army School of the Americas, en Fort Gulik en donde se impartieron los cursos más completos de contrainsurgencia, conforme a un modelo departamental (Comando, Operaciones, Logística y Técnico), para proporcionar a los militares latinoamericanos un adiestramiento integral.

Además se encontraba el Inter American Defense College en Fort Lasley J. McNair, en Washington D.C., que fue creado para oficiales latinoamericanos distinguidos por su habilidad política, sin importar la rama de las fuerzas armadas a la que pertenecieran. Dentro de sus países los oficiales latinoamericanos contaron con el asesoramiento de los Mobile Training Teams y los Country Teams.

Las Fuerzas Especiales fueron destacadas en Fort Gulik y 800 de sus efectivos formaron constantemente la Special Action Force for Latin America, que brindaba entrenamiento y asesoramiento en contrainsurgencia.

Ahora bien, el cuartel general para el adoctrinamiento político y militar estuvo localizado en el U.S. Southern Command (SOUTHCOM) en Quarry Heights Zona del Canal de Panamá, bajo cuya responsabilidad se encuentran las áreas terrestres de América del Sur y la Cuenca del Caribe (con excepción de México). Además de que debe velar cotidianamente por la defensa del Canal, el SOUTHCOM tiene como responsabilidad planear la acción que debería adoptarse a situaciones de crisis en los países latinoamericanos que pudieran requerir una respuesta militar por parte de Estados Unidos, asimismo coordina los programas de asistencia y entrenamiento a los oficiales del área.

III. 1.2. ADOCTRINAMIENTO Y ENTRENAMIENTO NORTEAMERICANO A MILITARES LATINOAMERICANOS.

Conforme a una opinión muy generalizada en Estados Unidos, el adiestramiento de los oficiales latinoamericanos en escuelas castrenses norteamericanas, ha sido un importante medio de ayuda porque los familiariza con las políticas e intereses de Washington, los capacita a enfrentar al comunismo internacional y a preservar la seguridad interna de sus países (6), les proporciona una capacitación técnica y motiva en ellos un interés por los principios democráticos y el progreso social y económico.

El Catálogo de cursos de la Escuela de las Américas de 1975 establece que es propósito del curso para Plan Mayor de Unidades de Armas Combatientes, "capacitar a estudiantes selectos de

(6) Donald Nuecheterlein, Los intereses... p. 148 et seq.

Estados Unidos y América Latina para que se desempeñen como comandantes y oficiales de Estado Mayor en sus respectivas Fuerzas Armadas; darles una idea clara de las funciones del Estado Mayor General del Ejército y las de los comandos conjuntos y combinados..., proporcionarles instrucciones en el desarrollo interno, ayuda en asuntos de seguridad, e introducirlos a la economía del desarrollo, perfeccionar sus conocimientos en las funciones de mando y su capacidad de análisis" (7). El programa del curso incluye temas tales como don de mando, teorías y estrategias del comunismo, administración, inteligencia, acción cívica y operaciones psicológicas, doctrina táctica y operaciones de contrainsurgencia.

De los centros castrenses y programas a los que tienen acceso los oficiales latinoamericanos, el contenido de su adiestramiento incluye los siguientes temas: censura, sistemas de control de transporte, operaciones químicas y biológicas, control de motines, operaciones y tácticas antiguerrilleras, espionaje y contraespionaje, análisis sobre la CIA, acción cívica y asuntos civiles, operaciones clandestinas, administración militar, administración de logística, administración financiera, comunismo y democracia, operaciones de acordonamiento, criptografía, defoliación, inteligencia electrónica, desarrollo nacional, relaciones públicas, operaciones de ayuda en caso de desastres, operaciones en la jungla, técnicas de interrogatorio para prisioneros y sospechosos, control de muchedumbres y otras reuniones masivas, operaciones psicológicas, supervisión de investigaciones criminales, control de desórdenes civiles, operaciones de contrainsurgencia urbana, cateos y allanamientos, guerra especial, terror, operaciones clandestinas técnicas médicas y reparación de armamento.

El énfasis puesto en el plano ideológico estuvo reiteradamente presente en los programas para la oficialidad latinoamericana. Algunos cursos fueron directamente presentados como tendientes a "examinar el comunismo, la amenaza que supone y las medidas de inteligencia militar a emplear contra esa amenaza" y se concentraron en temas tales como contrainsurgencia urbana; democracia contra comunismo; naturaleza de la insurgencia mundial comunista; organizaciones latinoamericanas que sirven de pantalla al comunismo; esquemas de agresión comunista; la naturaleza del comunismo contemporáneo; causas y trasfondos de los movimientos insurgentes; operaciones psicológicas y programas de contrainsurgencia (8).

Esta etapa de preparación en la que la oficialidad latinoamericana tuvo estrecho contacto con los militares norteamericanos, los dotó de un conjunto de valores y creencias

(7) "Catálogo 1975. Escuela de las Américas" Reproducido en Antonio Cavalla Antología... p. 250.

(8) F. Rivas y E. Reisman. "Que se estudia en Fort Gulick?". Ibid. pp. 279-282.

fuertemente estructurado, en el que el culto al orden, a la eficiencia y a la unidad nacional, al igual que la idea de que las fuerzas armadas son los depositarios auténticos de los valores nacionales y únicos promotores de los objetivos de la nación, les conformó una mentalidad de status superior y privilegiado dentro de sus países. Fue de esa manera como se difundió la idea de seguridad nacional que Estados Unidos promovió entre la oficialidad de la región, como parte ideológica y actuante de su estrategia de seguridad nacional, implementada una vez que fracasó el proyecto de la represalia masiva.

En este proceso de socialización en el que los militares no sólo conocen a otros colegas del área y entran en contacto con los problemas "hemisféricos", sino que se involucran con planes de estudio y adiestramiento en los que ellos no tuvieron la mínima participación en su elaboración la oficialidad latinoamericana fue preparada para cuidar el orden interior y orientar a la organización militar y a los asenales en el control de la insurgencia; pero más trascendente aún, con ese proceso de socialización "dejan de ser instrumento de naciones soberanas para integrarse en el planteo estratégico americano de los EE.UU" (9).

Durante los cursos de adiestramiento se define - invariablemente - al comunismo como el enemigo de las fuerzas armadas latinoamericanas, amenaza que en ese entonces se había constituido en un "enemigo interno" dispuesto a atacar en cualquier momento. De esa manera,

el estratega tiene que suponer un adversario. Al adversario se le debe adjudicar las intenciones más malignas. No hay necesidad de preguntar por que debe estar motivado a tomar ciertas acciones hostiles... Basta con que tenga la capacidad de tomarlas. Así, no solo se crea, para fines estratégicos, la imagen de un adversario totalmente inhumano y malévolos, sino que esta imagen se reinvoca día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, hasta que adquiera todas las características de carne y huesos y se vuelva el compañero diario de quienes la cultivan, de modo que cualquier intento de negar su realidad aparece como un acto de traición... (10).

A través de un proceso de adoctrinamiento político es como se logra la interiorización de la figura del "enemigo", proceso que supone también la incapacidad del gobierno democrático para enfrentar la amenaza comunista -e incluso favorecer su infiltración- y la necesidad de que las fuerzas armadas asuman el

(9) Virgilio Beltrán. El papel político y social de las Fuerzas Armadas en América Latina. p. 16.

(10) George Kennan, op. cit., p. 58.

control del poder político (11). La aniquilación del enemigo pasa, entonces, por la supresión de toda forma de disidencia a los valores que les son inculcados a los militares, de ahí que su lucha no sólo se haya dirigido en contra de la guerrilla pro cubana, pues los gobiernos izquierdistas, populistas o simplemente neutrales fueron también objeto de la embestida castranense en nombre de una doctrina de seguridad nacional gestada en Estados Unidos y que politicizó -como nunca antes había sucedido- a los militares latinoamericanos.

En entrenamiento militar y el adoctrinamiento político a los que fueron expuestos los oficiales latinoamericanos, tanto en escuelas norteamericanas como en las suyas propias diseñadas tomando como modelo aquellas, desarrollaron ideas y crearon prácticas que luego fueron sistematizadas en la forma de una doctrina política destinada a justificar la intervención permanente y dominante de los militares en el gobierno de sus Estados, con el fin de garantizar la neutralización del peligro de formas nacionales de comunismo o socialismo..." (12). A partir de entonces la labor primaria de las fuerzas armadas se desarrollaría al interior de sus propias naciones, involucrándose en una lucha político-militar en el que distintos y antagonísticos proyectos políticos intentarían normar el desarrollo social.

Mc Namara había expresado desde los primeros años de la década de los sesenta que la ayuda en la instrucción de los militares en la región, se dirigía primordialmente a la formación de los futuros líderes latinoamericanos. Ese deseo tendió a hacer de la educación una simple catequización en la que las fórmulas maniqueas se impusieron como verdades absolutas.

Pese a ese intento por lograr la profesionalización de las fuerzas armadas para que tuviesen la capacidad de enfrentar con éxito al enemigo interno y con ello garantizar la seguridad nacional, Estados Unidos no renunció jamás -sino que fue una variable siempre considerada- a la posibilidad de intervenir directamente "si se ponía en peligro la democracia y otros valores occidentales". Esto fue cierto sobre todo para los países en donde las fuerzas armadas no lograron enfrentar con eficiencia las tendencias nacionalistas, izquierdistas o antimperialistas.

Los ejércitos centroamericanos y del Caribe, sin la suficiente capacidad técnica que suponían los cursos militares norteamericanos y sin posibilidad de sistematizar los conocimientos adquiridos adoptaron -sin más- los lineamientos de la estrategia de seguridad nacional norteamericana para América Latina, porque para ellos -una vez que aprendieron sobre la teoría del enemigo interno- el hacerlo era una necesidad vital. Las alternativas se presentaban poco alentadoras: por un lado el triunfo del enemigo (identificado con el comunismo) que los haría

(11) Cfr. Jorge Tapia Valdés, op. cit., pp. 69 y 96.

(12) Ibid p. 251.

desaparecer, y por el otro, la invasión norteamericana para evitar ese triunfo, lo que también suponía ser relegados.

III. 2. COOPERACION TECNICO-ECONOMICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCION CIVICA Y DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO.

La doble y ambigua normatividad de las actitudes publicas en Estados Unidos explican, en buena medida, las políticas del gobierno norteamericano en sus relaciones con América Latina. Con el FAM se efectúa un importante flujo de armamento norteamericano a la región, en términos preferenciales; se logra, a través del entrenamiento en escuelas militares, un alto nivel de capacidad combativa de los ejércitos del área para reprimir todo exceso popular; pero al mismo tiempo el FAM incluyó un Programa de Acción Cívica con el fin de contribuir a salvar la crítica situación económica y social de América Latina, aunada a una Alianza para el Progreso como un gesto "desinteresado y humanitario" del gobierno norteamericano para el desarrollo latinoamericano.

Debe quedar claro, sin embargo, que la ayuda económica norteamericana fue encaminada a la obtención y ejercicio de influencia sobre los procesos políticos de los países de América Latina, a la protección de las inversiones privadas, a la contención -a toda costa- de la expansión comunista y, sin duda, acorde con los principios de moralidad tradicionales que norman el pensamiento norteamericano, a la consecución de proyectos humanitarios (13).

El objetivo del Programa de Acción Cívica fue dar una imagen más favorable a los militares latinoamericanos entre la población de sus países. Para la Administración Kennedy -que por otro lado manejó esa doble normatividad de los valores públicos- los militares no constituían sólo una fuerza garante del orden y represiva de la subversión, sino que también podían contribuir decididamente a la transformación económica y social en sus países.

Las actividades de acción cívica incluyeron "la construcción de caminos, el desarrollo de elementos de comunicación, los programas de ingeniería sanitaria y de salud pública... En el caso de los planes de acción cívica la asistencia militar y la economía están frecuentemente unidas en apoyo a los objetivos de los Estados Unidos, con fuerzas armadas nativas provistas por el FAM con instructores avezados y la ADI aportando los elementos materiales" (14).

(13) Cfr. Michel J. Francis, "La ayuda económica de Estados Unidos a América Latina como instrumento de control político", p. 436.

(14) Robert Mc Namara, Hearings before the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, 88th Congress, Washington, 1963, p. 117. Citado en Antonio Cavallia, Antología..., p. 269.

Así, el Programa de Acción Cívica parecía estar encaminado a objetivos distintos a los de la asistencia militar, pues al no estar directamente relacionado con la contención de los movimientos guerrilleros, contribuiría a granjear el apoyo de la población hacia las fuerzas armadas. Empero, en el fondo, se trató de una medida preventiva en contra de la insurgencia y de otra táctica más de la lucha en contra de los movimientos rebeldes. La idea era que con la labor de la acción cívica la población -sobre todo la campesina- estaría más dispuesta a colaborar con los militares antes que con los guerrilleros, pues estos ofrecían bienestar en un marco de violencia, en cambio los militares se encontraban empeñados en tareas de beneficio social y sin violencia.

Estados Unidos aparecía así como el buen vecino que colabora al bienestar de América Latina en una marco de paz y tranquilidad social (15).

El triunfo de la revolución cubana y su indiscutible repercusión en toda América Latina hizo que Estados Unidos le asignara alta prioridad en su política exterior, como no la había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. En su política económica, Estados Unidos diseñó la ALFRO, como la máxima expresión del cambio en el trato con América Latina, esta fue concebida como una "revolución pacífica y positiva" en contra de los regímenes represivos que sólo ayudaban -decía Kennedy- a fomentar la expansión comunista.

En el mensaje dirigido a los diplomáticos latinoamericanos acreditados en Washington, en marzo de 1961, el Presidente Kennedy hizo un llamado para realizar "un vasto esfuerzo de cooperación, sin paralelo en su magnitud, y en la nobleza de sus propósitos, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de las Américas" (16). El resultado fue una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, en agosto de 1961, en la que se aprobaron dos documentos. La Declaración de los Pueblos de América fue el documento dogmático de la ALFRO, señala, entre otras cosas que

Las Repùblicas Americanas acuerdan entre sí constituir la Alianza para el Progreso: un vasto esfuerzo para procurar una vida mejor a todos los habitantes del continente.

Esta alianza se funda en el principio de que al amparo de la libertad y mediante las instituciones de la democracia representativa, es como mejor se satisfacen, entre otros anhelos, los de trabajo, techo y tierra, escuela y salud...

(15) Desde 1960, el FAM ligó el término de acción cívica al desarrollo social y económico, por lo que la labor de las fuerzas armadas también fue conocida como "nation-building".

(16) Reproducido en Alejandro Gertz. Antología de John F. Kennedy, p. 129

Los países signatarios, en uso de su soberanía, se comprometen durante los próximos años a:

Perfeccionar y fortalecer las instituciones democráticas...
Estimular la actividad privada para promover el desarrollo de los países de la América Latina.

Los Estados Unidos, por su parte, se comprometen a ofrecer su cooperación financiera y técnica para alcanzar los fines de la Alianza para el Progreso...

Los países signatarios proclaman que el sistema interamericano ingresa a una nueva fase en la que, van a añadirse, dentro de la libertad y la democracia, inmediatas y tangibles realizaciones para asegurar a la presente y a las venideras generaciones del Hemisferio Occidental una vida mejor.

El documento programático de la ALPRO es la Carta de Punta del Este, la que -en su parte preambular- proclama que ha llegado el momento de imprimir un nuevo sentido a la vocación revolucionaria en América Latina. Asimismo, señala que es propósito de la ALPRO acelerar el desarrollo económico y social de América Latina en un marco de sociedades democráticas y puntualiza la manera de como se alcanzaría.

La ALPRO, en consecuencia, constituía un cambio radical en la posición tradicional de Washington, ya que Estados Unidos debería de oponerse a todo tipo de dictadura al tiempo que promovería el desarrollo y la democratización regionales.

Como respuesta a la expansión de la influencia revolucionaria cubana, la ALPRO nunca fue -en realidad- altruista o humanitaria, por el contrario fue parte de una estrategia diseñada para afianzar la seguridad norteamericana en el marco de la Guerra Fría y -de hecho- así fue presentada al Congreso para lograr su aprobación (17).

La contradicción más manifiesta de la ALPRO lo constituyó el deseo de crear una alianza apolítica, pero al mismo tiempo anticomunista. Aunado a esto, la ALPRO debería ser capaz -a un tiempo- de acelerar el desarrollo, la justicia social, la estabilidad política, la democracia constitucional, la promoción de los intereses económicos privados norteamericanos y la protección de la seguridad nacional de Estados Unidos. El fracaso no se hizo esperar, sobre todo porque no logró superar el conflicto entre sus objetivos a largo plazo (el desarrollo de América Latina) con los inmediatos (la salvaguardia de los intereses estratégicos norteamericanos), pues en cuanto fue evidente que la seguridad de Estados Unidos podría no estar

(17) Vid. Howard Wiarda. "Misreading Latin American again" p. 178.

amenazada, aunque no se alcanzara ninguna de las metas explícitas de la Alianza, Estados Unidos desistió del proyecto (18).

La ALPRO fue una clara manifestación de lo que era la concepción integral de la política exterior norteamericana hacia América Latina y evidenciaba -en el fondo- los propósitos de su política de seguridad nacional y la influencia que ésta debería de tener en América Latina: Estados Unidos sabe qué es lo mejor para América Latina, pues ésta por su incompetencia lo ignora.

Pero, ¿Por qué se impuso finalmente la influencia de la asistencia militar, sobre la posible influencia de la asistencia económica?, es decir, ¿por qué el resultado de las políticas de seguridad nacional norteamericanas acarrearán una oleada de dictaduras militares y no un continente con Estados democráticos? Una primera explicación se encuentra en la idea simplista sobre la que descansaba la ALPRO, que hizo de la estrategia norteamericana un programa basado en un determinismo económico, pues se partía de la base de que con suficiente capital y la adecuada ayuda técnica se lograría la mejoría económica y con ello todo lo demás vendría por sí solo: progreso social y político para América Latina y una ventaja estratégica para Estados Unidos (19).

Aún más, existió una cercana conexión entre la ALPRO y la oleada de dictaduras militares que recorrió América Latina en los años sesenta. Con su propósito principal de contener la revolución, la ALPRO contribuyó a la desestabilización de las sociedades latinoamericanas, pues depositó en las fuerzas armadas locales la preservación de la seguridad para que el proceso desatado por la Alianza se efectuara en paz, sin desbordes nacionalistas ni populistas y bajo control. Si se considera que los Programas de Acción Cívica y el proyecto de la ALPRO se efectuaran simultáneamente, se evidencia que de alguna manera contribuyeron a acrecentar la presencia de los militares -como institución- en la vida política de las formaciones latinoamericanas.

III. 3. REPERCUSIONES DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD NACIONAL NORTEAMERICANAS EN AMÉRICA LATINA, 1964-1979.

La Cuenca del Caribe es diferente a América del Sur e incluso dentro de cada una de estas subregiones coexisten países con enormes diferencias. No es posible generalizar de manera arbitraria. Las condiciones de Guatemala nunca han sido iguales a

(18) Cfr. ibid., pp. 118, 119 y 150 y Abraham Lowenthal, "La Alianza para el Progreso en retrospectiva. Hacia mejores políticas norteamericanas para la década de 1970" p.198.

(19) Cfr. Cesar Sepúlveda, "Reflexiones sobre la Alianza para el Progreso", p. 78.

las de Argentina, por dar sólo un ejemplo. Sin embargo, en la problemática que se aborda en este trabajo pueden identificarse ciertas situaciones que se presentan en los más diversos países de América Latina.

La irrupción de dictaduras militares en América del Sur en los años sesenta, ha sido presentada como algo aieno totalmente a la invasión de la República Dominicana en 1965 o a los diversos regímenes castrenses centroamericanos de la misma época. Empero, puede afirmarse que junto a las condiciones propias de cada formación social de América Latina estuvo siempre presente la influencia de las políticas de seguridad nacional norteamericanas. Es así como se tiene un problema de orden regional.

No se postula aquí la idea maniquea de que Estados Unidos es, de manera absoluta, responsable de las desgracias de América Latina. Las estructuras de clase, las condiciones políticas y económicas de los países latinoamericanos son los factores determinantes en la configuración de las políticas implementadas durante el período de estudio, para crear o restaurar las condiciones de subsistencia de las clases hegemónicas. No existió un plan integral, detallado y explícitamente formulado por Estados Unidos en contra de América Latina, se trató -por el contrario- de políticas tendientes a lograr la consecución de los intereses nacionales norteamericanos, y con ellos su propia seguridad como es entendida por Washington. No es ésta una justificación de su comportamiento hacia América Latina, sino la base real de donde se debe partir para tener una explicación razonable de la misma.

La tradicional política de Estados Unidos hacia América Latina estuvo encaminada a la promoción de los intereses privados de las empresas norteamericanas en la región, por lo que su influencia se orientaba a contar con regímenes favorables para su consecuente rentabilidad y expansión, lo que al mismo tiempo -pero de modo secundario- contribuía a la seguridad de Estados Unidos en la región.

El afianzamiento de regímenes socialistas como sistema político y económico viables en la comunidad internacional primero, y el triunfo de la revolución cubana después, contribuyeron para que Estados Unidos rediseñara su estrategia de seguridad. Ya no bastaban regímenes que favorecieran a las empresas norteamericanas para sentir que su proyecto nacional se realizaba, era necesario también un ataque frontal contra una ideología que se oponía a la suya y que, además, postulaba la extinción del modo de vida que aquella sustentaba. Es así como surge la preocupación del gobierno norteamericano por los problemas sociales y económicos de los países de la región y como se explican todas las medidas utilizadas para evitar la llegada al poder de gobiernos radicales que pusieran en entredicho los intereses norteamericanos.

Correspondió a la Administración Kennedy enfrentar la nueva situación. Nunca se apartó, sin embargo, de la consideración básica de cualquier política norteamericana desde la posguerra hacia América Latina: que la revolución y el "comunismo" en la región, especialmente en el Caribe, amenazan intereses vitales norteamericanos. Así se explica que el gobierno de Kennedy haya fomentado la Alianza para el Progreso y el avance de algunos movimientos democráticos al tiempo que permitía la invasión de Bahía de Cochinos y ponía en práctica una serie de operaciones paramilitares con el propósito de combatir levantamientos guerrilleros en América Latina. El fracaso de su pretendido reformismo puso como única alternativa la militar, a partir de entonces el apoyo al fortalecimiento y a la politización de las fuerzas armadas en América Latina se convirtió en el medio principal para combatir a "comunistas" y "subversivos", y con ello a todo movimiento popular que pretendiera la realización de cambios sociales. Las primeras manifestaciones de esta nueva orientación fueron -en un mismo plano, en un mismo sentido y respondiendo a una misma problemática- el golpe de Estado en contra de Goulart en 1964 y la invasión a la República Dominicana en 1965.

La vida política de América Latina en la década de los sesenta quedó definida por el endurecimiento hacia la región, con un abierto apoyo a los regímenes militares como garantía de protección los intereses públicos (la seguridad sobre todo) y privados (financieros y económicos en menor grado) norteamericanos. El apoyo brindado por Estados Unidos para entrenar y equipar a las fuerzas armadas de América Latina en contra de la subversión, contribuyó a crear las fuerzas de represión características de los regímenes militares latinoamericanos de las décadas de los 60's y 70's.

El endurecimiento del que se ha hablado se dio en un contexto internacional caracterizado por un debilitamiento de la posición norteamericana a nivel mundial, por lo que para Estados Unidos era insoslayable la necesidad política y estratégica de mantener el control de América Latina. Así pues, en tanto que a nivel internacional es la visión norteamericana de la Guerra Fría lo que fomenta una nueva caracterización de la seguridad nacional en su área de influencia contigua, en el plano nacional de las sociedades latinoamericanas es la creciente crisis de hegemonía - cuyo síntoma más visible es la violencia insurgente - de las clases dominantes que no logran articular un consenso nacional para su proyecto.

Una singular Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) se gesta y sistematiza en América Latina en ese periodo, que encuentra su origen en las nuevas estrategias y tácticas para la lucha antisubversiva. Esta novísima doctrina no sólo ve a presuponer que el estado democrático es incapaz de autodefenderse frente a la creciente subversión, sino que incluso, es el terreno más fértil para que los grupos subversivos conquisten el poder.

para que esto no sucede y en nombre de la "seguridad nacional" y de los "intereses supremos de la nacion" se priva a los pueblos de la capacidad de autogobernarse.

La DSN en las sociedades latinoamericanas -en aquellas en que las condiciones permiten alcanzar una verdadera sistematización- en cuanto marco ideológico de los nuevos regimenes, supuso la declinación y subordinación militar hacia el poder civil. Con esta doctrina las fuerzas armadas de América Latina dejan, propiamente, de realizar acciones militaristas, su actividad se vuelve esencialmente política. Ya no se trata por tanto del simple militarismo sino de política ejecutada por militares. Es "... una forma diferente de hacer política por medio de los militares y no de militarizar la política..." (20).

La influencia norteamericana en la formulación de esa doctrina es incontestable. No solo los centros castrenses latinoamericanos en donde se sistematizó fueron diseñados a imagen y semejanza de la National War College, sino que sus principales formuladores fueron educados en centros castrenses norteamericanos. Debe acotarse, sin embargo, que no existe una auténtica doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos pues nunca se ha considerado necesario sistematizar las bases ideológicas y estratégicas de su política de seguridad, para que tenga cierto grado de eficiencia. Baste -por otra parte- la manera en que se fue sistematizando y aplicando la DSN de América Latina que contribuyó de manera decisiva para auxiliar a Estados Unidos en la defensa de Occidente contra el "comunismo":

Lo que hoy nos amenaza, como ayer, es una amenaza que no está dirigida contra nosotros, sino directamente contra los Estados Unidos de América, la cual, incluso si queremos subestimarla dando mayor énfasis a la practicabilidad todavía bastante discutible de un ataque transártico, no por eso resulta insubsistente. ¿ más que, de ninguna manera, puede desmerecer la importancia estratégica del Noreste brasileño, no para nosotros... sino para los Estados Unidos de América (21).

En otros países, con militares menos capacitados y económicamente más atrasados -los de la Cuenca del Caribe-, la seguridad nacional se presenta con una doctrina implícita, de defensa de las fronteras ideológicas, con una clara dependencia militar y como una necesidad imperiosa de continuar existiendo como Estados.

Por otra parte, la enorme respuesta norteamericana a la

(20) Hebert Souza. El capitalismo mundial y el militarismo en América Latina. p.21.

(21) Gral. Golbery do Couto e Silva. Geopolítica do Brasil, p.95. Citado por Pedro Castro Martínez. Fronteras abiertas. Expansionismo y Geopolítica en el Brasil contemporáneo. p. 111.

insurgencia en America Latina orillo "a Cuba a seguir una politica más cautelosa en lo que se referia a la creacion de nuevos focos de insurreccion en el hemisferio" (22).

La Administración Johnson contribuyo, por una parte, a la más drástica aplicacion de la politica contrainsurgente norteamericana y, por otra, a preparar el abandono de la concepcion estrategica de la contencion, que finalmente se concretizaria durante la Administración Nixon. Tras el fracaso en Vietnam se revaluó la estrategia militar norteamericana contra movimientos insurgentes. Lo que llevo a disminuir el empleo directo de los contingentes militares de Estados Unidos en el mundo, especialmente en operaciones de contrainsurgencia. Pero al mismo tiempo, se busco que la nueva politica -resultante de esa reevaluacion- proporcionara los instrumentos confiables para hacer frente, con éxito, a los movimientos guerrilleros. La llamada "Doctrina Nixon", adoptada en 1969, transfirió la responsabilidad a los aliados norteamericanos, mediante un mayor esfuerzo de autodefensa, apoyados por una creciente ayuda y apoyo técnico de Estados Unidos, que resultó ser, en el fondo, una contrainsurgencia preventiva.

Esta racionalizó la intervencion de los organismos norteamericanos (sobre todo de la CIA, que perfecciona a partir de entonces sus operaciones encubiertas) para garantizar la consecucion de los objetivos norteamericanos que pudieran lograrse por esos medios, sobre todo "su" seguridad. Con la politica del low profile la presencia oficial norteamericana (ayuda económica, programas militares y culturales) se redujo sensiblemente en America Latina, a tal punto que los intereses privados norteamericanos asumieron el liderazgo en las relaciones de esta con Estados Unidos. Se iniciaba pues, un nuevo periodo de indiferencia hacia America Latina, cuando el producto de sus politicas se encontraba fuertemente arraigado en la region.

Desde la muerte de Guevara, el apoyo cubano a la insurgencia habia disminuido sensiblemente y el regimen castrista habia dejado de ser el sustento de la guardia de la revolucion en America Latina. No se percibia ninguna amenaza inmediata a la seguridad de Estados Unidos en el region. Lo que confirmaba que "el interes publico en los Estados Unidos solo asume clara precedencia sobre los intereses privados en tiempos de crisis" (23).

(22) The Department of State Bulletin, Vol. Lxi, No. 1571, p. 100. Citado por Claude Heiler, "Las relaciones militares entre Estados Unidos y America Latina: un intento de evaluacion", p. 27.

(23) Mario Uueda, México: el surgimiento de una politica exterior activa, p. 59.

III. 2.1. SUDAMERICA (GOLFES DE ESTADO Y REGIMENES DE SEGURIDAD NACIONAL).

A estas alturas del analisis queda claro que los intereses políticos norteamericanos en America Latina implican una asociacion estrecha de los gobiernos de la region con el sistema capitalista en general y con Estados Unidos en particular, por lo que cualquier intento de radicalizacion y activismo politico que pudiera afectar dicha premisa, resulta peligroso para el gobierno norteamericano.

En la mayoria de los paises latinoamericanos se presentaron durante la decada de los sesenta y principios de los setenta, situaciones diversas caracterizadas por una "activacion politica general que algunos sectores de la sociedad consideraron una amenaza seria para el orden social y para el funcionamiento y acumulacion eficiente dentro del sistema capitalista" (24). La presencia, aun, de regimenes populistas con un control cada vez menor de las masas, el auge de los movimientos guerrilleros y su lucha revolucionaria, el activismo creciente de los sindicatos, eran las manifestaciones mas visibles de una crisis hegemonia de las elites dominantes.

El bloque historico comenzo a dar muestras de su debilitamiento y su consecuente desarticulacion. En primer lugar, los sectores oligarquicos parecieron arremeter en contra de los nuevos sectores propietarios cuyo ascenso habia sido motivado por el modelo economico de industrializacion sustitutiva; en segundo lugar, las politicas economicas y sociales de inspiracion populista (con su alto contenido de 'keynesianismo' y desarrollista habian entrado en una crisis que mas lo era de intensidad, de crecimiento de patron del mismo y, finalmente, un nuevo sector burgues ligado a procesos productivos mas dinamicos con fuertes lazos con las empresas transnacionales, intentaba convertirse en la cabeza visible del bloque en el poder, pretendiendo abolir el distribucionismo caracteristico del "Estado benefactor", al tiempo que se incrementaron las demandas economicas y politicas de los sectores populares, sin contar ya con las condiciones materiales para atenderlas. Asi, durante el periodo referido las necesidades inmediatas tanto de los intereses politicos norteamericanos en America Latina, como de la nueva conformacion de los bloques dominantes en la region, eran la desmovilizacion politica, la estabilidad economica y la cooperacion con el capitalismo internacional.

La satisfaccion de estas necesidades implicaba mucho mas que un simple cambio de gobierno. La insercion de la ideologia de seguridad nacional, del neoliberalismo en materia economica y de la critica a la democracia prepararon el terreno a la instauracion de un nuevo tipo de regimen, cuyos ejes esenciales

(24) Rene Villareal, "Monetarismo e ideologia, de la mano invisible a la mano militar", p. 1068.

serían la seguridad y el desarrollo, mediante el orden y el crecimiento. El poder, pues, debía ser tomado para evitar que la radicalización popular -señalada como izquierdista- tomase o conservase el poder político en detrimento del nuevo sector burgués que intentaba ser hegemónico, sin lograrlo, y de la seguridad norteamericana en la región. El golpe de Estado fue el camino tomado.

Los golpes de Estado se suceden vertiginosamente hasta convertir a América del Sur en un mosaico de regímenes militares, cuya característica primaria es la seguridad de la nación para su desarrollo (como justificación y proyecto): Brasil en 1964, Argentina en 1966 y 1976, Perú y Panamá en 1968, Bolivia en 1971, Ecuador en 1972, Uruguay y Chile en 1973.

Conviene ahora hacer una retrospectiva de los acontecimientos más sobresalientes en la instauración de los regímenes de seguridad nacional.

El populismo nacionalista de Janio Quadros y de Joao Goulart expresado en las relaciones de Brasil con Estados Unidos en la llamada "política exterior independiente", representó una fuente de constantes fricciones entre ambos gobiernos. Pese a ello, la Administración Kennedy pretendió contener una eventual radicalización del gobierno de Quadros mediante la ayuda económica, por lo que en febrero de 1961 le otorgó un préstamo por 100 millones de dólares y le ofreció un plan de ayuda alimentaria para el noreste brasileño. Más tarde el presidente Kennedy expresaría que "el futuro de Brasil es vital para el futuro del hemisferio" (25). Con Goulart en la presidencia, las dificultades entre ambos gobiernos se agudizaron aun más. La aprobación de la Ley de Remesas de Lucros, en septiembre de 1962, que prohibía la transferencia al extranjero de más del 10% de las utilidades de las empresas norteamericanas establecidas en Brasil, alertó al gobierno norteamericano de las pretensiones de Goulart para radicalizar sus acciones.

Foco después de la renuncia de Quadros, los jefes de las fuerzas armadas habían intentado evitar que Goulart asumiera el poder, por razones de "seguridad nacional", con apoyo de destacados miembros del Congreso (26). Sin embargo, el temor de provocar una confrontación interna favoreció el ascenso de Goulart como presidente de Brasil.

Su gobierno continuó la línea de política exterior iniciada

(25) John F. Kennedy, *New York Times*, 20 de mayo de 1961. Citado por Pedro Martínez Castro, *op. cit.*, p. 51.

(26) El diputado Ranieri Mazzilli, como presidente interino, manifestó ante el Congreso el 26 de agosto de 1961: "Os ministros militares, na qualidade de chefes das forças armadas, responsáveis pelo ordem interna, me manifestaram a absoluta inconveniência, por motivo de segurança nacional, do

por Quadros y fomentó la implantación de políticas nacionalistas que, por un lado, le dieron una cierta base social a su gobierno y, por el otro, le enajenaron el apoyo norteamericano y la disminución del flujo de capital privado de ese país, que pasó de 108 millones de dólares en 1961 a 31 millones en 1963. Las políticas seguidas por Goulart afectaron por ello la economía nacional y también multiplicaron las exigencias populares en relación a una más justa distribución del ingreso. La respuesta a la creciente y cada vez menos controlada movilización social fue el incremento del gasto gubernamental en un momento en que ya no había capacidad para sostener una política populista de ese tipo. La crisis adquirió tintes dramáticos. En el segundo semestre del 63 el gobierno intentó paliar la situación mediante las llamadas "reformas de base" con las que se pretendía ampliar el mercado interno a través de la protección del salario real y mediante una reforma agraria a largo plazo. Sin embargo, las presiones políticas internas y externas no permitirían llegar a ver los resultados de estas acciones, con un gobierno que nunca pudo contar con una base de apoyo fuerte.

La radicalización de las masas populares a partir de la renuncia del presidente Quadros; la participación decidida de destacados izquierdistas en el gobierno de Goulart; la presencia de un sindicalismo cada vez más demandante y con una tendencia a radicalizarse hacia la izquierda; así como el apoyo que gobiernos estatales, como el de Brizola, habían dado a la organización de los campesinos y sus demandas de reforma agraria con el beneplácito del gobierno federal, contribuyeron a crear un cierto temor del conjunto de la burguesía y de gran parte de las clases medias de una revolución social.

En enero de 1964 los gobernadores de Sao Paulo y Guanabara anunciaron la inminente intervención del ejército para detener lo que consideraban como "el avance del comunismo y de la anarquía". En marzo, el gobierno de Goulart anunció, frente a una manifestación de la Central de Trabajadores de Brasil, el inicio de la Reforma Agraria, la nacionalización de la refinación y distribución de los productos del petróleo y la fijación de precios máximos a los productos básicos. La respuesta de los sectores de derecha fue la realización -en el mismo mes- de la "Marcha con Dios por la libertad". En tanto que los gobernadores de Minas y Rio Grande do Sul, unidos a los otros dos ya citados, intentaban trasladar el Congreso Nacional a Sao Paulo con el fin de establecer un gobierno "igualista". Al mismo tiempo, el presidente de la Unión Democrática Nacional, Roberto Costa de

regreso ao País do Vice-presidente Joac Belchior Marques Goulart", citado por A. Castro Borges. "Evolução de organização político constitucional de América Latina", en Varios autores. Evolución de la Organización político-constitucional en América Latina, p. 10.

(27) Cfr. Paulo Cannabrava. Militarismo e imperialismo en Brasil pp. 32 y 33.

Abreu Sodré, regreso de Estados Unidos con garantías del Departamento de Estado de que sería inmediatamente reconocido el gobierno legalista y de que -si este lo solicitaba- se le apoyaría militarmente.

Aunada a la creciente pérdida de confianza política del bloque dominante frente a la profunda crisis económica y a la desorganización del aparato estatal, la respuesta norteamericana ante la amenaza que representaban los sucesos brasileños fue inmediata. El Embajador Lincoln Gordon puso al tanto al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano sobre lo que consideraba una infiltración comunista en los movimientos obrero y estudiantil y en el gobierno de Goulart, así como la amenaza de insurrección en el noreste de Brasil (recuérdese la visión geopolítica norteamericana sobre el eje Dakar-Natal). El gobierno de Estados Unidos implementó una política de ayuda a las "islas de sanidad", es decir, a los gobiernos estatales que garantizaran un gobierno "democrático, en detrimento del gobierno federal.

En el mismo mes de marzo, Gordon recomendó al Departamento de Estado que se incrementara la ayuda militar a los oficiales brasileños como parte de una estrategia para contrarrestar el avance de la izquierda en el gobierno brasileño, enfatizando el papel que los militares jugarían para mantener la seguridad interna en el marco de la creciente inquietud social. El día 27, el Embajador Gordon expresaba a su gobierno el fuerte temor de que Brasil cayera completamente bajo el control comunista y el CI pedía la realización de una acción decidida de su gobierno para revertir la situación brasileña (26).

Los militares brasileños, que dieron todo su apoyo al conjunto de fuerzas políticas y económicas amenazadas por las acciones del gobierno, habían tomado la decisión de acabar con la situación.

Hay en el país, incontestablemente, un clima de aprehensión e intranquilidad... el espectro de una dictadura comuno-sindical se cierne sobre la comunidad nacional... El sistema comuno-sindical-huelguista, en medida en que se fortalece y se amplía se vuelve cada vez más peligroso para la seguridad del país (27).

El primero de abril es derrocado Goulart. Con el golpe de Estado, se cierne el círculo de industrialización basado en la sustitución de importaciones, en tanto que modelo de desarrollo

(26) Phyllis Barker, Brasil and the quiet intervention, 1964, pp. 58, 59, 69 y 70.

(27) "Posición del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ante los recientes acontecimientos ocurridos en el país", documento confidencial entregado el 31 de marzo de 1964 por el Gral. Pery Constant Bevilacqua al presidente Goulart. Citado por Octavio Ianni, El colapso del populismo en Brasil, pp. 143 y 144.

económico nacionalista apoyado en las masas y adquiere verdadera viabilidad política el proceso de asociación del capital nacional con el extranjero, iniciado durante el gobierno de Kubitschek.

El gobierno de Estados Unidos se sintió tranquilo ante la nueva situación de Brasil y el ascenso momentáneo de Mazilli al poder:

En enero... estábamos convencidos de que el comunismo penetraba rápidamente en el Gobierno de Goulart. Aún antes de asumir nuestra actual posición, no obstante, ya aplicábamos una política destinada a proporcionar ayuda a los gobiernos de ciertos Estados de Brasil... (lo que) contribuyó al afianzamiento de la democracia (30).

Por su parte, los militares brasileños en un documento elaborado en la Escuela Superior de Guerra -institución en la que se planeó el golpe de Estado- justificaban su actuación al expresar que "el éxito del comunismo en cualquier país de América Latina significa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y Brasil", por lo que el cambio político ocurrido en el país tendría repercusiones en el continente, en el sentido de frenar el avance del comunismo (31).

Se abrió así, un nuevo período histórico en Brasil. El Acto Institucional No. 1, del 9 de abril de 1964, estableció las bases de este nuevo ciclo: 1) el movimiento cívico-militar es una auténtica revolución que interpreta los intereses y la voluntad de toda la nación; 2) Una de las formas del poder revolucionario es el ejercicio del poder constituyente; 3) en consecuencia, la revolución dotada de poder constituyente se legitima a sí misma (32).

(30) Declaración del Secretario de Estado, Thomas Mann, al diario O Estado do Sao Paulo, 19 de abril de 1964, p. 1. Citado en Ibid., p. 150.

(31) "Orientación General del Planeamiento de la Seguridad Nacional", documento reproducido en Antonio Cavalla, Antología..., p. 379.

(32) Jorge Tapia Valdes. El Terrorismo de Estado..., pp. 192 et seq.

Los objetivos del golpe eran, entre otros, anular el riesgo de la toma del poder por la izquierda o por grupos nacionalistas exaltados, mantener a Brasil dentro del bloque occidental conforme a las determinaciones geopolíticas norteamericanas que colocan a Estados Unidos como el centro hegemónico del bloque en el marco de la Guerra Fría y superar la crisis de hegemonía de los poderes político y económico parcialmente disociados por el proyecto populista (13).

En Argentina el detonante inmediato del golpe militar fue la amenaza populista del peronismo en tanto que como gobierno implicaba una activa movilización popular. Esta necesidad y consecuencia del peronismo fue vista por un gran número de militares como una etapa previa al comunismo y como una amenaza real a los intereses oligárquicos en la década de los cuarenta y de la gran burguesía en los sesenta y setenta.

Las fuerzas armadas argentinas de ninguna manera se vieron exentas de la influencia norteamericana en la posguerra. A pesar de su característico alejamiento relativo de Estados Unidos, asumieron como propia la cruzada norteamericana en defensa de la "civilización occidental y democrática" frente a la amenaza comunista. La "salvación nacional" frente a la infiltración de las ideas socializantes y de los métodos guerrilleros, pasó a formar parte importante de las funciones castrenses.

Con la "Revolución Libertadora" de 1955, la participación política de peronismo había sido proscrita, sin embargo mantenía una creciente influencia en la vida política y social argentina. En julio de 1963, sin la participación peronista, triunfa el candidato presidencial de la UCR del Pueblo, Arturo Illia. Tras dos regímenes caracterizados por una política desarrollista de apertura al exterior, que habían provocado una movilización peronista para contrarrestar esa tendencia que marginaba a las masas argentinas, Illia puso en práctica un programa de importantes medidas de contenido popular entre las que destacaron la denuncia de los acuerdos con el FMI, el establecimiento de controles a la inversión extranjera, la expansión del crédito hacia los sectores productivos medianos y pequeños, el incremento de los salarios nominales y el restablecimiento de los subsidios a los bienes de consumo primarios que en conjunto repercutieron en aumento del salario real.

Sin embargo, la agitación social parecía incontenible, la guerrilla comenzaba a exigir una reivindicación más profunda de los intereses populares, el sindicalismo peronista lograba -por el momento- paralizar la economía con sucesivas huelgas y la agitación estudiantil se tornaba incontrolable. El bloque dominante veía fracasar su proyecto de desperonizar a la sociedad argentina. En ese contexto, el 28 de junio de 1966, se produce otro golpe de Estado en la Casa Rosada, los nombres parecieron

(13) Octavio Ianni, *El golpe...*, pp. 153 y s.

ser el temor de que el justicialismo peronista -legalizado durante el gobierno de Illia- triunfara en las ya próximas elecciones y en la consideración de que era necesario acelerar el desarrollo nacional en un marco de tranquilidad social. Por ello se justificó el golpe por un vacío de poder y no por un exceso.

La irrupción del Gral. Onganía a la presidencia, marco el inicio de una nueva manera de ejercer el poder por las fuerzas armadas. En el Estatuto de la Revolución Argentina quedó claro que el nuevo régimen asumía la totalidad del poder, reformaría la constitución y no fijó plazos para el término del mandato. En tanto que en el documento Objetivos Políticos de Revolución Argentina declararon: "el objetivo general enmarca a la revolución en la civilización occidental y cristiana, buscando restablecer una auténtica democracia representativa" (34). No obstante, se decretó la disolución de los partidos políticos, se intervino en las universidades, se realizó una purga contra los sospechosos de antecedentes marxistas, se clausuraron órganos de prensa, se restringió la libertad individual, se intervinieron los gremios más combativos y finalmente se decretó, en julio de 1969, el Estado de sitio.

Por otra parte, las medidas económicas neoliberales no tuvieron el éxito esperado, por lo que se incrementaron las tensiones sociales que se agravaron en 1969 con el "cordobazo", levantamiento que involucró a la clase obrera, a los estudiantes y a la pequeña burguesía de la ciudad de Córdoba en respuesta al deterioro del nivel de vida. Fronto el descontento y las manifestaciones populares, y la consecuente represión gubernamental, se generalizaron. El Gral. Onganía perdió el apoyo castrense y fue reemplazado en junio de 1970 por el Gral. Levingston, quien debió siempre de consultar a la Junta de Comandantes, dominada por el comandante en Jefe del Ejército, el Gral. Lanusse. Las correcciones que se intentaron también fracasaron.

Las clases medias, temerosas del peronismo y aliadas del régimen, no soportaron las medidas económicas implementadas por este, por lo que le retiraron su apoyo; por otra parte, la existencia -en el exilio- de un liderazgo popular peronista, impidió la desintegración de los movimientos sindical, estudiantil y guerrillero; más aun, en esos años se fortaleció la organización del movimiento obrero que se opuso decididamente al régimen militar. Asimismo, la vieja oligarquía terrateniente -si bien no resultó afectada- no obtuvo beneficio alguno con las políticas económicas del régimen, por lo que no le brindó un apoyo decidido.

En marzo de 1971 Lanusse reemplaza a Levingston y en un último intento por evitar la radicalización social, restablece la

(34) H. Quiroga Lavie. "La Revolución Argentina, 1966-1971", en Varios autores. Evolución de la organización..., p. 404.

actividad política de los partidos y anuncia elecciones generales sin proscripción partidaria. No obstante estas medidas, las manifestaciones de protesta de obreros, de las clases medias y el accionar de las guerrillas se intensificaron, por su parte el ejército respondió con mayor represión y acciones contrainsurgentes. Si bien en 1950 el "enemigo interno" no era más que una posibilidad latente, en ese momento las fuerzas armadas se encontraban "espantadas por el espectro de la revolución que ahora se concreta con seres de carne y hueso y en operaciones cada vez más audaces..." (35). En efecto, las actividades de la guerrilla peronista "Montoneros", fortalecida con la fusión de las Fuerzas Armadas Peronistas y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, más el accionar del marxista Ejército Revolucionario del Pueblo, orillaron al régimen castrense a optar por las elecciones.

Fuese a que los militares prohibieron la candidatura de Perón, el slogan "Campora al gobierno, Perón al poder", describía sin matices la orientación que tendría el futuro gobierno. El justicialismo triunfa en las elecciones de mayo de 1973, los militares se retiran de la administración gubernamental, después de un primer intento para establecer un régimen de Seguridad Nacional.

Campora renuncia a la presidencia y Perón es electo el 12 de octubre del mismo año. A pesar de los intentos conciliadores, Perón fue incapaz de controlar al movimiento peronista. La incertidumbre y la intranquilidad se apoderaron de Argentina. El gran capital extranjero y nacional, las clases medias y la burocracia sindical adoptaron actitudes intransigentes, finalmente Perón se rodeó de colaboradores reclutados en las filas del llamado peronismo de derecha, en el ejército y la burocracia sindical. La respuesta de la otra parte del peronismo fue inmediata, el líder de la Confederación General del Trabajo fue asesinado por los "montoneros", con lo que el clima de guerra interna se acentuó, en tanto que el deterioro económico fomentó y agravó el malestar social. En estas circunstancias, se produjo la muerte de Perón, en julio de 1974.

El ascenso al poder de María Estela Martínez de Perón profundizó todos los problemas del país, para los que su gobierno no tuvo respuestas adecuadas. En ese momento de caos institucional, crisis económica y ausencia de hegemonía, quedaba claro que "el peronismo había dividido y destruido en gran medida, después de movilizar auténticamente al pueblo -pero controlando y paralizándolo sus aspiraciones profundas- la marcha hacia la transición" (36).

(35) Marcos Koplan, "50 años de historia argentina (1920-1970): el laberinto de la frustración", en Pablo González Casanova, América Latina Historia de siglo, p. 64.

(36) Juan María Hipolito, "Alfonso: un capítulo de la historia" p. 9

El 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas retomaron el poder mediante el Golpe de Estado, no sólo como una reacción frente al desmoronamiento de la administración de la presidenta Martínez, sino sobre todo como respuesta a las exigencias populares que se intensificaban ante un gobierno incapaz de contenerlas, y para evitar la descapitalización de la economía argentina que había dejado de recibir cualquier tipo de inversión.

"El cuadro social estaba signado por la agresión subversiva, el caos económico, tensiones sociales de insusitada gravedad y por la ausencia de un grupo dirigente en aptitud de brindar al país una alternativa política válida" (37). Estas son algunas de las justificaciones que esgrimieron los militares para instaurar un régimen de tortura y persecución. Durante el proceso de reorganización nacional que se inicia con el golpe de 1976, las fuerzas armadas asumieron el papel de agentes transformadores y reconstructores del Estado y de la sociedad, complementado con el de proveedores de seguridad interna para el desarrollo económico, objetivo básico de la "Revolución Argentina".

Perú, el país con más movimientos guerrilleros, fue también el que recibió mayor asistencia norteamericana para contrarrestar un posible triunfo de la guerrilla. La creación del Centro de Altos Estudios Militares, (CAEM), institución en donde se gestó la mutación ideológica de los mandos castrenses, fue uno de los resultados inmediatos del estrechamiento de las relaciones militares entre Perú y Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.

En 1962 con el fin de evitar que Haya de la Torre asumiera el poder, que había ganado en las elecciones de ese mismo año, los militares depusieron al Presidente Prado. La razón de esta actitud era la posibilidad de que, una vez en el poder, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) se acercara a los grupos más radicales del Perú. El gobierno militar intentó poner en práctica las nuevas orientaciones emanadas del CAEM, sin embargo fue evidente que éstas aún no habían madurado lo suficiente para tener viabilidad. Al Año siguiente se convocó a elecciones y fue entonces Acción Popular el triunfador.

Durante el gobierno de Belaunde se acumularon las presiones de la clase media y de los grupos populares, sobre todo de los campesinos que exigían un cambio en la propiedad de la tierra. La extensión y agudización de la movilización social constituyeron una clara amenaza al mantenimiento de la concentración del capital y del poder político de la oligarquía, sin que el gobierno pudiera revertir la situación. La exigencia de una reformulación de las relaciones sociales, en términos de una redistribución de los recursos llevó a una crisis de hegemonía

(37) Dra. Jorge Rafael Videla, entrevista aparecida en La Opinión, Buenos Aires, 7 de agosto de 1977. Reproducido en Alvaro Briones, Ideología del fascismo dependiente, p. 202.

caracterizado también por la falta de capacidad de las clases subordinadas para constituirse en una alternativa viable (38). Al mismo tiempo el gobierno llegaba a un acuerdo con la IFC, con el afán de solucionar uno de los problemas internacionales más graves del Perú. Las condiciones del convenio resultante -humiliantes para el Perú- trataron de ser ocultadas, empero, cuando fueron del conocimiento público, al gobierno de Belaúnde cayó en un descrédito total: Acción Popular le retiró su apoyo en un intento de salvar al partido del escándalo, los militares arremetieron en contra de la decisión gubernamental y los grupos opositores al gobierno exigieron la cancelación del acuerdo.

En esas circunstancias, los altos mandos militares previeron la ruptura del orden social y de las instituciones, temieron que "el conflicto político se escapara de los canales legales y abordara el plano insurreccional... con el consiguiente peligro para la seguridad nacional" (39). La idea del enemigo interno y del daño que ocasionaba su existencia a la nación era una de las premisas fundamentales del CAEM, la "acción cívica" había sido emprendida con la asistencia norteamericana sin embargo, en septiembre de 1968, parecía ser insuficiente.

La Junta Revolucionaria expresó el 2 de octubre, un día antes del golpe que

poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar desenfrenadamente frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las básicas reformas estructurales...

Perú también confirmó que el gobierno revolucionario

se mantendrá fiel a los principios de nuestra tradición occidental y cristiana; y que alentará la inversión extranjera que se sujete a las leyes e intereses nacionales (40).

Los militares tomaron el poder como institución, para ejercerlos sin determinar un plazo y por decreto-ley. Para la Junta de Gobierno era necesario antiquillar las causas que originaban la existencia del enemigo interno para que, en un ambiente de paz, se pudiera emprender el desarrollo.

No tuvimos otra alternativa -diría más tarde el Presidente Velasco. Fue la ineptitud, la insensatez, la corrupción y la

(38) Cfr. Julio Cotler. "Perú: Estado oligárquico y reformismo militar", en Fabio González Cesanova. América Latina: historia... p. 408.

(39) Idem, cit.

(40) Citado por Mario Montecorte. La solución militar a la peruana, 1968-1970. pp. 23 y 25.

insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo comprender que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía y la complicidad tornaron imposible en manos del Ejecutivo... (41).

La década de los sesenta representó para Uruguay el fin del ciclo de bonanza sustentado en el modelo económico agroexportador. A mediados de la década de la crisis del modelo trascendió el campo económico para convertirse también en un problema político.

En 1966 fue electo presidente el Gral. Gestido, con la esperanza de que en oposición a la política lenta y de compromisos que había caracterizado al último Consejo de Gobierno, fuera posible tener una presidencia decidida, inflexible y de rápido accionar que superara los graves problemas económicos que ya se reflejaban en una creciente efervescencia social.

Facheco Areco asciende a la presidencia tras la muerte, en diciembre de 1967, del Gral. Gestido. Por su parte, las condiciones de vida se habían deteriorado tanto en el campo como en la ciudad, situación que aceleró las contradicciones existentes en el seno de la clase dominante, gestándose de lleno una crisis de hegemonía. El presidente Facheco inició un proceso de concentración de poderes en el Ejecutivo que complemento con acciones represivas bajo el pretexto de que el Estado se encontraba amenazado por la subversión.

Durante los cuatro años del gobierno de Facheco la actividad de los Tupamaros se intensificó. El gobierno recurrió, de manera permanente, a las "medidas prontas de seguridad" y a la declaración del "estado de guerra interna", ésta última no prevista en la Constitución.

En las elecciones de noviembre de 1971 triunfó el Partido Colorado y ascendió a la presidencia Juan María Bordaberry, sin embargo, durante su administración continuó en ascenso la ofensiva guerrillera, se fortaleció el movimiento sindical y radicalizó sus exigencias, se consolidó el movimiento de masas nucleado en el Frente Amplio, en tanto que la situación económica se hizo más crítica. En estas circunstancias, el poder político que aun pretendía dar solución a los graves problemas del país, se encontró incapacitado para enfrentar la situación, pese al establecimiento del "estado de guerra interna" y a la suspensión de las garantías individuales. De esta forma la llamada "Dictadura Constitucional" generalizó el uso del terror "contra delincuentes que amenazan la patria" (42).

(41) Gral. Juan Velasco Alvarado. La Revolución Peruana. EUNEDVA, Buenos Aires p. 23 Citado por Hebert Souza, op.cit., p.21

(42) Gerónimo de la Sierra. "Consolidación y crisis del capitalismo democrático en Uruguay". En Pablo González Casanova, América Latina: Historia... p. 459.

En febrero de 1973 las fuerzas armadas uruguayas impusieron una activa participación de su parte en el Gobierno con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. El 27 de junio el Presidente Bordaberry realiza un autogolpe de Estado con la disolución del Parlamento, aunado a la suspensión de toda actividad de los partidos políticos y de los sindicatos. Se inició de esa manera la dictadura cívico-militar, en la que el Presidente era un civil, pero el poder era ejercido por las fuerzas castrenses.

Dos años más tarde Bordaberry dimitió en virtud de que "por motivos de conveniencia general -expreso el Presidente- las Fuerzas Armadas deben arbitrar los procedimientos necesarios para el mejor cumplimiento del progreso político del proceso civil-militar... (43), iniciado con la disolución del Parlamento. Poco después los militares expresarían satisfacción:

Bastaron no más de siete meses para que el aparato sedicioso, brazo armado de la subversión, fuera destrozado por una acción militar lo necesariamente energética y coherente como para restablecer la confianza que el Estado... había venido perdiendo progresivamente como instrumento de orden, de paz y de progreso (44).

El golpe de Estado en Chile sucede en un contexto diferente. Ahí no hubo guerrillas, pero sí un gobierno constitucional formado por una alianza de partidos que no ocultaban su carácter revolucionario que -aunque su programa era solo el de una democracia radical- se proponía crear, con apego a la Constitución, las condiciones para un paulatino avance al socialismo.

Durante la Administración Nixon se racionalizó la intervención encubierta de la CIA, para garantizar la seguridad del continente. De esta manera el gobierno norteamericano gastó millones de dólares para impedir, primero, el triunfo de la Unidad Popular y después, para derrocar a Salvador Allende. El Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, reveló cual había sido la actitud de su gobierno durante el proceso electoral chileno en 1970, cuando expuso ante el Comité de los Cuarenta: "por que habríamos de quedarnos parados viendo como un país se vuelve comunista, debido a la irresponsabilidad de su pueblo" (45). De hecho el gobierno de Washington creía que el gobierno de

(43) Citado por Hector Gros Espiell, "Evolución de la organización político-constitucional en América Latina, 1955-1975: Uruguay", en varios autores, Evolución de la Organización..., p. 291.

(44) Junta de Comandantes en Jefe, Las fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. El Proceso Político, 1976. Citado por Juan Riel, "Las fuerzas armadas como partido político sustituto, el caso Uruguayo, 1976-1984", en Nueva Sociedad No. 81, p. 106.

(45) Citado por Hernán Rosenblatt, "Actitud norteamericana hacia la Junta Militar Chilena", Foro Internacional No. 85, p. 74.

la Unidad Popular -legitimada en unas elecciones democráticas- terminaría por infiltrar a sus vecinos y crearía una zona de influencia comunista contraria al más alto interés norteamericano en el hemisferio.

Por su parte, las transnacionales norteamericanas que fueron afectadas por las medidas económicas aplicadas por el gobierno socialista chileno -como las cupreras Anaconda y Kennecott y la International Telephone and Telegraph (ITT)-, realizaron toda clase de acciones para derrocarlo. Estas incluyeron desde una campaña mundial para evitar que el cobre chileno se realizara en los mercados internacionales, hasta campañas psicológicas orientadas a desprestigiar al gobierno de la Unidad Popular al interior del propio Chile. El presidente Allende, en el marco de la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas, denunciaba estos hechos:

un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de seis meses... proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, crear el pánico en la población, el desorden social para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura (46).

Asimismo la AID, el Eximbank, el Banco Mundial y el BID suprimieron toda línea de crédito a Chile. Farnsworth afirma que el bloqueo crediticio fue aplicado después de consultar con los empresarios y banqueros norteamericanos cuyos intereses en Chile habían sido afectados por la Unidad Popular. Los préstamos de origen privado descendieron de 219 millones de dólares en 1971 a 32 millones a principios de 1972, en tanto que como parte integral de la política norteamericana en esos años, la Kennecott castigó el precio del cobre en los mercados internacionales convirtiendo el metal chileno en uno de los menos competitivos. De esa manera se inició la descapitalización de la economía chilena que incidió, entre otras cosas, en la incapacidad de importar productos alimenticios (47).

Era claro que la coalición de izquierda solo había asumido el gobierno, sin lograr conquistar el poder. La economía en lo esencial continuaba siendo capitalista, la izquierda no había logrado constituir un bloque hegemónico sobre la sociedad civil y, añadido a esto, las fuerzas armadas no fueron transformadas para que se constituyeran en garantes de los cambios que la Unidad Popular estaba efectuando. Por el contrario, continuaron

(46) Salvador Allende. Discurso ante la ONU, 4 de diciembre de 1972, citado por Carlos Rama, La imagen de los Estados Unidos en América Latina, p. 158.

(47) Cfr. Elizabeth Farnsworth, "Chile: what was the U.S. role? More than admitted" pp. 100-102.

siendo tributarias de un sentimiento de clase adverso al proyecto del gobierno de Allende y cargados de un embañaje ideológico en gran medida adquirido en las escuelas militares norteamericanas. El gobierno de la Unidad Popular no solo contó con la obstrucción parlamentaria sistemática de los partidos de derecha (el Partido Nacional de la oligarquía terrateniente y la Democracia Cristiana, vinculada a las empresas extractivas y manufactureras asociadas al capital norteamericano), sino, incluso, con su abierta subversión y con una gran movilización de los sectores propietarios que desataron una campaña para presentar una situación nacional caracterizada por la anarquía y la inseguridad producto de un gobierno esencialmente marxista, procomunista y prosoviético, lo que finalmente le enajenó a este el apoyo de la amplia clase media chilena.

El golpe de Estado se produjo después que era clara la insuficiencia del cause económico para derrocar al gobierno Constitucional. Desde las elecciones legislativas de marzo de 1973 y hasta el 11 de septiembre, cuando las fuerzas armadas destituyen al gobierno de la Unidad Popular, la oposición incrementó su ofensiva ideológica encaminada a movilizar a los militares para que derrocaran al presidente Allende y destruyeran a la izquierda chilena.

Un día después del golpe, los militares chilenos se justificaban al expresar: "la seguridad interna y externa del país (está en peligro), la sobrevivencia de nuestro Estado independiente está amenazada y el mantenimiento del Gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República" (48). Mas tarde el Presidente Ford declararía que "ha sido tradicional para Estados Unidos el mezclarse de una manera u otra, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otros países cuando la seguridad nacional estaba involucrada" (49).

III. 3.2. LA CUENCA DEL CARIBE (REGIMENES ANTICOMUNISTAS Y DEMOCRACIAS RESTRINGIDAS).

La causa fundamental de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina en general y hacia la Cuenca del Caribe en particular, ha sido la de preservar lo que estima son sus intereses vitales en la región, lo que requiere del mantenimiento de la estabilidad política y el apoyo a gobiernos conservadores y pronorteamericanos. La Cuenca del Caribe como área exclusiva de la influencia y expansión natural de Estados Unidos se ha encontrado ligada de manera constante a sus intereses de seguridad y sometida a su dominio no sólo económico,

(48) Junta de Gobierno. Bando NO. 5 dictado el 11 de septiembre de 1973. Citado por Jorge Teoría Valdes. El terrorismo de Estado..., pp. 128 y 129.

(49) Citado por John Saxe-Fernandez. De la seguridad Nacional. p. 21.

sino incluso político y militar. Así pues, como potencia dominante en el área, Estados Unidos no ha permitido -y sobre todo después del triunfo de la revolución cubana- el desarrollo de acontecimientos que pudieran amenazar sus intereses, recurriendo aun a la intervención militar directa.

El adiestramiento militar a que fueron sometidos los oficiales latinoamericanos en la posguerra y que se intensificó durante la Administración Kennedy, así como los programas de asistencia militar a las fuerzas armadas de la región se orientaron a la defensa "interna" de los países de América Latina. Sin embargo, en aquellos Estados en los que el cuerpo castrense era incapaz orgánica y materialmente para cumplir esa tarea, la presencia norteamericana se hizo más evidente. La Cuenca del Caribe se encontró en ese caso y ahí estribó la diferencia con el resto de la región.

En la década de los sesenta, la historia de la Cuenca se caracterizó por las presiones norteamericanas de tipo reformista y por su control con base en la integración económica, ideológica, política y militar bajo el amparo de Estados Unidos.

Los planes para la creación del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA) se iniciaron en 1961 y tres años más tarde se materializaron. A partir de entonces el CONDECA se convirtió en el instrumento a través del cual las fuerzas armadas de América Central se subordinaron de hecho a las políticas para la seguridad de Estados Unidos en la región, por lo que "la seguridad de Estados Unidos pasa a ser en realidad, la razón de ser y de actuar de los ejércitos centroamericanos" (50).

Después de la radicalización de la revolución cubana la política militar norteamericana de contención se efectuó en coordinación con las fuerzas armadas dominicanas, sobre todo para "proteger" a Haití y a la República Dominicana de la amenaza cubana; pero el apresurado desgaste de la dictadura de Trujillo haría que Estados Unidos asumiera la tarea de vigilancia del área, escudándose con la O.E.A.

Ya existía un antecedente inmediato de lo que Estados Unidos haría para evitar radicalizaciones en la Cuenca del Caribe. En 1954 la Administración Eisenhower había utilizado a la CIA para organizar, financiar, armar y dirigir una invasión a Guatemala para derrocar al gobierno populista de Jacobo Arbenz. El rasgo característico de todos los gobiernos posteriores a julio de 1954 fue su función contrarrevolucionaria y el empleo sistemático de la violencia política.

Tras el asesinato de Castillo Armas en julio de 1957, se organizaron elecciones para sucederlo, las que -por otra parte-

(50) Mario Salazar Valiente. "El Salvador: crisis, dictadura, lucha... (1920-1980)". en Pablo González Casanova. América Latina: historia de medio... t. II, P. 114.

estuvieron restringidas a la participación de candidatos con fuerte vocación contrainsurgente y sin afinidades populistas. El gobierno norteamericano estuvo siempre espartacante a los acontecimientos de Guatemala e intentó tener el control del país. El 16 de noviembre de 1960 el presidente Eisenhower dispuso que la Marina de su país patrullara las aguas guatemaltecas para prevenir cualquier invasión dirigida por comunistas. Acciones como esta impulsaron a los gobernantes guatemaltecos para que las fuerzas armadas realizaran "una campaña concertada y despiadada para limpiar al país de subversivos; una campaña que costo la vida de unas 20 mil personas" (51). La aplicación de esta política -que contó con la asistencia y el asesoramiento norteamericano- destruyó a la guerrilla, pero también aniquiló a la mayoría de los partidos políticos moderados.

En 1962, la Administración Kennedy utilizó a la CIA para desarticular al partido marxista que intentaba alcanzar la victoria en los comicios nacionales de Guyana.

En el Salvador el Frente Nacional de Orientación Cívica - integrado por partidos políticos de izquierda y organizaciones sindicales- perpetró un golpe de Estado el 26 de octubre de 1960. La Junta de Gobierno que se hizo cargo de la presidencia no se propuso realizar cambios estructurales, sino solo organizar un proceso democrático y constitucional a través de elecciones libres. Sin embargo, este intento se frustró con un nuevo golpe de Estado, el 15 de enero, coordinado por la oligarquía local y con el apoyo norteamericano. El gobierno que surge de este nuevo golpe emprendió políticas reformistas bajo la influencia de la ALFRU y se orientó a eliminar cualquier influencia cubana.

A partir de entonces el ejército se convirtió en el instrumento fundamental de gobierno y logró concentrar gran parte de la actividad administrativa. Asimismo, proliferaron las organizaciones paramilitares que con fines anticomunistas y antiguerrilleros se extendieron por todo el país. La más importante fue la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) que logró adular hasta 60 mil campesinos, fue fundada por José Alberto Medrano, jefe de la Guardia Nacional con la asistencia de los boinas verdes norteamericanos. Con los mismos objetivos fue creada en 1962 la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (ANSESA), con la ayuda del ejército norteamericano y de la CIA (52).

En la década de los sesenta se institucionalizó la práctica de consultar al ejército para la designación de los candidatos oficiales a la presidencia. Gracias a esto y a que se contó con

(51) William Leo Grande, "Las opciones de la política norteamericana en C.A." en Orde Fellicer, Centroamérica futuro y opciones, p. 64.

(52) Vid. Martin Diskin y Kenneth Sharpe, "El Salvador", en varios autores, Containing Revolution Security through diplomacy in Central America, p. 54.

el apoyo del CONDECA, del presidente Anastasio Somoza de Nicaragua y del de Guatemala CrI. Arana Osorio, se evitó que el candidato de la Unión Nacional Opositora (UNO) se hiciera del poder, después de haber ganado en las elecciones de 1972.

En Honduras, el 3 de octubre de 1963, el CrI. Oswaldo López Arellano derrocó al gobierno modernizante y reformista del liberal Ramón Villeda Morales. Este había dictado una ley de reforma agraria que había afectado a las compañías bananeras y a los terratenientes. La actitud reformista del presidente Villeda llevó a una radicalización de las fuerzas armadas, pues para estas "todo era indicativo de que el país se encaminaba hacia una segura agresión de las fuerzas comunistas, con el consiguiente peligro para la democracia representativa" (53). A partir de ese momento los militares asumieron un papel predominante en la vida política del país, con una clara orientación anticomunista.

El CrI. López Arellano se sintió obligado a justificar su empresa ante el gobierno norteamericano en estos términos:

El gobierno militar que tengo la honra de presidir se organizó para impedir que el castro-comunismo abriera una nueva brecha a través del territorio hondureño... Estoy convencido de que el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos interpretaron debidamente la significación del movimiento militar de 3 de octubre de este año, que puso en manos de las fuerzas armadas la dirección del estado hondureño... porque ambos tenemos una finalidad común: la defensa y el mantenimiento de la libertad y el derecho... (54).

Asesinado el dictador Trujillo en 1961 a instancias de Washington, asumieron el poder en la República Dominicana Joaquín Balaguer como presidente y Kamfis Trujillo como Jefe Supremo de las fuerzas armadas. El gobierno de Estados Unidos favoreció una evolución pacífica a partir de los herederos del dictador, por temor a que las múltiples manifestaciones populares condujeran a un gobierno de izquierda. Sin embargo, la posición del grupo neutrujillista encabezado por Balaguer dificultó un tránsito pacífico. Esto provocó que un grupo de militares ligados a la Unión Cívica Nacional -cercana a los sectores burgueses no favorecidos por el trujillismo- diera un golpe de Estado que desembocó en la creación de un gobierno presidido por un Consejo de estado encargado de organizar elecciones libres. Pese a su política anticomunista y de contención de las aspiraciones populares para favorecer, en cambio, los intereses de los grupos

(53) Declaraciones del CrI. López Arellano, citado por Juan Aracibia, "Honduras: del Enclave a la ocupación", en varios autores, Centroamérica: una historia sin tregua, p. 100.

(54) Citado por Guillermo Molina Chocano, "Honduras: de la guerra civil al autoritarismo militar, (1925-1972)", en Fabio González Casanova, AMÉRICA LATINA: HISTORIA..., t. II, p. 252.

afines a la Unión Cívica, los comicios de 1962 fueron ganados por el Partido Revolucionario Dominicano de Juan Bosch. Este estableció un gobierno reformista y proclamó una nueva constitución, en la que se prohibían los latifundios, se establecía una reforma agraria y se determinaba la incapacidad de los extranjeros para adquirir en propiedad la tierra.

A pesar del carácter conciliador del gobierno de Bosch, sus políticas lo llevaron a enfrentamientos con los intereses norteamericanos. El 25 de septiembre de 1963 se produjo el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional dominicano, golpe que fue apoyado y fomentado por Washington. Un triunvirato asumió las funciones ejecutivas, con una política muy cercana a lo que había realizado el Consejo de Estado, dominado por la Unión Cívica. Sin embargo, dos años después (24 de abril de 1965), bajo la consigna de "retorno a la constitución de 1963 y al gobierno de Juan Bosch" un grupo militar constitucionalista derrocó al triunvirato, con una gran movilización popular en apoyo al movimiento dirigido por el Cdr. Caamaño. La derrota del neutrujillismo y el inminente retorno de Bosch al poder, hizo que Estados Unidos enviara, el 28 de abril, un contingente de más de 30 mil hombres en contra de los constitucionalistas, a los que después se agregaría la Fuerza Interamericana de Paz de la O.E.A., dirigida por un militar brasileño.

El 2 de mayo el presidente Johnson declararía que el movimiento revolucionario tomó un giro trágico. Líderes comunistas, muchos de ellos entrenados en Cuba, viendo una posibilidad de aumentar el caos, de ganar posiciones, se han unido a la revolución... lo que comenzó como una revolución democrática popular muy pronto cambió y fue tomada efectivamente y colocada en las manos de una pandilla de conspiradores comunistas... Nuestra meta es ayudar a impedir otro Estado comunista en este hemisferio (55).

Derrotados los constitucionalistas, se instauró un gobierno provisional que organizó nuevas y restringidas elecciones. El neutrujillismo de Balaguer se alzaba como triunfador de dichos comicios.

Una nueva intervención directa por Estados Unidos y la organización de elecciones sin la participación de todos los grupos políticos se llevaría a cabo en Granada en 1977.

En la década de los sesenta se da la liquidación sistemática de las opciones políticas de cambio gradual en la cuenca del Caribe, en tanto que las fuerzas armadas, como institución, pasaban a ejercer un papel de primer orden en los gobiernos de la región.

(55) Citado por Larman C. Wilson, "Estados Unidos y la guerra civil dominicana. El retorno a las relaciones interamericanas". Foro Internacional No. 30 p. 156.

III. 4. LA SEGURIDAD NACIONAL COMO DOCTRINA PARA UN NUEVO PROYECTO POLITICO-ECONOMICO EN AMERICA LATINA.

El establecimiento de los regimenes de seguridad nacional supuso mas que un golpe de Estado y un gobierno militar. Fue, en realidad, una oleada contrarrevolucionaria, antisocialista, antiliberal y antidemocratica que hizo uso de una extensa, permanente y violenta politica represiva encaminada, por un lado, a contrarrestar a todos aquellos factores ideologicos, politicos y economicos que fueran contrarios al orden establecido y, por otro, a la liquidacion de la institucionalidad con el proposito de abrir nuevos espacios para el desarrollo de un proyecto politico y economico no conocido antes en America Latina, de ahi que fueran calificados como "revoluciones" en Brasil, Argentina en 1966 y en Peru. El futuro fue visto como un presente perfeccionado.

Tales propósitos pudieron realizarse debido a que las ideas fundamentales de seguridad nacional, construcción nacional y nuevo papel de los militares en la vida del Estado, fueron sistematizados en una verdadera doctrina integral con principios y objetivos precisos, una metodología para determinarlos y una estrategia para implementarlos. De hecho, la Doctrina de Seguridad Nacional, en todas sus variables, tuvo siempre la

pretensión de conquistar el poder y ejercer el gobierno de la sociedad en cuanto ente nacional y total, es decir, a través de acciones y con relación a intereses que se presentan y perciben como generales y totalizadores; por oposición a otros intereses que se presumen de clase, de sectores, de grupos o de individuos (56).

En los países de América del Sur se presentan invariablemente dos situaciones que no se observan de manera necesaria en América Central y el Caribe: una crisis de hegemonía y un movimiento popular radicalizado, que juntos impedían el afianzamiento de un nuevo patrón de acumulación iniciado con los gobiernos desarrollistas (Kubitschek en Brasil, Frei en Chile, Frondizi en Argentina y Belaúnde en Perú). Por su parte, la Cuenca del Caribe, más penetrada por las inversiones norteamericanas y considerada la antesala geopolítica hacia Estados Unidos, atravesó la redefinición del bloque dominante (América Central) o bien lo intentaba definir (el Caribe). En ambos casos se planteaba la necesidad de la instauración de un Estado con capacidad de consolidar un nuevo bloque dominante. La crisis de hegemonía que intentaba ser superada, coincidió con la voluntad del gobierno norteamericano por afianzar su presencia y salvaguardar "su seguridad" en el hemisferio, esta articulación hace posible la implantación de regimenes de seguridad nacional.

El uso de la fuerza armada que llevo implícita la presencia

(56) Jorge Tapia Valdes, El Terrorismo de Estado, p. 100.

de los regímenes de seguridad nacional se justificó como "la utilización jurídica y legítima de la fuerza, de la violencia para asegurar la supervivencia del Estado y sus instituciones" (57). Era, sin embargo, una nueva forma de legitimidad que antepone "el bien de la nación" a la voluntad ciudadana (en el Acto Institucional No. 1 del gobierno militar brasileño se especifica que la Revolución de 1964 "traduce no el interés y la voluntad de un grupo sino el interés y la voluntad de la nación"). Los nuevos regímenes pasaban así a ser la conciencia ilustrada y guía de sus naciones: "importa la justicia y no el consenso... La justicia y la ética son racionales. El consenso suele tener tan alto porcentaje de emoción que lo torna voluble e inconfiable. Como no somos demagogos no estamos condicionados por el consenso" (58).

Esto mismo los hizo asumir la totalidad de los poderes del gobierno, incluido el constituyente, que pasó a depender de la voluntad del nuevo régimen, como lo demuestra el Decreto Ley 788, de diciembre de 1974 del gobierno chileno:

Considerando:

b) Que el ejercicio de los poderes Constituyente y Legislativo se realiza mediante la dictación de decretos leyes con la firma de todos los miembros de la Junta de Gobierno...

e) Que, en consecuencia, debe entenderse que cada vez que la Junta de Gobierno ha dictado un decreto ley cuyos términos no coinciden con alguna disposición de la Constitución Política del Estado, ha ejercido el Poder Constituyente modificando en lo pertinente y ya sea en forma expresa o tácita, total o parcial, el respectivo precepto constitucional (59).

El concepto de seguridad nacional, originalmente militar, fue ampliado y trasladado al campo de las relaciones sociales y políticas. A partir de entonces las fuerzas armadas pasaron a ser no sólo defensores del territorio nacional contra un posible enemigo externo, sino que -y principalmente- se convirtieron en defensores de la nación en contra de los enemigos internos, tanto en la paz como en la guerra. Así, la seguridad nacional pasó a ser definida como la capacidad del Estado para garantizar la supervivencia, a través de acciones políticas, económicas, psicológicas y militares, de la nación que jurisdiccionalmente para la

(57) Eogardo Mercado Jarrín, "La política de seguridad integral", en Antonio Lavalla Rojas, MODERNIDAD... p. 208.

(58) Almirante Emilio Nasser, LA GUERRA, abril de 1977, Buenos Aires. Citado por Alvaro Arónes, Psicología del fascismo dependiente p. 77.

(59) Reproducido por Jorge Iacia Valdes, "Democracia versus nacionalización política. El caso chileno", en varios autores, Evolución de la organización... pp. 245-247.

realización y preservación de los objetivos nacionales, contra cualquier antagonismo interno o externo, existente o previsible. Por ello las tareas de seguridad de los nuevos regímenes serían:

- a) Establecer y perfeccionar un sistema de seguridad nacional que contemple una estructura organica eficiente y funcional.
- b) Detención oportuna de antagonismos y riesgos reales o potenciales de la nación.
- c) Fortalecimiento del poder nacional y eliminación de sus vulnerabilidades,
- d) Fijación de objetivos y selección de prioridades en el esfuerzo de la seguridad nacional, y
- e) Coordinación de los organismos del Estado y actividades nacionales,
- f) Acción político-estatal para la preservación y consecución de los objetivos nacionales, y
- g) Creación de conciencia nacional de seguridad (60).

Las interferencias o perturbaciones a la realización de los objetivos nacionales (metas concretas de los intereses y aspiraciones, que intentan ser alcanzados y protegidos en una determinada época y cuya conquista y preservación involucra a toda la nación) (61) son aquellas creadas o explotadas por intereses "no nacionales", en el interior del Estado o externas a él.

La subversión comunista realizada a través de la infiltración ideológica, la propaganda revolucionaria, el sabotaje y la guerrilla -argumentan los detentores de estos regímenes- procura apartar a América Latina del bloque democrático y occidental e implementar regímenes marxista-leninistas, por lo que -como parte del interés nacional- la seguridad nacional debe impedir que el comunismo domine en cada uno de los países latinoamericanos. Otra de las presiones en contra de la seguridad nacional -se estima- es la socio-economica, que abarca la existencia de grandes espacios vacíos, la irregular distribución de la población, la escasa explotación de recursos básicos y la carencia de una infraestructura adecuada -en el marco de una economía distorsionada e ineficiente- capaces de generar tensiones sociales que puedan ser aprovechadas

(60) Cnl. Alejandro Medina Lois. "La Doctrina de la Seguridad Nacional", en Antonio Cevalle Rojas, Antología... p. 308.

(61) Gral. Mercado Jarrin, op. cit., p. 347 y Gral. Carlos de Meira Mattos "O Processo Revolucionario Brasileiro", p. 10, citado por Alfredo Palermo, Estudo de problemas brasileiros, p. 41.

por grupos con ideologías extremistas. Las perturbaciones políticas, así como la existencia de gobiernos contrarios a los objetivos nacionales, deben también ser eliminadas a través de una política de seguridad nacional acorde con estos últimos. Finalmente están las interferencias político-históricas de naturaleza externa ejercidas por países hostiles (62).

Así pues, entendida la seguridad nacional en América Latina como la situación favorable al logro de los objetivos nacionales, su valor se incrementa en función del desarrollo como medio para aumentar los factores de poder. Por lo tanto, se deduce que no hay seguridad sin desarrollo e, inversamente, tampoco desarrollo sin seguridad. Por lo que se llega a la conclusión que los factores que hacen desfavorable el logro de los objetivos nacionales deben ser destruidos o adecuados mediante una eficiente política de seguridad nacional.

"Considerando que el país necesita de tranquilidad para el trabajo en pro de su desenvolvimiento económico y del bienestar del pueblo, y que no puede haber paz sin autoridad, que es también condición esencial del orden..." (63) se hizo necesario para los sectores dominantes que no lograban ejercer hegemonía, una dominación autoritaria para estabilizar y lograr el orden interno y así implementar el nuevo patrón de acumulación que implicaba la consecución de un crecimiento económico a través del fomento y defensa de la propiedad privada, de los medios de producción, de la libre empresa, de la capacidad de ahorro e inversión mediante un corte severo de cualquier política distributiva y la restricción de la capacidad de presión de los sindicatos. Asimismo, en el plano financiero se aplicó una política monetarista de contención del proceso inflacionario. El libre mercado, el libre comercio internacional y la disminución del papel del Estado como agente económico marcaron las pautas del neoliberalismo que caracterizó a los RSN en materia económica.

La necesidad de excluir política y económicamente a las masas populares y a la pequeña burguesía del proyecto de la gran burguesía nacional asociada a las transnacionales fue, también, una característica del proyecto económico de los regímenes de seguridad nacional. Por lo que las medidas destinadas a promover la centralización del capital, se realizaron mediante la destrucción de parte importante de las pequeñas y medianas empresas.

La asociación con el capital extranjero motivó que la gran

(62) Cfr. Los artículos de la Escuela Superior de Guerra de Brasil y del Gral. Osiris Villegas en A. Cavalla Rojas. Antología...

(63) Acto Institucional No. 2, citado por Oliveros S. Ferreira. "La neopolítica y el Ejército brasileño. en Virgilio Boltran. op. cit., p. 172.

burguesía nacional promotora y pilar del nuevo proyecto de dominación, favoreciera la desnacionalización de los depósitos y entidades bancarias, que las empresas antes nacionalizadas se transfirieran al sector privado (nacional o extranjero), que se liberaran los precios y se congelaran sueldos y salarios; sin olvidar el ofrecimiento de garantías irrestrictas al capital transnacional para la inversión, pues se consideró que no era "...signo de nacionalismo, sino de estrechez mental, el rechazar o desalentar al capital extranjero cuando el país no tiene la capacidad económica para explotar por sí mismo todos los recursos" (64).

La tesis expuesta por Mc Namara fundada en la idea de que seguridad y desarrollo se condicionan recíprocamente, por lo que es necesario lograr el bienestar de la población para que la subversión no encuentre un campo propicio, mediante el fomento de la iniciativa privada y la desestatización, fue fielmente adoptada en la Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina.

III. 4.1. TERRORISMO DE ESTADO Y SEGURIDAD NACIONAL.

Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile conforman esta variante del régimen de seguridad nacional, el cual supone amplias libertades para el capital internacional y una fuerte represión interna ejercida por un poderoso aparato policíaco-militar. En lo económico estos países presentan características similares, como el combate a la inflación sacrificando el salario, libertad de comercio y amplias garantías para las inversiones extranjeras; por su parte, el Estado se convierte en un simple proveedor de la infraestructura que permite la realización de los proyectos del gran capital: concentración excesiva de la renta y desarrollo de una fracción de las clases medias con elevados ingresos para propiciar un próspero mercado interno.

En lo político y social se distinguen por tener un gobierno militar fuerte y represivo, parlamento en receso o decorativos, partidos políticos proscritos o bajo control, sindicatos sin capacidad reivindicativa o fuera de la ley. Censura total de la prensa, control de los centros universitarios, violencia institucionalizada a través de organismos militares o paramilitares persecución, tortura y desaparición a los opositores. Anulación del derecho de huelgas y prohibición de cualquier movimiento reivindicativo con vocación clasista. En lo jurídico, los países son puestos bajo una constitución hecha por decreto, en donde la ley de seguridad nacional es la norma suprema.

(64) Declaración del General Augusto Pinochet. Citado por Gerardo Aceituno el el. "Estados Unidos y los Estados de Seguridad Nacional en América del Sur", en Antonio Cavalla. Antología... p. 109.

Las fuerzas militares derrocan por la fuerza a gobiernos democráticos e inauguran una etapa de fuerte control político sobre toda la sociedad, aduciendo razones de seguridad nacional, frente a un enemigo tan poderoso que no solo debe ser reprimido y desmovilizado, sino aniquilado. Bajo esa óptica, la construcción de una nueva sociedad se hace indispensable:

El mundo asiste hoy a una crisis generalizada de las formas tradicionales de democracia cuyo fracaso y agotamiento... deben considerarse definitivos... Desde entonces mi país está abocado a la creación de una nueva institucionalidad, que habrá de ser el marco jurídico para una nueva democracia... con una autoridad fuerte que la proteja de la acción disgregadora de quienes solo anhelan su destrucción (65).

La creación de la nueva institucionalidad implicó un cambio radical del régimen jurídico. En Brasil, el Acto Institucional No. 1 (abril de 1964) estableció los principios básicos del nuevo gobierno al concebirse como una revolución que respondía a la voluntad y a los intereses de toda la nación, dotado de poder constituyente y autolegitimable, en tanto que con el Acto Institucional No. 2 (octubre de 1965) la Constitución dejó de ser la norma suprema; se otorgó al Presidente de la República la facultad de disolver al Congreso, de gobernar por decreto, se hizo del Estado de excepción una facultad discrecional del Ejecutivo, se dispuso la disolución de los partidos políticos y se estableció un sistema de elección indirecta del Presidente. Por su parte en Chile el Decreto Ley No. 1 estableció que "la Constitución y las leyes serán respetadas en la medida en que la presente situación del país lo permita a fin de cumplir mejor los postulados que la Junta se ha propuesto". Con el Decreto Ley No. 27 (septiembre de 1973) se declaró disuelto el Congreso, asumiendo la Junta Militar el Poder Constituyente; en diciembre de 1974, con el Decreto Ley 788 queda la Constitución - finalmente- como una norma subordinada a lo dispuesto en los decretos ley.

Por su parte, las leyes de seguridad nacional se convierten de hecho en el referente obligado para la actuación de las dictaduras: el Decreto Ley No. 314 brasileño, la Ley 16970 Argentina conocida como "Ley de Defensa Nacional, Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad" o la Ley Orgánica Militar uruguaya de 1974. Es en éstas donde principalmente se definen los conceptos de poder -casi siempre desde una óptica geopolítica- y objetivos nacionales y se establece la idea de que cualquier oposición a su realización es una agresión y quien la comete es un enemigo nacional.

Los regímenes militares de seguridad nacional procuraron fortalecer el poder nacional en el marco de una política de

(65) Ibid. p. 106.

de desarrollo, pero partiendo de la idea de una necesidad de seguridad interna. Por ello, el reequipamiento y reestructuración de las fuerzas armadas se baso en la premisa de una guerra revolucionaria que debía ser librada como una guerra total: "...la subversión no es un problema que requiera solamente una actuación militar, es un fenómeno global que requiere también una estrategia global de lucha en todos los campos de la política, de la economía, de la cultura y el militar" (66).

La idea de que existe un enemigo interno campea en todas las actividades de los gobiernos militares y la manera de combatirlo es a través de una guerra no convencional, pues ya no se trata de una invasión territorial, sino del intento de controlar al Estado desde dentro. El enemigo, claramente identificable, es el comunismo y contra el van todas las acusaciones de los males ya que este promueve el desorden en todas sus formas: material, con atentados; económico, con exigencias demagógicas o inflacionarias; social, con huelgas y paros laborales; moral, con la disolución de la familia; espiritual, con el entretamiento clasista. Según las dictaduras esto tenía un solo objetivo, la implantación del comunismo. Así pues se preguntan:

Cómo va a procurar el bien común un Estado cuya inseguridad llegara a colocarlo al borde de la disolución o del caos? No es acaso un supuesto indispensable de todo ser que busca su perfección y desarrollo el asegurar primeramente su propia subsistencia? La seguridad nacional así entendida emerge como un concepto destinado... especialmente a defender los valores esenciales que conforman el alma o tradición nacional. (Por ello el marxismo debe ser) combatido hasta su total derrota (67).

De esta manera, el combate contra el enemigo interno se considera como una guerra de la nación contra quienes pretenden su destrucción.

A partir de estas ideas todo es justificable, porque todo se hace en beneficio de la nación. Las tácticas de tortura más refinadas, campos de concentración nunca antes vistos en América Latina, persecución, asesinatos, desaparición de personas, existencia de grupos paramilitares sin precedente, limitación de la libertad de expresión y reunión. En pocas palabras, el terrorismo de Estado "en defensa de la nación" se enseñoreó en estas dictaduras, en un intento por despolitizar a las sociedades en donde había existido amenaza "comunista".

Lo extraordinario se vuelve cotidiano. La supuesta existencia del enemigo interno y la necesidad de una guerra

(66) Gral. Jorge K. Videla. La Nación, abril 14 de 1976. Buenos Aires, citado en Ibid p. 105.

(67) Gral. Augusto Pinochet. Mensaje Presidencial, septiembre 11 de 1976. Reproducido en Alvaro Briones, op. cit., p. 156.

permanente hacen necesario un Estado de excepción también permanente que facilite la acción violenta y coercitiva en contra del enemigo. Así en nombre de la seguridad nacional se declaran "estados de guerra", "estados de sitio", "estados de emergencia", "estados de conmoción interna", "toques de queda", que tienen en común la restricción de las garantías constitucionales, e incluso se legislan minuciosamente, como lo demuestra el Acta Constitucional No. 4 de la Junta Militar chilena, mediante la cual el monopolio de la violencia se convierte en un elemento discrecional de un solo hombre: el Presidente de la República. El individuo queda inerme frente a esta forma de poder pues no existe tampoco el recurso de habeas corpus en contra de los "subversivos". La constitución carece de importancia frente a lo que se estima "el interés nacional".

El Terrorismo de Estado de estos regímenes se convierte en el método político de acción estatal que los justifica y los sustenta. La represión se orientó a liquidar a la guerrilla y en general a la organización de la izquierda, a desmovilizar al movimiento popular, así como a erradicar las ideologías contrarias a la oficial y a militarizar a la sociedad hasta crear una conciencia de seguridad nacional, basada en el temor.

Las dictaduras militares crearon y controlaron organismos de información e inteligencia que, aunados al ejercicio casi absoluto de la fuerza, les permitieron afectar la orientación y el desarrollo del proceso político nacional. De esa forma, el terrorismo de Estado fue producto de una política planificada y controlada. En Brasil el Consejo de Seguridad Nacional -compuesto por los principales mandos militares- tuvo como función establecer los Objetivos Nacionales y las bases de la Política Nacional, es decir, formular el proyecto político concreto de la dictadura y determinar la forma de lograrlo, fue este organismo el que establecía las pautas para la política nacional y para las decisiones del gobierno: en tanto que el Servicio Nacional de Informaciones, era el que captaba y ofrecía los elementos para que el Consejo tomara las decisiones, pues se encargaba de coordinar en todo el país las actividades de información y contrainformación, sobre todo las que interesaban a la seguridad nacional. Por su parte, la dictadura argentina de 1966 estableció, a través de la Ley 16570, el Consejo Nacional de Seguridad que fue "el gobierno nacional mismo en donde todas las políticas particulares (económicas, sociales, de defensa, etc.) son integradas para responder a una política nacional de seguridad (68). Por su parte la dictadura de 1976 creó dos organismos que ejercieron el poder supremo: El Consejo de Seguridad Nacional compuesto por los altos mandos del ejército, tenía como función determinar la política nacional y dirigir todo el proceso político y la Agencia de Inteligencia y Acción, que velaba por la seguridad de la nación y ejercía un control ilimitado sobre los ciudadanos. En Uruguay el principal órgano

(68) Gral. Osiris Villegas, op. cit., p. 319.

militar de decisión fue la Junta de Oficiales Generales, sin embargo, el Consejo de Seguridad Nacional creado con la Ley Orgánica Militar de 1974, atendía como órgano ejecutivo la labor cotidiana del gobierno.

Si bien es cierto que puede aparecer el poder político de la clase dominante como un poder que expresa también a la clase dominada, esto nunca le importó a los regímenes de seguridad nacional que basaron el ejercicio del poder en el terrorismo de Estado. Mas aún, la contrarrevolución monetarista -que llevaron implícita- fue presentada como un simple programa económico de control monetario y liberación del mercado, pero que de hecho configuró un programa ideológico neoliberal que terminó por identificar los principios del mercado con el uso de una represión política radical. Pero, ¿Por qué la aplicación de los criterios de eficiencia tuvieron un efecto sistemáticamente negativo en fomentar la represión? La explicación puede buscarse en el hecho de que la burguesía tradicional (orientada hacia el mercado interno temerosa de la movilización y radicalización popular que puso fin a su hegemonía, se ve obligada a apoyar el nuevo proyecto de la gran burguesía transnacional, que a falta de hegemonía recurre al autoritarismo como una forma de dominación. Pero los militares no actúan solos, por el contrario, fueron una parte de la alianza que se cohesionó junto con la gran burguesía, la burguesía tradicional y los sectores industriales y financieros transnacionales. Fue así como la "mano invisible" del mercado y las fuerzas armadas crearon regímenes neoliberales en lo económico y autoritarios en lo político (69). Sin olvidar la enorme influencia que las políticas de seguridad nacional norteamericanas tuvieron en este proceso.

El proyecto de la gran burguesía, con una imperiosa necesidad de estabilidad político-económica y de una fuerte acumulación, se orientó a terminar no sólo con los riesgos populistas, sino también con los sectores ineficientes de la economía, asegurando una alta productividad en el trabajo y eliminando las políticas redistributivas.

Con estos regímenes, se acelera la concentración del ingreso, con el fin de elevar la tasa de inversión y la demanda de bienes de consumo durables que a su vez induce un nuevo crecimiento de la inversión. Para ello se incrementó el ingreso de las clases altas, fuertes consumidores de bienes durables y se disminuyó el salario real de los trabajadores, con el fin de liberar recursos que podrían destinarse a la inversión. Por otro lado, se tomaron medidas destinadas a destruir parte importante del total de las pequeñas y medianas empresas, lo que permitió su absorción por el gran capital.

Brasil emprendió una política económica orientada hacia la modernización del sistema económico, gracias a que logró llegar a

(69) Cfr. René Villareal. "Monetarismo e ideología..." p. 1968.

un acuerdo para crear una alianza con predominio del gran capital. Esto permitió la eliminación de los sectores más "ineficientes" y el reordenamiento de la estructura productiva. Sin embargo, la emergencia de la gran burguesía orientada hacia los mercados externos, coadyuvó a que se realizara una vigorosa política de estímulos y atractivos a la inversión extranjera. El gobierno militar revocó la Ley de Remesas de Lucro. Gracias a ello, en 1970, el capital extranjero participaba con un 70,2% en las industrias de punta y con un 50,3 en el comercio.

En la Argentina de 1976 se decretó un cambio radical en la política económica. Proscritos los partidos políticos, intervenida la CGT y los principales sindicatos, se volvió al pleno funcionamiento de la libertad de mercado, se redujeron considerablemente los salarios y se fomentaron las inversiones extranjeras, como parte del programa neoliberal de ministro Martínez de Hoz. Asimismo, en Uruguay se aceptó liberalizar crecientemente sectores de la economía, especialmente el financiero y se eliminaron subsidios y aranceles.

Con la dictadura chilena se logran los más claros beneficios para el capital extranjero. La Junta Militar canceló la indemnización de 349 millones de dólares que el gobierno de la UP había exigido a la Anaconda y a la Kennecott, así como los 125 millones a la ITT. Con el propósito de atraer al capital extranjero la dictadura promulgó, en julio de 1974, el Decreto Ley 600 y el 1748, en marzo de 1977. Entre las prerrogativas ofrecidas se encontraban: una tasa impositiva estable, garantía de trato no discriminatorio con las empresas nacionales, libre remisión de capital después de tres años, liberación de tarifas aduaneras sobre bienes de capital y la seguridad total de que no habría nacionalizaciones.

Estos regímenes también intentaron superar los problemas nacionales mediante una rigurosa planeación de las actividades gubernamentales, teniendo como punto de partida la seguridad nacional, pues "hace a la seguridad el adoptar medidas preventivas y ejecutivas que tiendan a superar la improvisación... el desorden y la indisciplina colectiva" (70). En Brasil se instituyeron las Directivas Generales de Planeamiento, en la Argentina de 1966 se dictó un Plan General y un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, en tanto que en Chile se creó un Sistema Nacional de Planificación. Con ellos se intentó integrar los procesos, las instituciones y las organizaciones creadas por las dictaduras, para alcanzar los objetivos nacionales, pero también para lograr una auténtica coordinación entre la planeación para el desarrollo y la planeación para la seguridad, integrando a esta como pieza esencial del proyecto nacional.

(70) Gral. Osiris Villegas, op. cit., p. 329.

La influencia geopolítica en la formulación de la DSN en América Latina contribuyó para que se adoptaran criterios políticos basados en aspectos geográficos. La integración fue uno de los proyectos más ambiciosos basado en esas premisas, pues fue concebida en términos de seguridad, preservación de la unidad, enriquecimiento cultural y fortalecimiento del poder económico de la nación. El papel atribuido a la integración fue el de fortalecer la seguridad nacional, disminuyendo las tensiones, eliminando los conflictos y minimizando los antagonismos sociales.

En Brasil el proceso de integración que implementó la dictadura incluía un programa de colonización en la transamazonia a través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, una mejor comunicación con la región mediante la construcción de tres importantes carreteras: la transamazónica, la Gran Ferimetral Norte y la Cuiabá-Santarem; una intensificación de las políticas de industrialización con prioridad para las industrias más ligadas a la seguridad nacional (transportes, comunicaciones, siderurgia y de alimentos); un fuerte apoyo tecnológico y financiero al noreste; así como la ampliación de la infraestructura nacional en telecomunicaciones.

En Argentina también se intentó acercar las provincias para consolidar una sociedad integrada en los planos geográfico, político, económico y social que permitiera liquidar los antagonismos sociales. Por su parte la Junta Militar Chilena implementó un Plan de Colonización del Sur orientado sobre todo a terminar con el aislamiento de dos regiones pobres y de fácil convulsión social como son Chiloé y Aisen. Debe destacarse que este "plan parte de responder a concepciones geopolíticas del Gobierno..." (71).

III. 4.2. POPULISMO MILITAR Y SEGURIDAD NACIONAL.

El anticomunismo constituyó el eje central de la preparación e ideologización de los militares latinoamericanos en la posguerra, empero ello no se tradujo siempre en un apoyo incondicional y en un apego irrestricto a la política norteamericana hacia América Latina. El anticomunismo de los oficiales latinoamericanos no excluyó, necesariamente, en todos los casos un sentimiento nacionalista que, por otro lado, se ha conformado en parte debido a las intervenciones norteamericanas en la región. La existencia de regímenes militares nacionalistas, sin embargo, "ha sido aceptada por Washington... como un mal menor frente a la posibilidad de una radicalización de la política y la formación de nuevos regímenes políticos en América Latina (72), sobre todo si en el fondo contribuían también a los

(71) Gral. Augusto Pinochet, Mensaje Presidencial, septiembre 11 de 1976. Reproducido en Alvaro Briones, *op. cit.*, p. 137.

(72) Claude Heller, *op. cit.*, p. 29.

propositos de las politicas de seguridad nacional norteamericanas. Asimismo, la realizacion de las acciones cívicas permitio que las fuerzas armadas entraran en contacto con los problemas nacionales derivados del subdesarrollo y la dependencia, eso motivo que en algunos países se produjeran efectos diferentes a los propuestos por los programas de la "contra-insurgencia pacífica".

Otro grupo de países -formado por Perú, Panamá y Ecuador- que también tuvo regimenes militares basados en una ideología de seguridad nacional, represento sin embargo una modalidad diferenciada de los anteriores por sus politicas de corte populista.

Esta variable de los regimenes de seguridad nacional no represento jamás una ruptura con el capitalismo mundial, por el contrario, intentaron desde el punto de vista de sus relaciones económicas fundamentales fortalecer su posición dentro del mismo. Las politicas que aplicaron para ese propósito se caracterizaron por su autonomía frente a los intereses norteamericanos en sus países, basadas en un nacionalismo dirigido por el régimen militar. Las estatizaciones, los continuos conflictos con las transnacionales y las nacionalizaciones fueron los hechos en los que se concretaron estas politicas.

Asimismo, mantuvieron una posición antioligárquica que les posibilitó, por una parte, mantener una política populista en relación a las masas urbanas y una política antilatifundista que se expresó en la realización de reformas agrarias significativas. En conjunto, fue un intento por realizar una política en la que el gobierno asumía las responsabilidades principales en la dirección económica del Estado, asociándose al capital nacional e internacional de acuerdo con un proyecto de capitalismo nacionalista.

Esta posición los llevo a una situación de tensión y dificultades permanentes con el capitalismo mundial: por un lado, formaban parte del sistema, y por el otro intentaban ser autónomos dentro de ese sistema que no admite tal pretensión, que es altamente integrador e interdependiente. El populismo nacionalista de estos regimenes es la expresión de esa contradicción: el nacionalismo del Perú se expresa en la política de recuperación nacional de sus recursos minerales y pesqueros; el nacionalismo panameño en la lucha por la recuperación del Canal; y, el nacionalismo de Ecuador en el intento por recuperar el control de sus riquezas petroleras.

En el plano interno estos regimenes asumen politicas afines a los del modelo anterior. El control de la inflación a través de la contención del alza salarial fue una medida ampliamente utilizada, sin embargo la política salarial no fue tan severa como la del primer grupo de países, pero tampoco permitió una efectiva distribución del ingreso favorable a las masas.

Fuese a que el gobierno asume un papel predominante en la economía nacional, no descarto nunca la posibilidad de la inversión transnacional a condición de que se sujetara a una legislación, que intentó ser beneficiosa para ambas partes.

En lo político, también se reduce al Parlamento a un papel decorativo (Perú) o lo declaran inexistente (Panamá y Ecuador), los partidos políticos son puestos bajo estricto control gubernamental, lo mismo que los sindicatos. Los medios de comunicación masiva son afectados con una censura sin precedentes e incluso se fortalecen los aparatos represivos con el propósito de mantener el orden del proceso definido por las fuerzas armadas. Sin embargo, la represión no se ejerció de manera cotidiana y sistemática. La persecución, la tortura y el asesinato no fueron métodos de uso frecuente e indiscriminado. El gobierno fue autoritario y no admitió contestación, pero la represión se ejerció en contra de los movimientos políticos y de las organizaciones que cuestionaban al sistema como un todo, y se le justificó como "la utilización jurídica y legítima de la fuerza, de la violencia, para asegurar la supervivencia del Estado y sus instituciones" (73), también frente al enemigo interno.

Estos se valieron de las masas y a ellas apelaron. El discurso mesiánico les fue característico. El apoyo del grueso de la población para la realización de su proyecto fue indispensable, pero ignoraron su parecer, fueron -como los anteriores- autolegitimables:

nuestra legitimidad no viene de los votos, de los votos de un sistema político viciado de raíz porque nunca sirvió para defender los auténticos intereses del pueblo. Nuestra legitimidad tiene su origen en el hecho incontrovertible de que estamos haciendo la transformación de este país, justamente para defender e interpretar los intereses de ese pueblo al que se engaña con impudicia (74).

Uno de los elementos diferenciables de estos regímenes militares fue su concepción sobre la seguridad nacional y las relaciones entre la problemática de la defensa y la del desarrollo. De acuerdo con esta concepción, una manera de salvaguardar la seguridad nacional es mejorando el nivel de vida de la población para contrarrestar la subversión interna. Asimismo esta idea de la seguridad nacional incluye la necesidad de preservar los recursos naturales, racionalizando su explotación y permitiendo el control del gobierno sobre los mismos. Estos gobiernos emprendieron políticas nacionales que comprendieron una política de bienestar general (política de

(73) Gral. Edgardo Mercado Jarrín, *op. cit.*, p. 208.

(74) Gral. Juan Velasco Alvarado, *La voz de la Revolución*, Lima, Oficina Nacional de Información, 1970, p. 94. Citado por Mario Monteforte Toledo, *op. cit.*, p. 129.

desarrollo y una política de seguridad "integral" encaminadas a lograr los objetivos nacionales de seguridad, que permitieran alcanzar la solución de los problemas socio-económicos.

El régimen militar peruano presentó como una justificante del golpe de Estado la necesidad de desarrollo del país. Pero no había experimentado con el modelo sustitutivo, su economía era atrasada en comparación con otras de la región y los sectores oligárquicos continuaban ejerciendo el poder hegemónico. Pero al igual que en otros países, un sector de la burguesía, el industrial del gran capital, pretendía establecer su proyecto económico y lograr el liderazgo del bloque en el poder. Para este grupo era necesario "modernizar el Estado; poner fin al poder de la oligarquía exportadora y de sus aliados extranjeros; estimular la economía, el sector agrícola en particular... (75).

Uno de los objetivos centrales de los gobiernos militares tanto del Perú como del ecuatoriano de 1972, fue el de reducir la dependencia externa, con el fin de lograr la ampliación del mercado interno, lo que otros países habían hecho con la sustitución de importaciones. Al mismo tiempo intentaron modernizar su sistema capitalista y neutralizar la movilización política.

El gobierno militar peruano logró crear un nuevo sector de la economía -el estatal- mediante la nacionalización de empresas extranjeras y la creación de industrias nuevas: nacionalización del petróleo, de las minas (en forma parcial), de la pesca, de los bancos, y de la parte de la metalurgia.

Panamá, como un simple enclave financiero, agrícola e industrial-norteamericano, no pudo contar con un ejército nacional, sino con un cuerpo policial que -de cualquier forma- fue entrenado y capacitado por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Esta situación cambió radicalmente tras el golpe de Estado que el Gral. Torrijos dirigió en contra del presidente Arias el 11 de octubre de 1968. A partir de entonces se instaló un régimen militar y un gobierno sustentado directamente en la Guardia Nacional, con el fin de llevar adelante un programa nacionalista. Pero también un programa basado en los principios fundamentales de la ideología de la seguridad nacional. El gobierno de la Guardia Nacional hace desaparecer al Parlamento y a los partidos políticos, asume un firme control sobre la prensa y la oposición. En 1972 se dicta una nueva Constitución que pone en el centro del poder panameño a la Guardia Nacional.

El del Gral. Torrijos es el caso más claro del militarismo nacionalista que realiza -en un último análisis- los propósitos de las políticas de seguridad de Estados Unidos en los años sesenta. Entrenado en las escuelas militares norteamericanas del Canal, recibió cursos en los cuales se destaca la participación

(75) Allan Angell, op. cit., p. 38.

de las fuerzas armadas como "nation-builders" a través de la acción cívica. El gobierno de la Guardia Nacional inhibió la radicalización de cualquier insurrección armada y se autodefinió como la única institución capaz de hacer efectivas las demandas populares. En ello subyace la idea de la "seguridad interna" norteamericana para América Latina: una revolución pacífica y desde los cuarteles para evitar que se filtre el enemigo "comunista".

A diferencia del golpe militar de 1964 que fue estrictamente anticomunista, el dirigido por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara (15 de febrero de 1972) implantó en Ecuador un gobierno militar que se autodenomina nacionalista y revolucionario. Acaecido en medio de una crisis hegemónica en la que los sectores oligarquicos pierden control sobre el bloque en el poder en favor de la burguesía industrial, el nuevo gobierno militar se erigió como defensor de la patria y de la seguridad interna de la misma (76). Disolvió los partidos políticos y el Congreso, apoyó el proceso de industrialización básica del país, fomentado y protegido por el Estado con base en las regalías petroleras. Debe apuntarse que uno de los elementos claves de la dictadura de Rodríguez Lara fue la recuperación de la riqueza petrolera que los gobiernos posteriores a 1964 habían enajenado a las transnacionales. La industrialización, la confrontación con la oligarquía a través de una reforma agraria sin precedentes en el país y una posición nacionalista frente al poder de las empresas extranjeras caracterizaron a esta etapa de la historia ecuatoriana.

En el documento Filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista del Ecuador, se constata la influencia de la "Revolución Peruana" y su sentido populista:

Los constantes fracasos de los gobiernos, la ausencia del pueblo en los centros de decisión, la inmoralidad e ineficiencia administrativa, la incapacidad de los partidos políticos para interpretar las aspiraciones del pueblo y fundamentalmente la estructura económica determina la existencia de una sociedad injusta... (por ello) las Fuerzas Armadas ... al asumir el poder... lo hacen dispuestas a implementar una nueva doctrina política ideológica nacional que permita llevar a cabo las transformaciones sustanciales... (77).

III. 4.3 UN ENFOQUE UTILITARISTA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Los modos y las formas con que se hicieron las guerras

(76) Francisco Dávila Aldas. Las luchas por la hegemonía y la consolidación política de la burguesía en el Ecuador (1972-1978) p. 83.

(77) Ibid. p. 86.

contrarrevolucionarias correspondieron a las posibilidades económicas y militares de cada país, determinadas estas por el nivel de desarrollo, la politización y unidad de la población y la composición y estructura de las fuerzas armadas. Ningún país de la Cuenca del Caribe que aplicó políticas contrarrevolucionarias - como medio para garantizar "su" seguridad nacional- logró sistematizar una doctrina militar bajo los influjos del entrenamiento norteamericano a los oficiales de la región.

Esta situación determinó que en la Cuenca del Caribe, las políticas de seguridad nacional norteamericanas se aplicaran de manera directa, sin verdaderas posibilidades para que los militares centroamericanos y caribeños pudieran orientar el sentido de dichas políticas -como si lo hicieron los sudamericanos. Por el contrario, se fomentó el establecimiento de Estados anticomunistas como una forma de ganarse el apoyo y la ayuda de Estados Unidos.

La alternativa era, por otro lado, la aplicación más drástica de las políticas norteamericanas para la "preservación" de su seguridad: la invasión directa y la implementación de medidas propias de un protectorado.

Para los Estados anticomunistas de la Cuenca del Caribe, Estados Unidos tenía reservada una política de préstamos y donaciones que le garantizaba la lealtad de los gobiernos y reforzaba su influencia en los aparatos de poder. En la década de los sesenta, el gobierno norteamericano procuró colocar capital público para reforzar el crédito privado. En esa empresa participaron tanto el FMI, el Banco Mundial, el BID, como la AID y el Eximbank. En el Caribe, Trinidad y Tobago, Jamaica y la República Dominicana recibieron la porción más significativa de la ayuda económica durante los primeros cinco años de esa década. Estos tres países fueron receptores de 3-5 partes de la asistencia para el Caribe, situación que se explica porque en esos años los dos primeros estaban en tránsito a la vida independiente y porque la República Dominicana atravesaba un período de agitación política.

El régimen anticomunista de Balaguer contó con grandes posibilidades de financiamiento norteamericano, derivados del interés de Washington por mantener el equilibrio político. La ayuda fue inicialmente gratuita en tanto se mantuvieron en suelo dominicano las fuerzas de ocupación, las que por otro lado asumieron un control muy estrecho sobre las actividades del Estado. Asimismo, Estados Unidos incrementó la cuota preferencial para el azúcar de la República Dominicana. Para la oligarquía fue un negocio redondo el gobierno anticomunista.

El gobierno de Castillo Armas, que se propuso "desovietizar" a Guatemala, creó el Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo. La recompensa llegó de manera inmediata, durante los

primeros seis meses recibió donativos norteamericanos por 80 millones de dólares y una línea de crédito por el Banco Mundial sin condiciones. El capital privado tampoco se hizo esperar, por lo que al final el gobierno del Gral. Ydígoras Fuentes (1963) la inversión norteamericana se había duplicado.

De igual forma, el Gral. Ydígoras aceptó que se utilizara el suelo guatemalteco para preparar la invasión a Bahía de Cochinos, a cambio de que el gobierno norteamericano incrementara la cuota azucarera de Guatemala y perdonara el pago de los dos millones de dólares que la CIA había extendido a Castillo Armas para derrocar al gobierno de Arbenz.

CAPITULO IV
ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA
EN LA DECADA DE LOS OCHENTA

El Gobierno de Carter no elaboro una política articulada y coherente para América Latina debido, en parte, a que carecía de sentido conforme a la visión trilateral predominante durante dicha administración. La relación con América Latina se baso, por el contrario, en un enfoque amplio y flexible, al enmarcar a la región como una parte más del Tercer Mundo.

El caso de Watergate -que socava la legitimidad del sistema presidencialista para un gran número de estadounidenses- y la reconocida derrota en el sudeste asiático -que retrae a Estados Unidos hacia sí mismo-, son factores que contribuyeron para que el Gobierno de Carter enfocara preferentemente su atención al conjunto de problemas vinculados con la necesidad de recuperar la legitimidad interna y la imagen de Estados Unidos como un pueblo forjador de la democracia y luchador por la libertad. Pero la crisis que afrontaba tenía connotaciones más amplias, por un lado, el fortalecimiento de Alemania Federal y Japón como potencias económicas en detrimento de la supremacía absoluta que había tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, por el otro, la incapacidad de sostener al sistema monetario-financiero creado en Bretton Woods. El trilateralismo, como estrategia que intenta resolver la crisis en el interior del sistema capitalista mundial mediante la coordinación de sus principales potencias, fue la respuesta a la serie de problemas que se enfrentaban.

En cuanto a la visión estratégica global, la Administración Carter y el movimiento trilateral fueron más optimistas que sus antecesores en relación a la posibilidad de evitar una confrontación nuclear. Si bien consideraban que existían grandes contradicciones con la Unión Soviética, veían en el bloque socialista un campo potencial para la circulación de los productos, la tecnología y los flujos financieros del capitalismo.

Es en este marco general que la política de defensa de los derechos humanos se presenta como un instrumento dirigido a fortalecer la posición norteamericana en la lucha ideológica internacional, así como para reactivar el propio consenso interno, y como "en América Latina, donde parecía no haber amenazas inmediatas a la seguridad en 1977, se aplicó la política de los derechos humanos con toda su fuerza". En este marco también puede entenderse el proyecto "democrático" trilateral para los países del Tercer Mundo sometidos a dictaduras militares, como un proyecto de democracias "restringidas". Finalmente, el reemplazo de una línea de confrontación por una de colaboración con los países en los cuales se luchaba por ciertos cambios sociales y políticos no fue un abandono de los intereses norteamericanos (entre ellos la seguridad) sino una forma diferente de alcanzarlos.

IV.1. AMERICA LATINA Y LA VISION NEOCONSERVADORA DE LA SEGURIDAD NACIONAL NORTEAMERICANA.

En los años ochenta el interes nacional norteamericano vuelve a ser colocado como la justificacion necesaria de la actividad gubernamental en el exterior y como el parametro para el exito o fracaso del gobierno, en esa materia.

Gaspar Weinberger, Secretario de Defensa durante gran parte de la Administracion Reagan, ha dicho que su pais no debe involucrar a sus fuerzas armadas, salvo para preservar su propio interes nacional vital, pues ha considerado que Estados Unidos no puede asumir por otras naciones soberanas la responsabilidad para la defensa de sus territorios, si la libertad norteamericana no está amenazada (1). Pero tambien ha estimado que

el poder militar norteamericano es el prerrequisito para la paz. La fuerza es el precio de la paz. Si la paz parece costosa, considerense las alternativas. Por escatimar en fuerza reduciremos nuestra seguridad e incrementaremos los riesgos de la guerra. Mas aun, si fallamos en mantener la paz, los costos seran incalculables (2).

La Administracion Reagan consideraba que el gobierno de Carter habia llevado a Estados Unidos al desastre, que su poderio militar ya era inferior al de la Union Sovietica y que ésta habia extendido su zona de influencia ante la pasividad norteamericana. Asimismo, estimaba -junto con toda la corriente ideologica de la que se nutria- que los cambios ocurridos en el mundo no eran en esencia el resultado de agudos conflictos internos, sino producto del enfrentamiento entre el Este y el Oeste.

En este sentido, la Administracion Reagan subordinó cualquier intento de politica parcial a la politica global, por lo que los conflictos regionales se insertaron en la vision geopolitica y geoestrategica de Estados Unidos. Por otra parte, la contradicción entre países industrializados y países pobres se consideró un aspecto secundario en relacion con la problematica mundial, en el balance de poder entre la Union Sovietica y Estados Unidos. La agresion y la imposicion pasaron a ser medio legitimos y eticos, en tanto se dirigieran a proteger los intereses norteamericanos.

La idea de que debe ser recuperado el poderio militar de Estados Unidos a través del desarrollo de armamentos y del incremento del gasto militar, subordinó la politica exterior a la de seguridad y defensa. Pero tambien la necesidad de recuperacion llevó a la Administracion Reagan a implementar recomendaciones planteadas por la Heritage Foundation y el Comite de Santa Fe entre otros, como un retorno a los valores tradicionales y una revalorización de la seguridad y del optimismo nacionales. Así fue como se reforzó la idea mesiánica de los norteamericanos:

(1) Citado por Alan Tonelson, *op. cit.*, p. 64.

(2) Caspar W. Weinberger, "U.S. defense strategy", p. 696.

La libertad no es sólo prerrogativa de unos pocos, es el derecho universal de los hijos de Dios. Mírese donde la paz y la prosperidad florecen. Ahí donde la libertad fue construida. Las victorias en contra de la pobreza son mayores y más seguras en donde la gente vive bajo normas que protegen la libertad de prensa, de opinión y de trabajo. Nuestra misión es defender e incrementar la libertad y la democracia, así como extender estas ideas a todos los lugares donde podamos (3).

El enfrentamiento Este-Oeste fue el único lineamiento válido para interpretar todos los conflictos internacionales, pues como lo ha señalado Kirkpatrick "más allá de la valorización de las raíces nacionales de un determinado conflicto, en último término la victoria de uno u otro hace más fuerte o más débil a Estados Unidos en su poderío mundial" (4). En esta concepción una vuelta a las ideas que permearon la posición norteamericana durante la Guerra Fría, de ahí que los neoconservadores recomienden que se vuelva a un enfoque globalista, de enfrentamiento entre las grandes potencias. Este conflicto determinaría entonces el tipo de relaciones que el gobierno norteamericano mantenga con los restantes países. La política exterior y la política de defensa y seguridad dejaron de tener entonces una separación clara.

El compromiso del Gobierno norteamericano de expandir el dominio de Estados Unidos y de combatir la esfera de influencia del comunismo con un espíritu propio de la Guerra Fría, no se limitó a una simple política de contención, sino que su sello distintivo fue la determinación de hacer retroceder lo que se percibía como un avance del marxismo.

El Gral. Woerner declaró en 1988 que "las amenazas a los intereses de nuestra seguridad nacional en América Latina son exactamente tan reales como al propio tiempo más sutiles que las del Pacto de Varsovia" (5). En 1980, los principales estrategas del candidato Reagan elaboraron el Documento de Santa Fe, que se convirtió en la guía ideológica de la política norteamericana hacia América Latina. Las conclusiones del Comité no pueden ser más sintomáticas de lo que sería la política de seguridad nacional norteamericana para la región:

El continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos,

(3) Discurso de Ronald Reagan (febrero 6 de 1985), citado por S. Rosenfeld, "The guns of July. The Reagan Doctrine", pp. 701 et seq.

(4) Luis Maira, "Nota preliminar sobre la influencia creciente del pensamiento de la nueva derecha norteamericana en América Latina", en Idem. (comp.) Estados Unidos: una visión..., p. 140.

(5) Frederick F. Woerner, Comandante en Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, "Discurso ante la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes", p. VI.

está siendo penetrada por el poder soviético. La Cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por estados socialistas.

América Latina es vital para Estados Unidos; la proyección del poder mundial de Estados Unidos siempre ha descansado en un Caribe cooperativo y en una América Latina que ha brindado apoyo. Estados Unidos está siendo desafiado del Caribe y Centroamérica por un sofisticado pero brutal superpoder extracontinental... la influencia soviética se ha expandido poderosamente... Estados Unidos debe remediar esta situación (6).

Con la Administración Reagan se da pues un cambio en la concepción de la seguridad nacional norteamericana en América Latina, el enemigo "interno" deja de ser el centro de la preocupación. Nuevamente un enemigo "externo" es claramente identificado como el principal responsable de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos en su zona de influencia inmediata.

La percepción de América Latina como una región de máxima prioridad para la aplicación de los principios de la contención implicó la sustitución del globalismo económico trilateral de la Administración Carter, por otra visión global pero con un contenido estratégico y geopolítico, que por las características geográficas y la situación política de Centroamérica y el Caribe, hicieron de esta subregión un área obligada para la aplicación de las políticas de seguridad de la Administración Reagan.

En efecto, en la década de los ochenta, la Cuenca del Caribe fue percibida por Estados Unidos como un territorio geoestratégico con un estricto interés geopolítico y todas las acciones de la Administración Reagan en el área partieron de esa consideración. Lo que explica que en febrero de 1984 se haya aprobado la Directiva de Seguridad Nacional 124 con la que se enfocó al conflicto centroamericano como un problema eminentemente norteamericano.

Las políticas para la defensa de la seguridad nacional norteamericana en la Cuenca del Caribe fueron aplicadas con el fin de evitar acontecimientos que requirieran la asignación de grandes recursos para la defensa de su flanco meridional; suprimir la amenaza para las vías marítimas del Caribe; evitar la proliferación de estados marxistas-leninistas que pudieran

(6) Fontaine et al. "Las relaciones interamericanas: escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos", pp. 181, 182, y 214.

incrementar la violencia y la inestabilidad regional; y, con el propósito de poner fin a la erosión de la capacidad norteamericana para influir en los acontecimientos que crearían una imagen internacional de que Estados Unidos era incapaz de proteger sus propios intereses vitales (7).

Si bien es cierto que durante toda su administración el gobierno de Reagan concentró su atención preferentemente en la Cuenca del Caribe, en detrimento del resto de América Latina, también lo es que para Estados Unidos sus "... intereses nacionales de largo plazo requieren que se evite la separación, la pérdida de influencia política y finalmente las equivocadas percepciones estratégicas en la región" (8).

Fese al lugar común tan difundido sobre las políticas de la Administración Reagan hacia América Latina, como un gobierno que evitaría a toda costa la vuelta a la democracia en la región y que apoyaría sin restricciones la dictadura militar -posición acrítica, con sustento ideológico, pero sin bases analíticas-, los principales asesores del gobierno norteamericano en esta década consideraron que a largo plazo era mejor para el interés nacional de Estados Unidos contar con gobiernos latinoamericanos amistosos, moderados e independientes de influencias extracontinentales, por lo que debería de apoyarse y estimularse a los gobiernos democráticos en donde los hubiera, así como a los procesos de transición pacífica a la democracia donde faltaran (9). Kirkpatrick incluso reclamó el fin del desorden y de las exigencias populistas; un gobierno autoritario y fuerte que evitase los males pasados sería la solución -pensaba-, pero nunca habló de que estos deberían de ser necesariamente militares; más aún, planteaba la necesidad de un nuevo consenso -el sueño hobbesiano- que terminase con el estado de naturaleza, pero con un gobierno emanado del acuerdo de la sociedad civil. Lo que tampoco excluía, por el contrario, lo exige -conforme a la propia visión e intereses norteamericanos- una lucha "para impedir que lleguen a tomar el poder los grupos extremistas y terroristas de izquierda, así como sus organizaciones políticas" (10), causantes siempre del desorden.

Es claro que atendiendo a un mismo objetivo, pero por diferentes medios, las dos últimas administraciones norteamericanas fomentaron la democracia en América Latina.

IV. 1. 1. La Revolución Nicaraguense: el retorno de la preocupación norteamericana por América Latina.

(7) Secretaría de Estado de los Estados Unidos. "Sostenimiento de una política congruente en América Central; a un año del Informe de la Comisión Bipartidista Nacional". p. 10.

(8) Fredrick Woerner, loc. cit.

(9) Constantine C. Mençes "Los Estados Unidos y América Latina en los ochenta". pp. 427 et seq.

(10) Ibid.

Incierta y oscilante fue la reacción de la Administración Carter hacia el proceso revolucionario que vivió Nicaragua en los últimos años de la década de los setenta. En un principio — congruente con su posición de recambio democrático— canceló la ayuda económica y militar al Gobierno de Somoza, al tiempo que presionó al dictador para que renunciara en favor de un gobierno moderado. Sin embargo, Somoza no cedió, continuó con la represión a tal grado que la sociedad nicaraguense se polarizó dejando como única opción real, una victoria sandinista. Ante tal perspectiva, la Administración Carter modificó su posición inicial e intentó desde entonces evitar el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La Revolución triunfante del 19 de julio de 1979, con los sandinistas como cabeza del nuevo gobierno, hizo que la Administración Carter intentara reparar su falta. Se propició, entonces, un acercamiento amistoso con la Junta de Gobierno y se le brindó ayuda, creyendo que de esa forma moderaría su actitud insurgente. Empero, en los últimos meses de su gobierno, Carter retiró todo su apoyo a Nicaragua, arguyendo un envío de armas de ésta a la guerrilla salvadoreña.

En esta inconsistente actitud, la Administración Carter había demostrado que no simpatizaba con el sandinismo, ni tampoco intentaba fortalecerlo, por el contrario trató de debilitarlo para fortalecer a las fuerzas de derecha que habían estado participando en la Junta de Gobierno.

La revolución nicaraguense mostró que políticas como la de derechos humanos y apoyo abierto a los cambios en América Latina, se subordinaban finalmente a las exigencias del interés y la seguridad norteamericanos, sobre todo si —como lo hizo al final la Administración Carter y durante todo su mandato la encabezada por Ronald Reagan— se colocan a este tipo de movimientos sociales en un marco estratégico global, subordinando la influencia de las condiciones internas de las formaciones sociales latinoamericanas como el principal factor explicativo de las insurrecciones populares.

Pero, por otro lado, también el avance del FSLN en contra de la dictadura, el resurgimiento de la lucha guerrillera salvadoreña y su recrudecimiento en Guatemala influyeron para que el gobierno cubano creyera que se estaba dando una nueva y triunfante oleada revolucionaria y, por primera vez en la década de los setenta, brindó ayuda militar a movimientos guerrilleros de América Latina. Hecho que recrudecería la respuesta del gobierno norteamericano.

En efecto, el proceso que se inicia en América Central a partir del triunfo del Frente Sandinista, es visto por Estados Unidos como una segunda crisis de su posición dominante. La respuesta de los neoconservadores pretendía revertir dicho proceso —y no sólo contenerlo—, pues de acuerdo con la nueva concepción, Nicaragua representaba una pérdida para Estados

Unidos, en favor de la Unión Soviética, pero también constituía una amenaza ya que la revolución podría diseminarse en toda la región y poner, con ello, en peligro la seguridad norteamericana.

La reversión del fenómeno requería sólo de la decisión norteamericana, pues como lo había declarado Merges poco antes de ser nombrado Oficial Nacional de Inteligencia para el Hemisferio Occidental, "una enorme falla de la voluntad política y de la prudencia ha resultado en el establecimiento de gobiernos en Granada y Nicaragua que están ahora casi bajo total control marxista-leninista" (11). Al menos eso se pensaba.

El triunfo de la revolución nicaraguense es sin duda -en los últimos años- el acontecimiento que más ha influido en el gobierno norteamericano, para la implementación de una política de seguridad nacional que actualiza el valor que América Latina tiene para Estados Unidos:

Nicaragua representa la oportunidad para que la Unión Soviética establezca un centro de influencia en América Central, que pueda amenazar las recientes tendencias democráticas, erosionar la influencia estadounidense en la región, y desviar recursos norteamericanos de otras áreas de mayor valor estratégico para los soviéticos. Nicaragua siguiendo el patrón establecido hace 25 años en Cuba, es un santuario regional y fuente principal para diseminar la insurgencia a través de América Central (12).

Durante los dos primeros años de su gobierno, la Administración Reagan creyó que sería relativamente fácil detener el proceso revolucionario en Nicaragua, así como derrotar a los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala. La realidad fue otra, por eso se pasó de una fase de contención activa y de escalada a un intento de reversión en el marco de la respuesta flexible.

IV. 1. 2. LOS NUEVOS METODOS DE CONTROL.

El proyecto nacional de Estados Unidos, que incluye la preservación de su seguridad nacional, también se orienta a conservar y extender los valores y el modo de vida norteamericanos, así como a fortalecer la economía del país y la riqueza de sus nacionales. La búsqueda de estos últimos objetivos llevo en la década de los ochenta a la salvaguarda de la seguridad nacional norteamericana en América Latina. La "ayuda para el desarrollo" se convirtió en el mejor de los métodos para que los países de la región se incertaran definitivamente bajo el control norteamericano, sin posibilidad alguna de asumir actitudes contrarias a los intereses del bloque del que forman

(11) Citado por Abraham F. Lowenthal. "Ronald Reagan y Latinoamérica: enfrentamiento con la hegemonía declinante". p. 28.

(12) Organización de los Jefes del Estado Mayor Conjunto. op. cit., p. 53.

parte, a menos que desearan verse excluidos de los movimientos comerciales, financieros y económicos internacionales, sin posibilidad de recibir ayuda alguna. El precio de la osadía podría ser demasiado alto y ningún gobierno en América Latina ha estado dispuesto a pagarlo.

Pero también ha habido medidas militares —como se explica en el punto anterior— para preservar la seguridad nacional norteamericana en América Latina. Una renovada concepción del enemigo y la depuración de los métodos para enfrentarlo son los aportes más significativos de la política militar neoconservadora en la década de los años ochenta.

IV. 1.2.1. LOS CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD.

Al asumir el gobierno de Estados Unidos, la Administración Reagan no aceptó la convivencia con la revolución nicaraguense ni con algún otro movimiento que pudiera alterar el status quo hemisférico. Las guerrillas en Guatemala y El Salvador, el ascenso del Movimiento Nueva JORJA en Granada y la presencia de gobiernos con tendencias socialistas en Jamaica y Guyana, hicieron que se actualizara el valor geoestratégico que para Estados Unidos representa la Cuenca del Caribe.

Pero los estrategas norteamericanos habían visto disminuir su capacidad de dominio también en otras partes del mundo. Parecía que dejaban de influir en el derrotero de los conflictos regionales. La toma de la Embajada norteamericana en Teherán, la invasión soviética en Afganistán, el fortalecimiento de la presencia cubana en África Austral, los continuos atentados contra oficiales y ciudadanos norteamericanos, fueron creando una nueva manera de hacerles frente. Para Estados Unidos era esencial restablecer su dominio y los neoconservadores sentaron las bases ideológicas para una contraofensiva.

Dos conceptos estratégicos tomaron forma para ser aplicados de manera global en el Tercer Mundo, la Cuenca del Caribe no fue la excepción.

El despliegue rápido, destinado a la intervención militar con fuerzas norteamericanas, se basa en la idea de que "cuanto más pronto estemos involucrados en una situación que afecte los intereses de Estados Unidos, menor será el costo último, y mayor será el rango de opciones de fuerza de bajo costo disponible para hacer frente a las amenazas" (13). Esta opción militar se orienta "a la resolución rápida de los conflictos mediante la rápida aplicación de su arrollador poderío" (14). Empero, su

(13) Frederick F. Woerner, discurso cit., p. 7.

(14) "Remarks prepared for delivery by the Hon. Gaspar Weinberger, Secretary of Defense, at the Conference on Low-Intensity Warfare". Washington, January, 1986. Citado por G. Selsler, "Conflictos de baja intensidad: una teorización de Gaspar W. Weinberger sobre el terrorismo de Estado". p. 14.

aplicación se ha limitado contra Estados cuya amenaza no se ha consolidado o se encuentra en crisis. lo que permite un autentico despliegue de fuerza norteamericana, sin posibilidad de respuesta por parte del Estado agredido. En la Cuenca del Caribe se aplicó esta opción militar en Granada, en un momento y circunstancias que permitieron una victoria fácil para Estados Unidos. Fara hacer viable el despliegue rápido se requiere de antemano asegurar un triunfo contundente, en virtud de que

No podemos permitir que nuestro desden por algunos regimenes imperfectos genere alternativas mucho peores. Tenemos que decidir que forma debe tomar la intervencion si es que vamos a intervenir y por cuales medios y a través de cuales agencias se ejecutara (15).

Los conflictos de baja intensidad. son la otra cara del despliegue rápido. Con ellos se tiende a evitar hasta donde sea posible la intervencion militar norteamericana directa en aquellos conflictos que están por debajo del nivel de la guerra convencional y en los cuales no es posible asegurar una victoria contundente de manera inmediata. Fara el Gral. Gorman, exjefe del Comando Sur, los conflictos de baja intensidad son

las situaciones en que los perpetradores de la violencia recurren al crimen coercitivo, al sabotaje, la subversion, el terrorismo o la guerra de guerrillas, frente a lo cual Estados Unidos limita su respuesta militar a la acción directa de las Fuerzas de Operaciones Especiales, o a la asesoría y apoyo de un aliado amenazado... (16)

La acción norteamericana en los conflictos de baja intensidad también ha incluido la diplomacia coercitiva, operaciones psicológicas, contrainsurgencia, terrorismo de Estado y despliegues militares con objetivos limitados. Todo lo cual ha generado conflictos con una intensidad moderada, pero enmarcados en una guerra contrarrevolucionaria prolongada, en cuya práctica se procura que no haya -por otra parte- enfrentamientos prolongados de fuerzas regulares norteamericanas, los enfrentamientos se dan preferentemente entre grupos locales.

El escenario de los conflictos de baja intensidad lo representan masas contrarrevolucionarias ("luchadores de la libertad") dirigidos por grupos profesionales contrainsurgentes, apoyados por ejercitos locales y por Estados Unidos con armas, aprovisionamientos, municiones y pertrechos, así como con asesoramiento, servicios de inteligencia y logística.

(15) Declaración de C. Weinberger, citado por G. Seiser, "Una doctrina Reagan para las guerras insurgentes: conflicto de baja intensidad y terrorismo de Estado", p. 12

(16) Citado por Raul Leis, "El Comando Sur, poder hostil" p.78.

Lo novedoso en los conflictos de baja intensidad no estriba en la guerra contrarrevolucionaria, tampoco en el uso de la ayuda exterior, sino en el paso de la contención a un auténtico rollback. Así, en la década de los ochenta la contrarrevolución deja de ser una simple reacción para transformarse en una ofensiva contra el avance del comunismo:

Durante demasiado tiempo las naciones libres se conformaron con trazar rayas sobre el polvo reconociendo a los comunistas sus conquistas, en el mejor de los casos, esforzándose en impedir nuevas conquistas... ahora debemos poner a los aprendices totalitarios a la defensiva para contribuir a introducir la incertidumbre en sus planes imperialistas (17).

A diferencia de la aplicación de las políticas de seguridad nacional en la década de los sesenta, donde se buscó sobre todo la aniquilación del enemigo, con los conflictos de baja intensidad se intenta deslegitimar, aislarlo y sotocarlo, a tal punto que los gobiernos revolucionarios o los movimientos guerrilleros -según el caso- dejen de tener viabilidad para institucionarse. La política exterior norteamericana de la Administración Reagan ha canalizado sus objetivos hacia la restauración del orden y la autoridad, ahí donde -para los intereses norteamericanos- han sido socavados. Los conflictos de baja intensidad tampoco son acciones encubiertas realizadas por los servicios de inteligencia norteamericanos, a la manera de la década pasada, se trata más bien de una política de Estado, de una política expresamente asumida.

Los conflictos de baja intensidad se componen de tres tipos diferentes de operaciones militares: la contraquerrilla, la ofensiva contra el terrorismo y el apoyo a las guerrillas anticomunistas en el Tercer Mundo. Se descarta, excepto que sea una necesidad inevitable, la intervención militar, cuyas unidades tácticas en todo caso son las Fuerzas de Despliegue Rápido, como las utilizadas en la invasión a Granada. Como guerras de bajo costo para Estados Unidos, los conflictos de baja intensidad, se realizan utilizando a las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Estas fuerzas proporcionan entrenamiento en el uso de armas e instruyen en tácticas de guerra a ejércitos anticomunistas. Sus acciones también incluyen el desempeño de acciones cívicas como la construcción y restauración de infraestructura y otros servicios sociales, para contrarrestar la acción de los grupos de izquierda. Por lo que, las Fuerzas de Operaciones Especiales (SOF)

son fuerzas especialmente entrenadas, equipadas y

(17) Declaración de William Schneider Jr., Subsecretario de Estado, ante el Senado, Citado por Michel Klare, "Los conflictos de baja intensidad. La nueva doctrina de intervención norteamericana, p.3.

organizadas del Departamento de Defensa con la misión de llevar a cabo operaciones especiales (SO) para alcanzar objetivos nacionales, militares, políticos, económicos y psicológicos. Las SO pueden ser llevadas a cabo durante períodos de paz o de guerra y pueden apoyar operaciones convencionales o ser encomendadas y llevadas a cabo independientemente cuando el uso de fuerzas convencionales sea inapropiado o ifactible (18).

En América Central los conflictos de baja intensidad han sido integrales, en el sentido que no solo incluye la presencia de las SOF (pilares para la creación y mantenimiento del ejército contrarrevolucionario en Nicaragua), sino que -en El Salvador y Guatemala- su presencia se ha traducido en la creación de aldeas estratégicas, entrenamiento castrense y acción cívica militar. Asimismo, los conflictos de baja intensidad han fortalecido y hecho más frecuentes las tradicionales maniobras navales norteamericanas en la Cuenca del Caribe -desde la base naval de Guantánamo, la isla de Vieques (Puerto Rico) y el golfo de Fonseca- que han asumido un sentido provocador y de disuasión en contra de las fuerzas populares y revolucionarias; sin olvidar que la preparación de la infraestructura militar, necesaria para apoyar a los contrarrevolucionarios, ha llevado a la instalación de un complejo militar en Honduras (incluye cuarteles generales, centros de entrenamiento militar, aeropuertos militares, estaciones de radar y abastecimiento) que apuntala la estrategia para revertir a la revolución nicaraguense y las acciones del FMLN salvadoreño, articulado a los establecidos en el Canal de Panamá, Puerto Rico, el sur de Estados Unidos y en Guantánamo; finalmente, contra Nicaragua ha habido bloqueo, minado de puertos, desestabilización económica, guerra psicológica, campañas de desprestigio internacional, acción cívica de la "contra", sabotajes y militarización de las fronteras de sus vecinos (19).

IV. 1. 2. 2. DEUDA EXTERNA Y SEGURIDAD NACIONAL EN AMÉRICA LATINA

Es incuestionable que América Latina se encuentra vinculada al capitalismo mundial y en particular a la economía de Estados Unidos, por lo que no puede quedar al margen de lo que ocurre en el centro del sistema.

Los patrones de producción, de industrialización y, en general, de desarrollo, que los países de América Latina llevaron

(18) Organización de los Jefes del Estado Mayor Conjunto, op.cit. pp. 63-64.

(19) Sobre las cifras de este "escudo de seguridad" puede consultarse el documento citado de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, p. 12.

a cabo durante la década de los setenta les exigió la importación de toda clase de bienes para lograr sus objetivos económicos. Estas compras en el exterior fueron financiadas en gran medida por el "dinero fácil" que fluía hacia el Tercer Mundo, producto de un mercado financiero con exceso de liquidez y necesitado de colocar su numerario. En estas circunstancias, el endeudamiento externo de América latina creció como nunca antes lo había hecho y fuera de toda previsión. Los gobiernos tanto civiles como militares vivieron la euforia del financiamiento que parecía no tener límites aparentes. La ayuda para el desarrollo que los centros financieros ofrecían parecía a muchos como una más de las bondades del sistema.

La crisis llegó en la década de los ochenta. En el plano interno, los países latinoamericanos intentaron mantener tasas de crecimiento económico elevadas sin cambiar los esquemas productivos, lo que exigía a su vez un incremento constante de las importaciones; asimismo mantuvieron políticas presupuestarias deficitarias, tipos de cambio sobrevaluados y niveles de vida que no se correspondían con la producción y menos aun con la productividad, todo esto se financiaba con dinero foráneo. En el plano externo, se introdujeron cambios en las condiciones de los préstamos, que al final llevarían a la crisis y a la sujeción de los deudores a las crecientes exigencias de los acreedores; los préstamos se hicieron directamente a los gobiernos o a los particulares a través del gobierno, pero de cualquier manera el Estado pasaba a ser el garante de la deuda; hubo un gradual desplazamiento de los organismos e instituciones financieras internacionales en favor de la banca privada; esta para disminuir los riesgos de sus operaciones decidió cambiar los términos de los préstamos al pasar de tasas fijas a tasas variables de interés, por lo que cualquier incremento posterior se aplicaría al total de la deuda y no sólo a los nuevos empréstitos. El vertiginoso ascenso de las tasas de interés a fines de la década pasada tuvo como origen la política antiinflacionaria y de defensa del dólar que puso en práctica la Reserva Federal de Estados Unidos desde julio de 1979, política que se reafirmó con la Administración Reagan. Al incremento sustancial del costo del dinero se unió una disminución importante en el precio de las principales materias primas que América Latina vende al extranjero (el petróleo, el café, el cobre, la carne vacuna, el azúcar, el cacao y la bauxita, entre otros, descendieron hasta más del 50% en algunos casos).

La situación no podía ser peor para toda América Latina, pues a pesar de sus diferencias, la deuda es un denominador común si se le compara con el potencial productivo de cada uno de los países de la región, con su población, con el ingreso per cápita o con sus exportaciones. El Secretario del Tesoro norteamericano declaraba, por su parte, en mayo de 1984 ante la OEDC que Estados Unidos no pondría ningún límite a las tasas de interés y que, por tanto, los países del Tercer Mundo no tendrían otra opción que la austeridad interna y las inversiones directas del capital

extranjero.

1980 había sido el último año en que América Latina recibió más dinero, 40 000 millones de dólares contra 38 000 que pago por intereses y utilidades. Tres años después, la tendencia era totalmente diferente, la región transfirió 35 000 millones y recibió solo 5 000. Para 1985, un solo país (Brasil) pagaba únicamente por concepto de intereses 15 000 millones de dólares.

En este contexto, la deuda absorbía cada vez un mayor porcentaje de los ingresos por exportaciones, lo que condujo a la contratación sistemática y necesaria de nuevos préstamos para poder pagar los servicios de la antigua deuda y continuar teniendo capacidad importadora.

Otra de las modalidades que se adoptaron fue el crédito stand by (préstamos condicionados) por parte del F.M.I. Su importancia no radica en la cuantía de dinero que pueda otorgar el Fondo, sino que solo de esa manera se tiene acceso a otros créditos por parte de la Banca Internacional, la que exige el compromiso (por medio de las llamadas Cartas de Intención) de poner en práctica un programa de ajuste supervisado estrictamente por el Fondo. Así pues, el crédito condicionado le da la oportunidad a los países acreedores -a través del F.M.I.- de diseñar los rubros fundamentales de la política económica de los deudores, los que terminan siendo gobernados por su deuda. Esta situación ha planteado para todos los países de la región una severa amenaza a su autodeterminación y a la posibilidad de que cada país pueda elegir los derroteros de su desarrollo.

Las presiones han sido enormes, en 1984 Argentina tuvo finalmente que acceder a las exigencias del Fondo antes que la banca internacional aplicara medidas severas en contra del país Austral: la austeridad y la disciplina de los mercados nacionales representan -en el fondo- el sometimiento a una norma general. Nada fuera de las exigencias del capitalismo mundial, valga decir, del bloque occidental.

Dejar de pagar representa pues, no una salida sino el caos, porque las economías latinoamericanas están integradas al mercado mundial, dependen de él y sus mercados internos se encuentran deprimidos y estancados. La amenaza nunca se hizo esperar, el Secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos adjuntó que si se producía una moratoria unilateral o un repudio de la deuda "nunca más habrá nuevos préstamos" (20). Un costo tan alto, que llevaría sin duda al aislamiento, al caos económico y finalmente al caos político, ha contenido a los gobiernos y a los pueblos sin expectativas de cambios. En ese sentido la seguridad nacional norteamericana en América Latina está salvaguardada: una decisión gubernamental radical de algún gobierno del área lo

(20) El Día, 9 de agosto de 1985, p. 10

acercaría a su pueblo, pero lo aislaría internacionalmente; una acción popular radical, levantaría a los militares.

No se olvide que en estos años América Latina dejaba de ser la prueba tecnocrática del militarismo de Estado, dando paso a la democracia en medio de la ruina económica. Democracia que debe afrontar la responsabilidad de la deuda, so pena de arriesgar males mayores.

IV. 2. ¿HACIA UN CAMBIO DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA?

En los últimos años de la década de los setenta parecía iniciarse una nueva etapa en la historia de América Latina: Ecuador, Bolivia y Panamá vuelven a tener gobiernos emanados de sufragios universales y libres; se incrementa la lucha popular en Argentina, Perú y Chile; comienza un proceso de apertura restringida en Brasil y Honduras; Guyana, Jamaica y Granada conocen gobiernos con programas favorables a las masas populares y, last but not least, las guerrillas en Guatemala y Nicaragua marcan un cambio radical en la lucha contra los regímenes autoritarios.

Este convulsivo proceso generó una nueva modalidad en la lucha política y social de la región, pues nunca como entonces la idea de la democracia fue tan importante en las reivindicaciones de los países latinoamericanos. Este cambio se debió, sin duda, a la experiencia autoritaria y represiva que habían vivido durante dos décadas. Sin embargo, habría que preguntarse que puede ofrecer la democracia a las amplias masas de la región frente a todo lo creado durante el período dictatorial. No debe olvidarse, por otra parte, que la transición democrática coincide con un cambio en la concepción norteamericana del enemigo hemisférico.

Pero también en Estados Unidos la idea de la democracia había sido retomada como eje explicativo y como fenómeno político sobre el cual habría que trabajar. Ya la Comisión Trilateral se había preguntado sobre los factores que inciden en la "gubernabilidad de las democracias" y sobre las condiciones requeridas por el capital para reproducirse, teniendo como marco regímenes democráticos. La conclusión, que tuvo como referencia la propia crisis del capitalismo mundial, fue simple: un exceso de democracia acarrea un deterioro en la gobernabilidad, en tanto que una gobernabilidad fácil conlleva una democracia deficiente. El acceso al poder de los neoconservadores actualizó la idea de la ingobernabilidad de la democracia, se planteó entonces que para evitar un desenlace irreversible era necesario reducir las demandas contra el Estado y evitar los excesos reivindicativos. Los neoconservadores llegaron al poder con el propósito de establecer un nuevo proyecto de dominio internacional mediante el cual las masas populares aceptarían que no solo su

desmovilización, sino también el abandono de prácticas reivindicativas eran factores indispensables para acceder a la democracia y mantenerse en ella. Es también parte esencial de la lógica neoconservadora que los pueblos no usen ni la fuerza ni la violencia para defender sus proyectos democráticos y, como esa misma lógica, restringe toda lucha popular violenta al conflicto Este-Oeste o a acciones de minorías terroristas, desconoce el derecho de los pueblos a forjar su propia idea de democracia e incluso la existencia de los mismos como actores políticos.

En este sentido, la lucha por la democracia como expresión del pueblo y como ejercicio soberano, debería haber remitido en América Latina a una confrontación en contra del proyecto neoconservador. Del mismo modo que la represión, desaparición y asesinato de personas, llevó a los pueblos a unirse en movimientos de resistencia contra las dictaduras. Sin embargo, habría también que preguntarse hasta donde el renovado movimiento popular ha amenazado al statu quo neoliberal y hasta donde podrá llegar.

La fuerte institucionalización del poder lograda por las fuerzas armadas permitió perfeccionar nuevos y más eficientes instrumentos de control. Por ello, para cualquier gobierno civil ha sido extremadamente difícil dismantelar todo el sistema de seguridad nacional basado en la doctrina de las dos décadas pasadas. En ese sentido, el principal referente interno es y continuará siendo la institución armada, como lo es a nivel externo la relación con los centros financieros internacionales. No hay pues sino democracias de seguridad nacional que cada vez reconocen menos a un enemigo interno. El proceso aun parece complejo.

La recesión mundial iniciada en la década pasada contribuyó a minar en mayor o menor grado a todos los regímenes militares. Por ello el proceso democrático actual puede explicarse, en parte, como producto de la crisis económica de la que América Latina no ha sido ajena. En última instancia, sin embargo, fue la circunstancia específica de cada formación social la que determinó la mutación democrática. Parecería, por otra parte, que había llegado el tiempo histórico para el retiro de los militares, gran parte de los objetivos se habían cumplido y ya comenzaba a ser contraproducente su presencia en el poder. El descontento popular se incrementaba irremediablemente.

Debe de considerarse que la fuerte movilización popular se ha orientado en la década actual hacia el rechazo de las fuerzas armadas y hacia la implantación de la democracia, pero se han dejado al margen los amplios planteamientos políticos y económicos de una mejor redistribución de la riqueza y de un desarrollo evolutivo de las sociedades.

Ecuador fue el primer país sudamericano en retornar a la democracia con la elección de Jaime Roldós a la presidencia en

1979 (a su muerte sería reemplazado por el Vicepresidente Hurtado). Por su parte en Bolivia la inestabilidad política que se manifestó con la dimisión del Gral. Banzer Suárez en 1978, fue parcialmente resuelta cuatro años después cuando asumió la presidencia Hernán Siles Lloza. En ambos países se logró mantener a las instituciones democráticas, empero dichos gobiernos fueron duramente castigados por la crisis económica, por lo que al final el electorado les dio la espalda. Los nuevos presidentes, Leon Febres Cordero en Ecuador (1984) y Víctor Paz Estenssoro en Bolivia (1985), en un intento de endurecimiento estatal han aplicado simultáneamente políticas monetaristas y de represión al movimiento obrero y popular.

En Perú, la crisis económica hizo perder confianza a los militares. El derrocamiento del Gral. Velasco Alvarado en 1975 fue el signo más visible de la falta de unidad en las fuerzas armadas. Durante el gobierno del Gral. Morales Bermúdez (1975-1980), el régimen militar peruano experimentó un proceso de derechización, contrario a cualquier reforma social. Las políticas de estabilización implantadas entonces desataron una ola de protestas que el gobierno militar no pudo controlar. Por su parte, el capital nacional perdió la confianza que tenía en el gobierno para detener la crisis y le retiró su apoyo. En esos años se agudizó la falta de unidad militar, por lo que cualquier intento por mantenerse en el poder, sobre todo después de la huelga general de 1977, conllevaba el peligro de dividir definitivamente a las fuerzas armadas e incluso provocar un conflicto armado nacional. Desde entonces prepararon su retiro, se redactó una nueva constitución mediante la cual mantendrían gran parte de su poder, una vez que los civiles asumieran el gobierno. Por otra parte, debe destacarse que uno de los factores primordiales para que los militares facilitaran la realización de comicios fue la debilidad y desorganización de la izquierda peruana.

El nuevo gobierno de Belaunde no logró superar la crisis y se vio envuelto en un creciente descontento social, político. Resurge la guerrilla con Sendero Luminoso y con ella la implantación de Estados de emergencia, se crean los "Frentes de Defensa de los intereses del pueblo" y se incrementan las exigencias sociales. En 1984 el pueblo vota por primera vez de manera mayoritaria por el APRA, que supo canalizar los sufridos de un electorado cansado de la guerra interna y del deterioro económico. Sin embargo, el Presidente García no pudo transformar su fuerza electoral en una autoridad política real (con todo y sus enérgicos planteamientos sobre la deuda externa que solo le han enajenado el apoyo financiero y comercial internacional), pues la delicada problemática de la seguridad nacional ha impuesto el predominio de una política dura, represiva y militarista como rasgo distintivo de las acciones del gobierno, compartido entre el APRA, los militares.

En efecto, conforme a las leyes vigentes las fuerzas armadas

tienen una presencia de primer orden en el gobierno. El Presidente debe consultar al Consejo de Defensa Nacional en cuestiones de seguridad, la gran mayoría de las direcciones administrativas de los ministerios están en poder de los militares, el 40% del presupuesto estatal se destina a las fuerzas armadas, las leyes militares son creadas y modificadas por los propios militares, y en las zonas de emergencia el representante castrense controla a la autoridad civil y está por encima de ella. La vuelta a la democracia no se alterado en lo fundamental el poder de las fuerzas militares.

Mención aparte merece el caso de Chile. La crisis del modelo friedmaniano en 1981, generó un lentísimo proceso de lucha en contra de la dictadura, cuya primera manifestación se dio hasta mayo de 1983 cuando Rodolfo Seguel --líder de la Confederación Nacional de Trabajadores-- convocó a la "primera protesta pacífica", hecho que marcó un cambio radical de la oposición frente a la Junta de Gobierno.

Fese a la enorme movilización social de 1983, la dictadura pudo conservar el poder --entre otras razones-- por la fuerte cohesión que existía entre las fuerzas armadas; porque la deficiente articulación de las fuerzas populares y la heterogeneidad de los grupos opositores no permitieron que se generara una acción común en contra del régimen; y, porque éste contó con el respaldo de Estados Unidos.

Las primeras jornadas de protesta tuvieron un carácter espontáneo, y fueron convocadas al margen de los partidos políticos; sin embargo, los límites de su eficiencia permitieron la rearticulación de las organizaciones tradicionales. Primero se creó la alianza Democrática (AD) con los partidos Demócrata Cristiano, Radical, Social Democrático, la llamada derecha republicana y sectores socialistas. Esta reagrupación de fuerzas fue producto del deseo de un sector importante de la burguesía chilena por controlar el proceso de vuelta a la democracia. La AD desconoce la legitimidad de la dictadura, pero rechaza el uso de la violencia para derrocarla, por lo que también excluye a los partidos de izquierda del derecho de hacer "política". Su objetivo ha sido reconstruir el sistema político anterior a 1973, pero sin la izquierda.

El rechazo de la AD a establecer alianzas con la izquierda (la izquierda "violenta"), indujo a esta a integrar el Movimiento Democrático Popular (MDP), formado por el Partido Comunista, el Partido Socialista Chileno (de Dióscoro Almeyda) y el Mib. Paralelamente se constituyó el Bloque Socialista, con el Partido Socialista Chileno (de Briones), el MAPU, el Grupo por la Convergencia Socialista y con la Izquierda Cristiana, más próximo a la AD.

Una respuesta inmediata a la imposibilidad de Chile para acceder nuevamente a la democracia, se encuentra en la propia

existencia del MDF y del intento de la AD por excluirlo. Sin embargo, después del gobierno de Salvador Allende no puede desconocerse a la izquierda como una fuerza política nacional -- esta es una de las grandes diferencias con los demás países de la región. Por ello en Chile la lucha por la democracia ha sido más radical, y la reacción también. El MDF no ha descartado la violencia como una forma de lucha porque "el problema del poder sólo se puede resolver a partir de una estrategia política militar de masas" y porque no desean enfrentarse "de nueva cuenta con una democracia restrictiva y limitada, como las del resto del Cono Sur de la que serán paulatinamente marginados los sectores populares" (21).

La Iglesia también ha jugado un papel de primer orden en el proceso de redemocratización, pues junto con la AD y el Bloque Socialista, ha impulsado el llamado "Acuerdo Nacional para la transición a la plena Democracia". Este proyecto ha sido el que menos resistencia ha tenido por parte de la dictadura, conforme a la idea de la "democracia protegida" que excluye el pluralismo absoluto a través del cual las democracias mueren (22).

Para Estados Unidos el retorno a la democracia también se ha vuelto indispensable. El Secretario de Estado Shultz ha dicho que "Chile debe volver también a la democracia, cosa que veríamos con agrado" (23). Para ello el gobierno norteamericano ha apoyado la realización del Acuerdo Nacional bajo el liderazgo de la Democracia Cristiana; al tiempo que ha entablado negociaciones con los militares para hacer posible un tránsito democrático pacífico y seguro, en el que sería relegada la izquierda. Postura que también ha dificultado la realización de tal objetivo. Almeida ha declarado que "los contactos del Pentágono con los militares chilenos tienden a provocar en Chile cierto avance hacia una democracia moderada, para que no les pase a los norteamericanos con Pinochet lo que les ocurrió con Somoza" (24).

En 1985 la posición de la dictadura ya no fue tan favorable. No sólo se incrementó la presión norteamericana para poner fin al régimen de Pinochet, sino que también amplios sectores de la derecha chilena lo exigieron con más fuerza: la izquierda a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez aceleró el uso de la violencia; el Movimiento Social Democrata logró un cierto acercamiento de la AD, el MDF y el Bloque Socialista con la intención de formar una Multipartidaria Nacional; comenzó a gestarse un proyecto de desobediencia civil a través de la asamblea nacional de la civilidad que se había realizado un año más tarde; y finalmente, las fuerzas armadas chilenas dieron muestras de un visible deterioro en su unidad: la Armada dejó de

(21) Pablo Buenaventura (CC del MIR), El Día (México), 29 de noviembre de 1982, p. 16.

(22) Ver declaraciones del Gral. Pinochet, El Día (México), 24 de julio de 1985, p. 15.

(23) El Día (México), 3 de marzo de 1985, p. 15.

(24) El Día (México), 21 de octubre de 1985, p. 10.

participar en operativos militares, a pesar de los esfuerzos del Almirante Merino por mostrarse incondicional al Gral. Pinochet, por su parte la Fuerza Aérea --con el Gral. Matthei al frente-- asumió desde entonces una actitud cada vez más crítica hacia la persona del dictador.

El tránsito hacia la democracia marcado formalmente por la Constitución de 1980, establece que en 1988 se llevaría a cabo un plebiscito mediante el cual los Comandantes en Jefe someterían a la consideración de los votantes el nombre de un candidato a la presidencia para el período 1989-1997, que sería sin duda el Gral. Pinochet. En caso de que este no resultase triunfador, las fuerzas armadas tendrían aun la facultad de proponer otro candidato en las elecciones, garantizándose así el tránsito de un régimen militar a un régimen autoritario, pues aunque en 1989 se pondría fin a la fusión de la Comandancia en Jefe del Ejército con la Presidencia de la República, las fuerzas castrenses mantendrán un amplio control en el aparato gubernamental.

IV. 2. 1. SEGURIDAD NACIONAL Y DEMOCRACIA EN LA CUENCA DEL CARIBE

La idea principal que subyace en las políticas que el gobierno neoconservador ha implementado en la década actual en la Cuenca del Caribe, es que la crisis del área puede y debe ser resuelta restaurando el orden y la autoridad. La ausencia de prácticas democráticas se debe --se ha argumentado-- al uso frecuente de la intimidación, la exclusión y el fraude, lo que ha generado una falta de consenso en torno a la legitimidad de los gobiernos. Esto ha generado un permanente cuestionamiento a la autoridad central, a través de la violencia. En ese marco, la oposición se ha puesto por definición fuera del sistema al que intenta destruir y, en contrapartida, los poseedores del poder se esfuerzan por mantenerlo, pues de lo contrario serían totalmente excluidos.

En ese sentido, la crisis centroamericana ha intentado ser resuelta por Estados Unidos y los grupos dominantes de la región, a través de supuestos políticos que los neoconservadores consideran centrales: la incorporación al sistema político de la mayor parte de la población, la afirmación de la legitimidad del gobierno, el consenso interno entre la élites políticas y, sobre todo, la afirmación de la autoridad determinada por su capacidad de someter a los grupos que la cuestionan (25). Así, la solución a la crisis de América Central no está en promover cambios en las condiciones sociales y económicas en los países del área, sino en establecer gobiernos "legítimos" que tengan --por ello-- la capacidad de establecer el orden necesario para el desarrollo.

(25) Cfr. José Miguel Insuiza, "La crisis en Centroamérica y el Caribe y la seguridad de Estados Unidos", en Varios autores, Centroamérica, Crisis y política internacional, p. 207.

Hecho esto, la seguridad nacional norteamericana estaría garantizada en la región.

Sin embargo, las consecuencias no han sido las esperadas, básicamente por tres razones: la seguridad norteamericana no es necesariamente la seguridad de todos y cada uno de los Estados de la región; las condiciones internas de estos han sido ignoradas como auténticos determinantes de la convulsión regional; y, la democracia madura en los pueblos que han superado el hambre como cotidianidad de la existencia y que se les permite vivir soberanamente.

La justificación de la Administración Reagan para su presencia en la Cuenca del Caribe fue que Estados Unidos enfrentaba un riesgo serio de seguridad muy próximo a sus fronteras. Empero, la prepotente intervención norteamericana no hizo sino convertir un pequeño conflicto en uno mayor. La Administración republicana que apostó en Centroamérica la solución de la crisis regional a través de una estrategia de baja intensidad, ha invertido una gran cantidad de recursos tanto militares como económicos, sin lograr solucionarla, por el contrario se ha hecho más compleja. La política norteamericana tendiente a garantizar su seguridad en Centroamérica, hizo del istmo una región más insegura. En el Caribe --con condiciones geopolíticas distintas-- la solución drástica e ilegal a la luz del Derecho a Gentes, fue eficiente para Estados Unidos: la Granada de Nueva Jordán dejó de existir.

La voluntad anticomunista de la Administración Reagan en Centroamérica, arguyendo la amenaza a la seguridad, llevó a la escalada progresiva del conflicto. Todos estos años de guerra en América Central y de retórica en Estados Unidos, solo han fomentado la equívoca idea de que el "cuidado" de la región por el vecino del norte es la única garantía para el establecimiento de la auténtica democracia y la preservación de la seguridad regional.

Como trasfondo de este mito se encuentra la preeminencia que Estados Unidos le otorga a las cuestiones estratégicas globales, lo que en realidad ha impedido la solución del conflicto y ha favorecido su ampliación. Por otro lado, "la URSS demostró claramente desde un principio que Centroamérica no tenía para ella una alta prioridad y que no estaba dispuesta ni a pagar los altos precios económicos de una nueva Cuba, ni a arriesgar otros objetivos estratégicos por una confrontación en Centroamérica" (26). Lo grave fue que la propia política norteamericana ubicó a la Unión Soviética en el centro del conflicto. Para Estados Unidos, este sólo era aplicable y tenía razón de ser si se contaba con la presencia del Kremlin.

La recomendación de la Comisión Bipartidista que identificó

(26) Idem., "Centroamérica: el mito de la seguridad", p. 40.

al fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región como un elemento esencial para los intereses norteamericanos, fue un factor clave para la orientación de la política norteamericana en los últimos años. La democracia debería ser construida --en consecuencia-- de tal forma que respondiera a los intereses que en el Informe Kissinger se explicitaron. Poco después se decía: "Las tendencias democráticas siguen desarrollándose en El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que la democracia sigue siendo la norma en Belice y en Costa Rica. Los sandinistas, sin embargo, continúan su política antidemocrática en Nicaragua". (27).

Pero de los intentos de cambio que se habían realizado en Jamaica, Dominica, Santa Lucía y Granada nada queda. Los gobiernos de estos países en la década de los ochenta se identificaron plenamente con las posiciones de la Casa Blanca. Los casos más claros son los de Eugenia Charles y Edward Seaga que promovieron las posiciones neoconservadoras en el interior de la Caribbean Community (CARICOM) y en el Banco de Desarrollo del Caribe. En los casos de los países del Caribe Oriental, de la República Dominicana, Haití y Belice que han recibido fuertes recursos como asistencia para la seguridad, se han asentado las medidas autoritarias de control político y se ha restringido --en la realidad-- el espacio de los derechos democráticos.

La Administración Carter favoreció el retorno a la normalidad institucional en Honduras y la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, así como un proceso electoral en que sólo participaron candidatos moderados, para suceder a Faz García. El retorno a la vida democrática en Honduras obedeció a la decisión del gobierno norteamericano para utilizar al territorio hondureño como un elemento clave en su política de contención y reversión de los movimientos populares en América Central. Para que esto resultase viable era necesario, por un lado, instalar un régimen civil que le diera legitimidad a la ocupación norteamericana y que pudiera servir de ejemplo democrático en la región y, por el otro, fortalecer a las fuerzas armadas locales.

El triunfo del Partido Liberal y el ascenso al poder de Suario Córdova en enero de 1982 ofrecieron la fachada civilista a un régimen que se militarizó cuyo poder lo ejerció el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Gral. Gustavo Álvarez Martínez, y el Embajador norteamericano. Honduras, que era un país sin conflictos armados en 1980 y que no requería de ayuda sustancial para su seguridad, se ha transformado en una encrucijada de ejércitos (salvadoreño, nicaraguense, norteamericano, hondureño y el de los "contras" que han hecho de su frontera sur un punto de guerra permanente.

(27) Secretaría de Estado de los Estados Unidos, op. cit., p. 7

En 1979 la propia Administracion Carter instó al régimen militar salvadoreño para que redujera el nivel de violencia, de conformidad con su línea reformista y de fortalecimiento del centro político. Sin embargo, el Presidente Romero se negó a hacerlo. En octubre de ese año fue derrocado por militares que habían prometido cumplir con los lineamientos marcados por el gobierno de Carter. El intento por lograr construir un gobierno moderado fracasó, por lo que se inició un proceso de derechización del gobierno y de radicalización de la lucha insurgente. Por su parte, la Administración Reagan se planteó el problema de El Salvador como un caso típico de Guerra Fría, en la cual un aliado suyo era atacado de manera indirecta por potencias comunistas. La posición norteamericana hizo poco viable una solución negociada y en cambio sugirió que las elecciones de marzo de 1982 serían la oportunidad para encontrar una solución política a la crisis. Los comicios --entre democristianos y la extrema derecha-- fueron finalmente una manera de cerrar las opciones de solución inmediata.

El gobierno civil de Napoleon Duarte ha vendido las ideas de que la situación militar se ha estabilizado, no existe amenaza real a la democracia y que su gobierno no ha asumido como política la violación de los derechos humanos. Lo que no se dice es que esto ha sido a través de la perpetuación de la guerra y del desarrollo profundo de métodos contrainsurgentes. Si el régimen aun conserva una fachada civilista es porque la extrema derecha y los militares entienden que de su existencia depende el flujo de la cuantiosa ayuda norteamericana, sin la cual el ejército probablemente hubiera sido derrotado por las guerrillas. Esto ha traído como consecuencia una profundización de la dependencia del gobierno y del ejército a la política norteamericana.

Para Guatemala el retorno a un gobierno civil, vía elecciones, se tornaba también necesario en el marco de la presión en contra del régimen sandinista. El triunfo de Vinicio Cerezo se efectuó mediante unos comicios en los que sólo participaron partidos aceptados por el régimen militar. La necesidad de la política de la Administración Reagan fue un factor de primer orden para que Guatemala retornara a la senda democrática.

Las fuerzas armadas guatemaltecas, por su parte, permitieron una mayor apertura política siempre y cuando los participantes no cuestionaran el dominio militar y que por el contrario, fomentaran la continuidad de un gobierno contrainsurgente, pero con dirigentes civiles.

Costa Rica es otro país --a pesar de su declaración formal de neutralidad-- que se ha visto arrastrado a una guerra que no provoca y de la cual no obtiene ningún provecho. Un país cuyas condiciones de seguridad casi intactas hasta 1980, se han visto mermadas con la presencia de la "contra" en su territorio, así como con la construcción de pistas aéreas y otras instalaciones bélicas financiadas con dinero norteamericano.

IV. 2. 2. ARGENTINA, URUGUAY Y BRASIL: LA DEMOCRACIA NEGOCIABLE.

En 1980 se produjo un reacomodo en la dictadura de Argentina, mediante el cual el Gral. Galtieri asumió el liderazgo de la Junta Militar y del gobierno de su país. Heredero de los desaciertos de cuatro años de gobierno de los generales Videla y Viola, el Gral. Galtieri intentó hacer frente a los conflictos económico y sociales y a la falta de legitimidad del gobierno militar. Para lo primero, profundizó las políticas económicas neoliberales implementadas por Martínez de Hoz, y para lo segundo recurrió al consustancial nacionalismo argentino: avivó la idea de una patria irredenta cuya integridad debía ser recuperada. El reclamo argentino por el archipiélago de las Malvinas sería con las armas, pero, las fuerzas armadas fracasarían justamente en el terreno para el cual habían sido creadas, adiestradas y mantenidas por el presupuesto de la nación. El desprestigio fue total, podían reprimir y aniquilar al pueblo que las sostenía, pero eran incapaces de enfrentar a una fuerza externa.

La sociedad argentina supo capitalizar el momento. El día de la rendición de las fuerzas armadas frente al poderío británico, el pueblo argentino se movilizó exigiendo la verdad sobre los motivos del conflicto; las Madres de la Plaza de Mayo exigieron asimismo el retorno de los desaparecidos, y las protestas sindicales para obtener mejores salarios se sumaron a los anteriores en una sola consigna: "por democracia ahora".

Los militares argentinos fueron los únicos que abandonaron el poder derrotados militarmente. La Guerra de las Malvinas reveló su corrupción e ineficiencia en lo económico, la administración del gobierno y sobre todo en la guerra. Fuese a que la derrota bélica debilitó a los militares, no hubo en contrapartida un fortalecimiento de la sociedad civil. Si bien es cierto que la movilización popular logró aislar y anular a una junta militar dividida, los civiles que asumieron el gobierno no lograron modificar las estructuras del Estado y las relaciones entre las fuerzas armadas y el nuevo gobierno civil.

Un inmenso proceso de negociación se desarrolló entre los militares y los representantes de los partidos políticos más importantes, desde el fin de la confrontación bélica y hasta las elecciones del 30 de octubre de 1982. Fuese a que ni la Unión Cívica Radical (UCR), ni el Partido Justicialista aceptaron expresamente las llamadas "concertaciones básicas" exigidas por los militares durante el proceso electoral, siempre las aceptaron. El peronismo que sería admitido en las elecciones fue aquel que logró pactar con los militares no solo su reconocimiento, sino aquel que ofreció su apoyo a las fuerzas armadas una vez que hubiesen regresado a los cuarteles. El peronismo de Hérmínio Iglesias y la candidatura de Italo Luder, no fue sino la respuesta del justicialismo más apartado de las reivindicaciones y de los métodos de lucha que habían hecho de su partido la primera fuerza electoral argentina.

Por su parte, la UCR adopto desde luego la posición mas seria y eficaz para terminar con los golpes de Estado y la represión. El respeto a las fuerzas armadas como institución de primer orden en la vida nacional y el reconocimiento de los logros alcanzados durante la dictadura: "Los militares han terminado con la subversión y el terrorismo en Argentina, pero han fallado en las metodologías" (28).

Si bien la derrota belica marco la inevitable necesidad de una reestructuración de las fuerzas armadas tanto en su marco ideológico como en sus funciones, estrategias y escenarios de conflicto, la DSN continuo vigente en gran medida dentro del pensamiento militar, hecho que le acarrearía al Presidente Alfonsín algunos conatos de rebelion castrense a pesar de la nueva legislación para la defensa, que explicitamente excluye a los militares de cualquier intervención en caso de un conflicto interno.

Un profundo miedo campea en la sociedad argentina, ese miedo fue provocado deliberadamente por la "guerra sucia", la que tuvo como finalidad la parálisis social. En la medida que ese miedo se mantenga será muy difícil que la población se movilice ya que la amenaza de un retorno de los militares continua vigente. (Esa es una de las razones por las que el peronismo (mas identificado a la S.G.t) no ha surgido como una alternativa real de poder y cuyo ejercicio gubernamental probablemente llevaría a la agudización del conflicto social y político, y con ello al golpe de Estado. El miedo es incompatible con la democracia y es que ni legal, ni estructuralmente se han establecido las condiciones para que las fuerzas armadas dejen de vigilar a la democracia argentina.

La manifestación del 27 de noviembre de 1983 -que reunió a 500 mil personas- ha sido no solo el acto político más grande en la historia de Uruguay, sino también el principio del fin del gobierno militar, que dos años atrás había abandonado su ropaje civilista con la sustitución de Aparicio Mendez por el Gral. Gregorio Alvarez.

La exigencia de todos los partidos políticos de volver a la democracia y al Estado de Derecho y el repudio a todas las expresiones de fuerza ese 27 de noviembre, tuvo dos resultados inmediatos. Por un lado, la dictadura entendio que se encontraba prácticamente sola frente a un pueblo que exigía el retorno de los militares a los cuarteles; y por el otro, la creación de la Multipartidaria, como organismo de acción común y de cuyo seno surgió la negociación con las fuerzas armadas sobre la transición a la democracia.

En la década de los ochenta, Uruguay arribo a una crisis

(28) Declaración de Raúl Alfonsín. El Universal (México), 24 de marzo de 1984, p. 10.

institucional y económica jamás conocida en ese país. En el plano económico, los salarios disminuyeron un 50% su valor real, el desempleo y la desocupación alcanzaron una tasa del 25%, en tanto que la inflación llegaba a niveles nunca antes vistos y la deuda externa acumulada alcanzaba los 5 000 millones de dólares: la producción agrícola se estancó y se registró un retroceso en las exportaciones. La violación sistemática de los derechos humanos, aunada a las presiones económicas produjo en el caso de uruguayos sobre todo en edades de plena producción fuera técnica o intelectual. Finalmente, salvo los sectores de las finanzas, la gran mayoría de los uruguayos terminaron opuestos al gobierno militar, tanto los obreros y jornaleros, como los agricultores, ganaderos, industriales y comerciantes.

La Multipartidaria continuó con su acción antidictatorial y el 27 de junio de 1984, convocó a un Faro Cívico Nacional que paralizó al país entero. Los ocho puntos programáticos de la protesta fueron: 1) plena vigencia de libertades políticas y sindicales; 2) elecciones libres sin exclusiones; 3) amnistía general; 4) fuentes de trabajo, salarios, jubilaciones y pensiones dignas; 5) derogación de actas, leyes y decretos antipopulares; 6) Cese de la intervención del gobierno en la enseñanza; 7) derogación de las leyes limitativas del cooperativismo y 8) por una política económica al servicio del país.

En vísperas de otra huelga general que se preveía tendría el mismo éxito de la anteriores y que pondría a descubierto la impotencia creciente del gobierno militar, se anunció la realización de un pacto de transición hacia la democracia.

Conforme a los intereses de los sectores más fuertes del país, el acuerdo debería darse entre los militares y los dos grandes partidos (el Colorado y el Nacional), en detrimento del proscrito Frente Amplio. La intransigencia del Partido Blanco para la realización de comicios sin exclusiones, su negativa a todo acuerdo con las fuerzas armadas y la exigencia de que su líder en el exilio -Wilson Ferreira Aldunate- fuera candidato a la presidencia, produjo un bloqueo a las intenciones de la dictadura para una transición sin problemas. Al mismo tiempo, la postura del Partido Nacional creó un clima de creciente fricción entre los dos partidos mayoritarios. El Partido Colorado ante el temor de que la política de los blancos produjera una apertura descontrolada y de que la candidatura de Ferreira Aldunate se tornara viable y triunfara, reinició una actitud colaboracionista con los militares, con el fin de forzar una salida negociada. A partir de entonces presionaron, junto con la Unión Cívica, para que el Frente Amplio fuera aceptado en el diálogo político pero con el condicionante de que fuera proscrita la candidatura de su líder, el Gral. Liber Seregni. El que, por otra parte, en cuanto fue liberado abandonó su anterior beligerancia y asumió una actitud de concordia con la forma en que se estaba efectuando la transición.

Por otro lado, Ferreira Alcunate anuncia su retorno a Uruguay en junio de 1984 pese a la orden de arresto que sobre él había. La dictadura despliega una campaña de terror en contra de sus partidarios y le advierte a la población que debería "mantenerse alejada de los lugares de concentraciones o manifestaciones, ya que quienes las organizan, concurren o participan, se hallarían expuestos a los riesgos consiguientes", porque para los militares, en las concentraciones "se infiltrarían grupos radicalizados de agitadores e incluso profesionales ingresados clandestinamente en territorio nacional" (29). Ferreira Alcunate fue arrestado al llegar a Uruguay, con la complacencia del Partido Colorado que vio definitivamente debilitado a su rival: la izquierda votaría por el Frente Amplio una vez admitido en las elecciones y el Partido Nacional no contaría con su líder como candidato presidencial.

De esta manera, en agosto del mismo año, se realizó la negociación sobre la transferencia del gobierno a los civiles. El Partido Colorado, la Católica Unión Cívica y el Frente Amplio junto con los militares efectuaron las negociaciones, a las que se negó a asistir el Partido Nacional mientras estuviese preso Wilson Ferreira. En el llamado pacto del Club Naval se estableció que las elecciones se realizarían el 25 de noviembre y la transferencia de poder el 10 de marzo de 1985. Los mandos militares se negaron a levantar la inhabilitación que impusieron a Seregni y a Ferreira para ser candidatos, así como al Partido Comunista para concurrir a los comicios. De esa manera las fuerzas armadas fijaron los límites de la transición.

Todo estuvo rigurosamente controlado, los militares impusieron las reglas del cambio y aseguraron un nada traumático tránsito hacia una democracia tutelada. Las condiciones de los militares en el pacto fueron las siguientes: conservar el Consejo de Seguridad Nacional como órgano asesor del gobierno; las fuerzas castrenses conservarían el derecho de nombrar a sus altos mandos y la posibilidad de procesar a civiles por la justicia militar; mantener la facultad de actuar en caso de insurrección; sería levantado el estado de excepción, pero se establecería una nueva figura jurídica constitucional, el llamado "Estado de insurrección", que facilitaría la inmediata suspensión de las garantías básicas y la utilización de la justicia militar. Asimismo impusieron otras dos condiciones: no habría revisión de los excesos de la dictadura en materia de derechos humanos y tampoco una amnistía general e irrestricta.

De esa manera, las fuerzas armadas salvaron su impunidad como institución y mantuvieron intacto el sistema de poder represivo. Abandonaron el gobierno, pero mantuvieron las riendas del poder, dispuestas a intervenir cuando lo juzgaran prudente. Poco antes del cambio de gobierno el Comandante en Jefe del Ejército advirtió que así se dan las mismas causas que se

(29) El Día (México), 15 de junio de 1984, p. 13.

dieron en 1973, no vamos a tener más remedio que dar otro golpe de Estado" (30).

Es claro que Uruguay optó por consolidar una normalidad democrática restringida, antes que proponerse objetivos más radicales. No se buscó, ni como punto de partida ni como objetivo, cambiar las estructuras del Estado en lo que estas tienen de dominio de clase o de coalición de poder.

En efecto, el continuismo económico triunfó en Uruguay. Para la fracción de la burguesía que domina la conducción del Estado el triunfo del Partido Colorado, colaboracionista y oposición fiel, era lo deseado. Julio María Sanguinetti, triunfador en las elecciones por el Colorado, fue ministro de los gobiernos dictatoriales de Pacheco Areco y Bordaberry, y con ayuda de los 70 mil votos de las fuerzas armadas pudo erigirse presidente de Uruguay.

La sociedad civil uruguaya salió más fortalecida de la transición democrática, por lo que y pese al esfuerzo del gobierno colorado por hacer efectiva la Ley de Impunidad, sería capaz de trastocar dicho proyecto.

La apertura política en Brasil se llevó a cabo dentro de una estrategia de poder militar cuyo propósito era "llegar a la democracia plena, en forma segura y gradual" (31). No cabe duda, por otra parte, que la cuestión de la democracia estuvo vinculada tanto a la problemática económica como política.

La apertura democrática se inició en 1974 con el ascenso al poder del Gral. Geisel, quien intentó establecer un régimen de democracia controlada, imponiendo su propio candidato por sobre alguno más duro, al tiempo que pretendía anular la posibilidad de que el Movimiento Democrático Brasileño llegase a tener un candidato elegible. Así se llegó a la designación del Gral. Figueiredo como presidente de Brasil en 1978, lo que representó el triunfo de los "blandos" que utilizaron como argumento de su política aperturista no una fuerte presión de los sectores populares, sino precisamente su relativa debilidad. A partir de entonces se amplió la apertura política, se realizó una gradual administración política, e incluso se aceptó que la oposición luchara por posiciones de poder -un poder regulador-, como en las elecciones para gobernadores.

Sin embargo, la dictadura perdió el control sobre la apertura. La crisis económica desatada en 1982 hizo tambalear al

(30) Declaraciones del Gral. Hugo Medina. El Día (México, 13 de febrero de 1985, p. 14.

(31) Declaraciones del Gral. Joao Figueiredo. El Día (México), 8 de diciembre de 1983, p. 14.

proyecto aperturista; la agitación de las masas populares y sindicales se incrementó, los partidos de la oposición lograron rotundos éxitos (el Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB- En 1984 ya contaba con nueve gobernadores y Leonel Brizola gobernaba en el importantísimo estado de Rio); la dictadura perdió la unidad que la sostenía y en contrapartida el movimiento por las elecciones directas aglutinó a toda la oposición, por lo que la balanza política se inclinó a favor de esta.

La apertura política fue siempre a la par con la situación económica del país. Al principio de los años setenta la dictadura lograba conservar cierto apoyo de las clases media y de la burguesía gracias al elevado ritmo de crecimiento económico. Con la disminución de este, a partir de 1974, se hizo más evidente el carácter concentracionista y excluyente de la política económica de la dictadura. Las formas de manifestación de la sociedad civil se desarrollaron de manera notable en esa década. En 1978, el movimiento por la amnistía política ocupaba un lugar preponderante en las exigencias populares. Finalmente, la tensión que generó la renegociación de la deuda en 1980 acabó con lo que quedaba -para algunos- del milagro brasileño; a partir de ese momento, las medidas de austeridad se dejaron sentir por completo en la industria, la clase media y los pobres. Habían ya desaparecido las esperanzas de una rápida modernización económica y movilidad social para millones. El desempleo aceleró su ritmo de crecimiento y se incrementaron también los saqueos de supermercados y asaltos bancarios; la producción cayó notablemente, en tanto que la capacidad utilizada de la industria disminuía con el consiguiente descontento de la burguesía industrial.

La dictadura, sin capacidad para hacer frente a la situación, se vio obligada a ampliar la apertura hasta un nivel considerado aun como tolerable. El Genl. Golbery de Couto reconocía la gravedad de la situación para el régimen militar: "extrañamente paradójico parece, sin duda, querer llevar adelante una liberación democratizante en el terreno político cuando son tan negativas las condiciones vigentes en el área económica... En realidad no nos queda otra opción" (32).

El MDB, único partido opositor tolerado por la dictadura, fue ampliando sus bases durante el deterioro económico del país, sobre todo con un vigoroso movimiento sindical. Para romper con la homogeneización de la oposición, el gobierno de Figueiredo promovió una reforma política que si bien incorporaba algunas concesiones democráticas, su principal objetivo era romper con el sistema bipartidista para debilitar a la oposición, y así sucedió. El MDB se escindió en seis diferentes agrupaciones; sin embargo, los dos partidos más fuertes (el PMDB, el Partido Popular) lograron unirse para hacer frente a la dictadura en las

(32) Citado por Danilo Freiltes, "La compleja situación brasileña". El Día (México), 31 de agosto de 1984.

elecciones de noviembre de 1982, en la que obtuvieron la mayoría en la Cámara Federal de Diputados y lograron elegir gobernadores en estados importantes como Minas Gerais, Sao Paulo y Rio de Janeiro.

La dictadura intentó reglamentar la conformación y actividad de los partidos políticos de oposición, permitirles actuar dentro de ciertas normas (bajo la amenaza de la proscripción si se transgredían), con el fin de mantenerlos en una posición formal de oposición pero sin posibilidad de obtener el poder. Para ello se iniciaron las negociaciones en abril de 1984 entre el diputado Ulysses Guimarães, presidente del PMDB, y el senador José Sarney, presidente del oficialista partido Democrático Social (PDS). Para el régimen militar era necesario no traspasar los límites de las elecciones de 1982, por lo que sustraer al sufragio popular las elecciones presidenciales representaba el único camino para imponer en el Fianalto a Paulo Salim Maluf, candidato civil de la dictadura. La candidatura del impopular Maluf fue, sin embargo, el error que aceleró todo el proceso de democratización que exigía el pueblo brasileño.

Los planes continuistas se trastocaron cuando el Vicepresidente Aurelio Chaves, descontento por no haber sido nombrado candidato por el PDS, rompió con éste y se lanzó a la conformación -en junio- de un Frente Liberal (FL) integrado por antiguos oficialistas, entre ellos José Sarney. La escisión del oficialismo posibilitó la unión del PMDS y del FL que constituyeron la Alianza Democrática cuyos candidatos fueron Tancredo Neves para presidente y Sarney para vicepresidente.

La campaña electoral se convirtió entonces en una lucha pro forma entre dos aspirantes a presidente que no crecían sino el continuismo. Fortavoces de banqueros o industriales, con el apoyo de la burguesía nacional o con el de las fuerzas transnacionales, Neves y Maluf eran hombres del sistema creado en 1964. Exgobernador de Minas, el moderado Neves supo negociar concesiones y compromisos con la dictadura, con el propósito de garantizarle una retirada segura en la que se mantuviera el statu quo, con tintes de civilismo. Sin duda Neves era el hombre clave para volver a la democracia, sin afectar las relaciones de dominio existentes, representaba junto con Sarney la garantía de que habría continuismo sin oficialismo.

El Colegio Electoral voto, el 15 de enero de 1985, a favor de la fórmula de la Alianza Democrática, que fue tolerada por las fuerzas armadas y el gran capital a quienes garantizaba respectivamente, impunidad y paz social. La muerte de Neves, antes de asumir la presidencia, le dio el poder a quien había sido el máximo dirigente del partido de los militares.

La sociedad brasileña retornó a la democracia con una estela de temor. "Brasil es un país dominado por el banco porque hay

gente que no duerme por estar con hambre o por estar con miedo" (33), y los militares se encargaron de fomentar el temor en la sociedad si la democracia se desbordaba de los cauces tolerados. El Comandante de la Escuela Superior de Guerra lanzó la advertencia en el sentido de estar abierta "la posibilidad de que las Fuerzas Armadas derroquen al gobierno con un golpe de Estado" (34).

De hecho la dictadura logró cercenar los poderes del presidente que la sucedería al otorgar atribuciones a los Comandantes en Jefe del Ejército, la Marina y la Aeronáutica que hasta febrero de 1985 eran de exclusiva competencia del Presidente, como la designación de oficiales de rango superior. Esta tendencia intentaría ser revertida con la abrogación de la ley de seguridad nacional, que sería sustituida por la Ley de Defensa de Estado Democrático y con la desintegración del Consejo de Seguridad Nacional, que sería reemplazado por el Consejo de la República y por el Consejo de Defensa Nacional.

Sin embargo, el proceso de redacción de la nueva Constitución democrática que el Congreso Constituyente en algunos asuntos esenciales como el de la seguridad nacional, no reflejaba la opinión de la mayoría de la población, sino la relación de fuerzas existentes en la coalición gubernamental, por ello la democracia brasileña no ha tenido la fortaleza para transformar cualitativamente al Estado de seguridad nacional creado por los militares.

(33) Declaración de Olysses Guimarães. El Día (México), 26 de marzo de 1984, p. 15.

(34) Declaración del Gral. Euclides de Oliveira Figueiredo. El Día (México) 10 de octubre de 1985, p. 18.

CONCLUSIONES

La política es -en última instancia- el lugar donde las crisis se expresan, se desarrollan y llegan a resolverse. Sobre todo aquellas que representan una ruptura histórica, donde lo que se cuestiona es el Estado mismo, como voluntad social, como entidad con la que se regula y se dirige la sociedad. Se expresan y resuelven en el espacio político porque es ahí donde las fuerzas de la sociedad dirimen finalmente sus controversias, donde la dirección-dominio de una clase aparece como un núcleo de contradicciones que se solucionan en favor de una u otra clase.

Pero la política de nuestro tiempo histórico, sobre todo la política internacional que marca la pauta a muchas políticas nacionales, ha estado dominada por la idea de inseguridad. Su característica ha sido la vuelta a la preocupación hobbesiana y su concomitante corolario: el sacrificio de la libertad en nombre de la seguridad individual y colectiva. Pero quienes han fomentado la idea de una inseguridad generalizada y creciente del individuo dentro de cada formación social y de los Estados frente a otros, lo han hecho con base en un interés político, mediante el cual la guerra se convierte en un factor omnipresente y la inseguridad se trastoca en realidad.

Cuando la política y la guerra unidas son empleadas para dirigir las relaciones sociales, una y otra ganan en eficacia al racionalizarse el empleo de la violencia conforme a los objetivos políticos y ello porque --como apuntaba Clausewitz-- la guerra no es otra cosa que la continuación de las relaciones políticas a través de la violencia. En este contexto, el único Estado posible era un Estado fuerte, tecnocrático, estético, con capacidad de decisión en todos los niveles de la vida nacional, que reemplazara al debate político por una concertación entre la dirigencia estatal y aquellos que ejercían el dominio en la formación social, únicos ajenos a cualquier idea que pudiera menoscabar el proyecto. El sujeto político que lo implementaría y la ideología que lo justificaría se fueron formando -en el caso de América Latina- en el seno de las fuerzas armadas, como efecto de la estrategia político-militar de Estados Unidos y del peculiar momento histórico regional.

En la mayoría de los países latinoamericanos se trataba del derrumbe del Estado de compromiso que había crevaldeado en el área bajo el influjo de las políticas de ampliación del mercado interno con las que se pretendía crear espacios institucionales para dirimir los conflictos sociales y políticos. La crisis de hegemonía que vivía América Latina, por la ausencia de una fracción burguesa que lograra conciliar los conflictos interburgueses del bloque en el poder, generó una crisis política del conjunto de las formaciones. De esta manera, el proceso de politización de las fuerzas armadas era solo un aspecto de un fenómeno mucho más complejo: el tránsito de América Latina a la

fase de consolidación del capitalismo monopolista. Sin embargo, el movimiento popular fue un actor político que -protegido por el Estado benefactor- trató de impedir el establecimiento del nuevo patrón de acumulación y obstaculizó la conformación hegemónica de las formaciones sociales bajo la dirección de una fracción burguesa altamente tecnocrática y ligada a los intereses transnacionales.

Ambas situaciones marcaron el imperativo de la instauración de un Estado con capacidad para formar un nuevo bloque dominante, por una parte, y de reprimir las manifestaciones populares. El fenómeno de la militarización de las formaciones sociales de América Latina debe entonces remitirse al problema de la hegemonía, a la incapacidad del bloque dominante para convertirse en bloque histórico. El Estado, ha dicho Gramsci, es hegemonía más coerción, por lo que cuando la primera es débil, esta ocupa su lugar.

En consecuencia, uno de los factores desencadenantes de la militarización fue la dificultad e imposibilidad de la tardía pretensión monopolista de algunos sectores latinoamericanos para lograr su desarrollo y encuadre dentro de las exigencias económicas, técnicas y políticas del capitalismo mundial. Las condiciones políticas para fortalecer las bases de la acumulación y reproducción ampliada, provocaron los reajustes de los intereses económicos, los que llegaron a expresarse como tensiones y pugnas en el Estado, como el lugar donde habrían de resolverse y no en el mercado, en donde se originaron. La competencia interburguesa se convirtió pues en crisis institucional. Crisis que no pudo ser encauzada por los canales tradicionales de contienda partidista. Lo que se requería entonces era estabilizar y lograr el orden interno, de lo contrario resultaba imposible la implantación del nuevo patrón de acumulación.

Se abrió el camino para un modelo político autoritario que favoreciera un modelo económico de desarrollo neoliberal basado en una política abierta al capital extranjero, en el estímulo a la fracción burguesa exportadora y en una liberación de las fuerzas del mercado.

En el plano internacional es la Guerra Fría y el enfrentamiento entre las potencias dominantes lo que incuba la militarización de las formaciones sociales de América Latina en apariencia, pues en un último análisis es un intento más del Norte por continuar su dominio sobre el Sur, valga decir del capitalismo desarrollado, sobre el capitalismo periférico. Pero este último pierde importancia para los ideólogos de la seguridad nacional, quienes reducen la enorme complejidad y la diferente sustancia de los problemas a un eje central, el enfrentamiento Este-Oeste, caracterizado como un conflicto total, que se libra en contra del comunismo internacional.

La militarización de la política exterior norteamericana supuso la selección de una estrategia que evitara la confrontación directa entre las grandes potencias y que desviara parte del costo de la defensa de Occidente hacia los presupuestos de los países localizados en sus zonas de influencia. Esa estrategia se basó en la idea de la "defensa interna" y supuso, por ello, el adoctrinamiento político de los oficiales latinoamericanos en los valores y exigencias de la seguridad nacional de Estados Unidos.

El gobierno se militariza, a través de él se intenta militarizar a la sociedad, toda acción gubernamental y de la sociedad se debe encaminar a la preservación de la seguridad nacional. Nada existe fuera de esta exigencia. El Estado se convierte entonces en la encarnación del "espíritu nacional" y el gobierno, el eje que le da unidad y le asegura su supervivencia. Por su parte el pueblo, como realidad de los hombres frente al Estado y como contrapeso a los excesos de éste, carece de importancia en el marco de la seguridad nacional.

Esta forma de concebir al Estado, de situarlo por encima de las clases sociales y de identificarlo con un cierto orden natural que da forma a la unidad nacional, genera una actitud y un sentimiento contrarrevolucionarios que intentan ser trasladados a toda la sociedad.

En consecuencia, el proyecto nacional solo puede ser formulado a partir del Estado, pero no puede ser formulado por éste en cuanto unidad de decisión y de acción, sino por aquellos que integran el bloque del poder en el Estado, únicos "capaces" de interpretar y de cristalizar los intereses y las aspiraciones de la nación y con ellos su destino.

La seguridad nacional, como una de esas aspiraciones, pone en juego todos los factores políticos, económicos y sociales tanto en tiempos de paz como de guerra, lo que conlleva el diseño de una estrategia total: estrategia económica, para fomentar el desarrollo que dirime los antagonismos internos; estrategia psico-social, para utilizar las ideas y los valores culturales que eliminen los peligros de la nación; estrategia política, para organizar una movilización nacional en contra del comunismo y, estrategia militar, para preparar una ofensiva en contra de cualquier enemigo que ponga en peligro las metas de seguridad nacional.

La supervivencia de la nación se convierte en la tarea principal del Estado, el que intenta garantizar su seguridad frente a todo antagonismo interno o externo, en el marco -por supuesto- del enfrentamiento global.

La militarización de las formaciones sociales latinoamericanas impuso una extensión, permanente y violenta política represiva, orientada a liquidar cualquier amenaza a lo

que se consideró como "interés nacional". Esta actitud en lugar de aniquilar el conflicto social, lo anuló temporalmente para luego radicalizarlo. Pero ese compás de espera ha hecho pensar que mientras el Estado sea capaz de imponer la paz social -sin importar los medios- su gobierno es legítimo, finalmente lo que menos importó fue el consenso.

La libertad y la democracia (como valores de Occidente) han sido puestos en el centro del discurso político, pero se ha hablado más de la lucha por su consecución que de su ejercicio. La lucha por la libertad y la democracia requiere que se prescindiera de ellas. El valor supremo de la seguridad nacional ha suprimido todo tipo de libertades en nombre de la libertad occidental, democrática y cristiana. La sociedad entera es entonces sometida a la lógica implacable de la estrategia militar.

Prácticamente y formalmente hablando una nueva concepción de la geopolítica es el punto de partida de la militarización de las formaciones sociales de América Latina. Se parte del supuesto de que el mundo y los hombres se definen por la categoría amigo-enemigo, ya que en la guerra lo que cuenta son los aliados o los adversarios. La más amplia de las tesis geopolíticas actuales es que el mundo está dividido en dos bloques antagónicos y como el poder del Estado se encuentra en función de su seguridad, la posición del Estado en el mundo antagónico define la problemática de su seguridad. En nuestro caso -por razones geopolíticas- América Latina se encuentra integrada inevitablemente al bloque occidental. De esa forma la geopolítica le ha dado una base a la DSN.

Para la geopolítica, el Estado no es una creación del Derecho, por el contrario, es un organismo vivo sometido a determinadas leyes y sujeto a influencias nocivas naturales. El Estado es concebido entonces como un superviviente, que debe defenderse para sobrevivir; pero también debe crecer, expandirse a costa de quienes se le oponen, por lo que la guerra es una situación constante. En América Latina esta ley del Estado se tradujo sobre todo en la conquista de los espacios vacíos.

De la geopolítica parte la idea de que la persona individual no existe y de que la categoría pueblo es un mito. Lo que existen son comunidades de hombres. Pero éstas en cuanto naciones sólo pueden ser viables como Estados, ya que sin el Estado la nación ni es ni puede realizar absolutamente nada. El Estado es poder, con dinámicas y tendencias propias.

Conforme al pensamiento geopolítico, el Estado no debe

existir conflictos propios. Los antagonismos de cualquier tipo - como los derivados de la lucha de clases- se conciben como simples manifestaciones patológicas que deben ser extirpados.

La política general del Estado -supervivencia y desarrollo- presupone la existencia de una élite dirigente que tenga la capacidad de gobernar eficazmente. Las fuerzas armadas -de las que se supone dominan la geopolítica, por lo que son las llamadas a gobernar al Estado, pues sólo ellas pueden encarnar los valores permanentes de la nación.

Con la nueva concepción de la geopolítica ya no se trata de defender militarmente al Estado contra otros Estados o de expandir el Estado a costa de otros (lucha externa), sino de militarizar a la sociedad a través de acciones que tienen como medios y objetivos no al territorio, sino a las masas, a los integrantes humanos de la nación (lucha interna). El fin último es salvaguardar la permanencia de la nación dentro de un campo ideológico determinado. Pero lo que realmente se hace es profundizar unas ciertas relaciones de dominio hemisférico, aunque también dentro de cada formación social. De esa forma, la geopolítica se convierte en un instrumento mediante el cual el bloque dominante intenta incrementar los beneficios que obtiene de la formación económico-social concreta que controla, lo que le permite perpetuar sus posiciones de dominio -a través de la coerción- e impide que otras fracciones o clases sociales se transformen en bloque dominante.

En la renovada concepción de seguridad nacional se exige, como base de toda política de defensa, que se garantice el orden público y la estabilidad política internos, por ello el objetivo fundamental de las fuerzas armadas es imponer el orden, único medio para alcanzar los objetivos nacionales. Su tarea más importante y permanente se traduce entonces en aplastar la subversión, porque ella pretende destruir la unidad de la nación.

La existencia de los grupos insurgentes y la necesidad de una guerra permanente en su contra sirve para otro importante propósito en el marco de la seguridad nacional: la posibilidad de mantener a la nación en un estado de emergencia permanente. El bloque dominante -pero que no ha podido construir hegemonía- percibe como condición de su existencia la perpetuación de la lucha y, por tanto, de la subversión. Siempre debe haber un enemigo real o imaginario, con tal de que pueda ser presentado como una amenaza para la sobrevivencia de la nación, y obligue al Estado a superar sus disidencias internas.

El Estado, entonces, se convierte en el sujeto encargado de la lucha contrainsurgente. Acción que presenta dos vertientes: una lucha militar y una confrontación ideológica. El Estado se

presenta ante la sociedad como el protagonista que tiene el poder y la razón.

Así la insurgencia y su opuesto, la contrainsurgencia, no son sino una forma en que se manifiesta la lucha de clases. La contrainsurgencia presupone una lucha que tiende a impedir cualquier manifestación de grupos antagonicos al bloque dominante y que en consecuencia pretende modificar las relaciones de poder y las relaciones sociales en las que este basa su dominio.

El objetivo es crear en la sociedad una conciencia contrainsurgente. Mediante la cual toda la nación -como unidad- se vuelque a la lucha en contra de sus males internos: los grupos que se oponen al status quo. De esa forma toda acción del Estado, de la sociedad y por ello de la nación, debe estar orientada a una guerra total en contra de la insurgencia.

Como el objetivo político condiciona la estrategia militar, un objetivo que involucra la supervivencia del Estado debe llevar -conforme lo presuponen los sostenedores de la DSN- a una estrategia militar global, a una guerra total.

El concepto de guerra total y permanente fue adaptado por la geopolítica a las necesidades de la DSN. Esta adaptación comenzó con la incorporación de las ideas de "seguridad hemisférica" y "seguridad interna" a las exigencias geopolíticas, definiendo con ello una situación en la cual se entiende que la seguridad de cada una de las formaciones latinoamericanas se encuentra indisolublemente ligada a la de Estados Unidos.

La renovada concepción de seguridad nacional que surgió como respuesta a la evolución de las relaciones internacionales y las características de la guerra total, compromete en su solución a todos los habitantes de una nación, sin diferencia alguna y, por tanto, exige también la creación de una conciencia de seguridad nacional en todo el espectro social. De esta forma la guerra moderna se diferencia de la guerra de otros tiempos en que no es una guerra parcial sino total porque a parte de movilizar a todos los ciudadanos de cada formación social, compromete a todos los Estados; involucra a todas las actividades humanas porque el "enemigo" se encuentra infiltrado en todas partes; compromete a todos los recursos materiales; y, la guerra se hace permanente. En la guerra total se encuentra involucrado el proyecto nacional, la seguridad nacional y el poder nacional.

En consecuencia, con la guerra total desaparece la diferencia entre civiles y militares (todos deben enfrentarla), así como entre presupuesto civil y militar (se deben emplear todos los recursos para triunfar). La guerra total es la expresión máxima de la militarización de la sociedad: incluye todos los aspectos de la existencia y de la persona humana.

Desaparece la diferencia entre tiempo de guerra y tiempo de paz. Nada escapa a la guerra.

Es total porque es una guerra económica, política, psicosocial, científica y militar, en contra del "enemigo interno". Así pues, la defensa de la nación no depende exclusivamente del presupuesto militar, de la cantidad de tropas y armas, sino de su potencia económica, de sus valores e ideología y de la capacidad del bloque dominante para involucrar a toda la sociedad y fortalecer las instancias de poder sobre las que basa su dominio.

La sociedad, en consecuencia, debe estar preparada para enfrentar una guerra ilimitada, permanente, preventiva y represiva, en la cual no existe lugar para la conciliación y el diálogo. Los aparatos del Estado inducen a la sociedad entera a aceptar los sacrificios inherentes a tal tipo de guerra. La población debe aceptar la supresión de sus libertades y derechos individuales, debe estar dispuesta a subordinar sus expectativas y demandas a las necesidades de la guerra interna presentada en los aparatos de Estado como una lucha encaminada a salvaguardar a la nación.

La llegada al poder permite que los regímenes de seguridad nacional emprendan dos acciones como subyacentes al proyecto nacional: la guerra contrainsurgente y la promoción del desarrollo económico. Pero -conforme a estas premisas- para conseguir orden, estabilidad y desarrollo, debe eliminarse toda división de intereses y de opiniones y suprimirse toda ideología y estructura pluralista, porque ellas suponen la continuación del conflicto y, por ello, del desorden y la inestabilidad político-económica.

Si la implantación de los Estados de compromiso se correspondió con un proyecto nacionalista de sustitución de importaciones y con un intento hegemónico de la burguesía industrial nacional; la militarización de las sociedades de América Latina responde a la necesidad de excitar política y económicamente a las grandes masas y a sectores de la burguesía y la pequeña burguesía, en favor de un nuevo proyecto de dominación -pero que no acierta a ser hegemónico- del gran capital nacional e internacional. El nuevo proyecto económico internacionaliza a la burguesía nacional internacionalizada (burguesía exportadora, pero dependiente financiera y tecnológicamente del exterior) con los intereses transnacionales. Los objetivos de ese tipo de desarrollo, como meta nacional, requirieron entonces de un proceso de acumulación acelerada, basada en el deterioro salarial y en el incremento de la tasa de ganancia, lo cual implicó un fuerte aparato represivo y una militarización de la sociedad (en ausencia de hegemonía) para alcanzar altas tasas de crecimiento.

Esto condiciona la dinámica del proyecto. Una vez establecido, por un lado, el crecimiento económico como objetivo del sistema y, por el otro, la utilización de medios privados para su promoción, la estrategia económica quedó definida. Ya que el crecimiento se logra por la inversión y la tecnología foráneas, en tanto que la función gubernamental es garantizarle un ambiente propicio para su desarrollo.

Queda claro entonces que no está en juego una política económica sino la implantación de un nuevo modelo económico, una nueva forma de funcionamiento y acumulación capitalista. Este nuevo patrón de reproducción del capital altamente especializado y que favorece a un núcleo reducido de la actividad económica ha respondido a tres propósitos esenciales: primero, revertir el proceso de acumulación y de relaciones sociales que había puesto en marcha el Estado de compromiso, cuyo proyecto hegemónico --por otra parte-- ya estaba en crisis; segundo, integrar plenamente a las formaciones sociales latinoamericanas a los procesos de integración mundial del capitalismo, con la expectativa de llegar a formar parte medular del sistema; y tercero, reiniciar un desarrollo capitalista fundado en un proceso de rápida concentración económica y de liquidación de las empresas no eficientes, lo que acrecenta la productividad nacional y le da competitividad en los mercados internacionales, así como en la reversion de las conquistas obreras que permite un aumento de la tasa de acumulación.

Este modelo económico no se traduce en consecuencia en un programa de desarrollo económico sino que se orienta hacia la modernización de la economía, pero para ello era preciso garantizar su funcionamiento sin los conflictos generados y agravados por las transformaciones que exigía el nuevo modelo. En este punto deriva la importancia del gobierno en estos regímenes, el que debe adoptar dos fines fundamentales, concomitantes e interdependientes: el desarrollo del Estado y la seguridad de la nación. Ambos objetivos que se mezclan y confunden, van unidos al proyecto nacional. El desarrollo supone una estrategia que no se puede separar de la estrategia que tiene como fin a la seguridad. De esa forma, el desarrollo es también parte de la guerra total.

El gobierno al mantener el orden político, económico y social fomenta el "desarrollo". El binomio desarrollo y seguridad resume y concretiza al proyecto nacional. El desarrollo --entendido como modernización-- tiende a la maximización de la eficiencia, al incremento de la producción y la riqueza material a través del empleo de un fuerte financiamiento y del uso de la tecnología más adelantada. La seguridad, por su parte, garantiza la paz social y la ausencia de amenazas al poder estatal. De esa manera, se creía, el organismo vivo que es el Estado, incrementaría su poder y le otorgaría el bienestar deseado a su población, lo que se traduciría en un permanente establecimiento social, la que por otra parte --y una vez eliminados los males que atentaban en contra de la unidad nacional-- garantizaría la

supervivencia armonica de la comunidad. En el fondo subyace pues la idea del bloque dominante para crear hegemonia y transformarse en bloque historico.

Sustentando el proyecto de desarrollo en la modernizacion capitalista de la economia y amenazada la seguridad por grupos que intentan revertir ese proyecto, los nuevos regimenes se definieron como anticomunistas. El comunismo era la unica fuerza capaz de oponerse al nuevo proyecto y el unico en poner en peligro la unidad nacional.

Fara el bloque en el poder, por tanto, una politica anticomunista se hacia necesaria.

Fero esta actitud se vinculaba tambien con relaciones mas amplias: el desarrollo del capitalismo internacional y la necesidad de los poderes transnacionales de integrar a las formaciones latinoamericanas en la nueva dinamica del sistema y en la nueva division internacional del trabajo, asi como la propia exigencia de una seguridad hemisferica entendida como la suma de la salvaguardia de la seguridad de cada una de las formaciones frente al embate comunista y por ende la garantia de que la seguridad de la potencia dominante en su zona de influencia inmediata estaria garantizada.

El anticomunismo estrecha aun mas a las formaciones latinoamericanas, mediante relaciones de dependencia, con Estados Unidos. Por otra parte, se incrementan los vinculos de subordinacion a la necesidad de adquirir mayor tecnologia y de hacer uso de mayor capital foráneo y, por la otra, la preservacion de la seguridad que deja de ser una lucha por fronteras geograficas para transformarse en una confrontacion por la defensa de fronteras ideologicas, una todavia mas el vinculo de America Latina con el Occidente "cristiano, libre y democratico", cuyo eje de irradiacion continua siendo Estados Unidos.

Esta nueva modalidad de seguridad nacional (que es ante todo anticomunista) se infiltró desde el exterior de las formaciones latinoamericanas y su destino ha sido preservarias como zona de influencia politica y economica. Así pues, el proceso de militarizacion de las sociedades de America Latina se entiende como parte de la actual fase de desarrollo de la economia capitalista y de los intereses politicos y militares del bloque occidental.

Debe tenerse presente -por otro lado- que gran parte de los sectores estrategicos y dinamicos desde el punto de vista del crecimiento y determinantes en la distribucion del ingreso en America Latina, se encuentran en manos de las transnacionales, por lo que un modelo economico basado en el libre mercado, en la

libertad de cambios y proclive a la inversión extranjera implica en buena medida que las fuerzas del mercado internacional y las empresas transnacionales determinen los patrones nacionales de acumulación, crecimiento y distribución del ingreso. Asimismo la guerra antisubversiva, destinada a eliminar el peligro comunista, le da el basamento necesario a tal modelo de acumulación acelerada y de dependencia.

La ideología de los regímenes de seguridad nacional parece contradictoria en el sentido que por un lado, se postula la libertad y la democracia y por otro, se ejerce una represión constante. La política se concibe como una acción militar en contra del enemigo de la nación que debe ser eliminado, en lugar de un medio de gobernar a través de la conciliación de intereses y la solución de conflictos. La existencia de un enemigo interno y permanente --real o imaginario-- es utilizada como factor de unidad nacional y motivo de represión.

En la concepción general del Estado, por su parte, se abandonan los viejos esquemas liberales que con lo menos de manera formal anteponían la persona humana y sus libertades a cualquier otro valor --incluida la seguridad nacional-- y adoptan otros en que la seguridad se ubica en la cima del ordenamiento jurídico. La constitución, por tanto, deja de ser la ley suprema y se le sustrae su carácter de permanente. Queda reducida a una norma contingente y provisional, tanto por los procedimientos de su reforma como por los valores que consagra.

El principio de legalidad deja de tener vigencia, ya que el acto ilegal puede ser siempre válido por la simple voluntad del mismo órgano que lo ejecutó y este se reserva el derecho y la posibilidad de crear o derogar a su entera discreción el marco jurídico de su actuación administrativa y política. El poder legislativo cede su lugar a un ejecutivo que se proclama como poder constituyente y soberano. Todo el conjunto de normas creadas durante el proceso de militarización de las sociedades de América Latina parecen orientadas a garantizar la realización de proyectos de los regímenes autoritarios y a defender --por ellas-- las relaciones socioeconómicas y políticas que sustentan. Más aun, la seguridad nacional trasciende el ámbito interno de las formaciones latinoamericanas y se consagra como valor jurídico supremo a nivel hemisférico. En la Convención Americana de Derechos Humanos se someten el derecho de reunión, la libertad de asociación y la suspensión de garantías individuales a los intereses de la seguridad nacional.

Identificar al enemigo y aniquilarlo convierte a la política en una continua emergencia. Los Estados latinoamericanos prevén en sus Constituciones, medidas excepcionales para contrarrestar graves y extraordinarias alteraciones del orden público que, por

lo mismo, escapan al ordinario control normativo creado para el manejo de la normalidad institucional, pero bajo la ideología de la seguridad nacional el Estado de excepción (Estado de sitio, Estado de emergencia o Estado de suspensión de garantías) se convierte en mecanismo ordinario de gobierno, pasa a ser la situación de normalidad, única desde la cual pueden ponerse en acción todas las potencialidades del Estado.

Como el Estado de Excepción permite al Estado prescindir de la Constitución, pone en evidencia la esencia del poder político. La excepción permanente determina que quien domina al Estado de excepción domina con ello al Estado, pero también manifiesta la falta de hegemonía del bloque dominante y con ello el uso indiscriminado de la coerción, sustraída de todo ordenamiento jurídico.

La militarización de las sociedades latinoamericanas tiene como objetivo reducir la movilización política popular. Cuanto mayor ha sido esta mas dura y mas larga ha sido la etapa represiva. No se intenta eliminar las causas del conflicto, sino suprimir al conflicto en sí, por lo que la fuerza y la violencia se convierten en los medios idóneos para realizar tan irracional propósito. Es pues una forma de gobierno y de organización del Estado que para alcanzar la unidad nacional no recurre ni al consenso, ni al derecho, sino que emplea de manera sistemática el terror.

El uso o la amenaza de uso por parte del Estado, de la violencia contra grupos o individuos, se convierte en parte integral del sistema político. La detención arbitraria, la encarcelación prolongada, el desaparecimiento de personas, el asesinato, los campos de concentración, las técnicas de interrogatorio a través de la tortura y los juicios simulados, intentan anular la disidencia y mantener el orden por medio del terror, se crea un ambiente de temor en el cual la población es desalentada a asociarse para actividades políticas y en organizaciones que de alguna u otra forma sean contrarias al status quo.

Con ello, sistemáticamente se destruyen las mentes y las individualidades, la libertad y la creatividad. No puede haber disidencia, quien se oponga es un enemigo de la nación. Solo la violencia puede proporcionar seguridad, porque solo la represión profunda y extendida puede garantizar el aniquilamiento de toda expresión disidente.

La publicitación cotidiana del castigo y la represión constituye la garantía de que el Terrorismo de Estado realice sus objetivos ya que, finalmente, su función no está tanto en la ejecución del acto como en la generación del temor de realizar cualquier acción que pueda ser considerada como subversiva. Para

alcanzar ese fin, el régimen extiende el sentimiento de inseguridad y, sobre todo, de vulnerabilidad absoluta del ciudadano común frente a los aparatos represivos. Así, la represión salvaje o sencillamente la amenaza de su uso, ha tenido como objetivo provocar el terror y con él la parálisis social. La justificación de esto es obvia, se trata de una guerra de la nación en contra de sus enemigos.

El uso sistemático de la represión, el Terrorismo de Estado, no es otra cosa sino una clara manifestación de ausencia de hegemonía de un bloque en el poder que aspira a ser dominante y que lucha por implantar un nuevo modelo de acumulación favorable a sus intereses. En ese sentido, el Terrorismo de Estado le sirve de valiosa balanza extraeconómica para la recomposición de los mecanismos de reproducción del capital; facilita una acumulación basada en la remuneración de la fuerza de trabajo muy por debajo de su valor histórico; permite, ya sin oposición, acelerar los procesos de concentración y sobre todo de centralización del capital; y crea un ambiente de aparente orden para el desenvolvimiento del modelo que se intenta implementar.

Pero es imprescindible entender que ese uso sistemático de la fuerza y la violencia está implicado y se justifica en una forma específica de conciencia: la conciencia de que la subversión permite el Terrorismo de Estado. Es en este punto donde no puede haber un acuerdo moral y tampoco un consenso político. Pero es ineludible creer que la causa última del Terrorismo de Estado, de la ruptura y quebranto de todos los derechos humanos, responde - por sobre otra cosa - a un fenómeno histórico de clase, a una defensa a ultranza de un Estado clasista.

La transformación de los ideales panamericanos de desarrollo integral se vieron trastocados en simples tácticas de defensa contra una ideología considerada como extraña a la naturaleza y espíritu continentales. La orientación militarista de la seguridad nacional olvidó lo que de primario tiene la soberanía para la seguridad de los Estados, pero también dejó el principio básico de que un adecuado sistema de defensa nacional solo puede sostenerse si se atiende previamente el complejo de factores socioeconómicos de los que depende en esencia la seguridad nacional. Pero ambas cosas suponen la socialización de las fuerzas armadas como actores e instrumentos que hicieron posible los regímenes de seguridad nacional-, integrándolas como elementos necesarios y útiles de la vida y la conducción nacionales, despojándolas de su carácter de represión al pueblo que las hace posibles, lo que se separa del proceso inverso de militarización del gobierno y de la sociedad.

Este ciclo de seguridad continental se mantuvo a pesar de una contradicción fundamental: proporcionaba seguridad a Estados Unidos, pero producía inseguridad a los pueblos latinoamericanos. Lo que Estados Unidos considera como su seguridad en el hemisferio ha dependido de que ningún poder externo y ninguna

disidencia interna socaven su dominio en la región. América Latina ha tenido que pagar el costo de tal premisa.

Pero como ya se ha dicho, la seguridad de América Latina no es necesariamente la seguridad de Estados Unidos. Los latinoamericanos también poseen intereses específicos de seguridad que defender. En el momento histórico actual no se puede ignorar como elemento fundamental de seguridad la integridad del territorio, pero la seguridad también implica el ejercicio efectivo de la soberanía y un poder de autodeterminación efectivo unidos a una convivencia hemisférica (y universal) de no intervención en los asuntos internos. Mas aun, la seguridad en América Latina se salvaguarda si se incorpora un componente socioeconómico: la posibilidad de resolver internamente -de una manera igualitaria y democrática- los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a cada una de las formaciones sociales latinoamericanas.

En la medida que la solución de asuntos internos sea confundida con asuntos de seguridad externa que deban de tener el concurso de actores foráneos, los pueblos de América Latina continuarán viviendo en la inseguridad. Un ciclo de seguridad continental concluye, el ciclo caracterizado por la militarización de los gobiernos y las sociedades latinoamericanas, pero persiste el fundamento básico para que la región continúe siendo considerada como parte de la seguridad de Estados Unidos. En tanto persista la herencia básica de la Segunda Guerra Mundial, América Latina parece destinada a pagar el costo de su situación geográfica. Los caminos están abiertos.

EPILOGO*

Esta década, la del final del siglo XX, es en el fondo la primera del siglo XXI. La aceleración de la dinámica mundial se ha activado al máximo, está quedando atrás la herencia de la Segunda Guerra Mundial. Todos los equilibrios de la última mitad de este siglo, basados en la opción política y militar de Yalta, todos los supuestos fronterizos y políticos de 1945 se vienen abajo. Más aún, las murallas ideológicas han caído y, posiblemente, la socialdemocracia se instale como nuevo eje político.

Hay, en efecto, un verdadero declinar de la influencia de la ideología en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El nuevo punto de vista soviético sobre las relaciones entre los Estados pone énfasis en la interdependencia y en la necesidad de cooperación entre el Este y el Oeste (1). La imagen de la URSS como un Estado represivo, con una tendencia hacia la dominación global está cambiando y con ello la idea en Estados Unidos de encontrarse amenazado. Las reformas de la Unión Soviética están transformando la percepción norteamericana del enemigo, el socialismo deja de ser la antítesis de los valores occidentales.

Por primera vez desde 1945, la distensión estrategico-militar va secundada por una distensión político-ideológica. En la década de los años sesenta y setenta las negociaciones se orientaban a la normalización de las relaciones Este-Oeste, dentro de los parámetros que establecía la Guerra Fría, y la ratificación del Pacto de Varsovia. Ahora se hacen intentos para establecer una relación entre la OTAN y el Pacto de Varsovia basada en nociones de reciprocidad o común seguridad. Ya no hay un dominio incuestionable de sólo dos Estados en la sociedad internacional, y es que la difusión acelerada de los nuevos centros de poder no tiene tanto que ver con la dispersión de los Estados aptos para practicar y triunfar en la guerra, sino con el reordenamiento espacial de las formaciones susceptibles de vencer en el plano económico (2).

(*) For sugerencia de la Lic. Rosa Santiago, sindical de este tesis, el presente epílogo tiene como finalidad esclarecer las perspectivas del fenómeno en estudio, a la luz de los últimos y vertiginosos cambios mundiales.

(1) Cfr. Phil Williams, "US-Soviet relations: beyond the Cold War?" *International Studies Quarterly*, vol. 32, 1988, pp. 284-286.

(2) V. Paulo Roberto de Almeida, "Neo-Détente e Perestroika. Agendas para o futuro", *Revista Brasileira de Política Internacional*, vol. 24, 1988, núm. 1, Vol. VI, pp. 66 y 69.

Así pues, al haber otras amenazas a su bienestar nacional, Estados Unidos y la Unión Soviética están dejando de preocuparse uno de otro. Se está dando el cambio de un conflicto global de ideología y principios a una competencia por intereses concretos, ello explica en mucho las mutaciones actuales.

La Unión Soviética, atrapada por las contradicciones entre el debilitamiento de su economía y el gigantismo de sus compromisos político-militares ha elegido, como solución, la reducción de sus áreas de influencia.

Por su parte, Estados Unidos logró que la economía mundial cayera en el desequilibrio más desastroso del capitalismo, entre el ahorro (externo) y el gasto (interno). Durante este proceso, ese país dejó de ser el mayor acreedor en el mundo y se transformó en el mayor deudor y es que, a diferencia de Japón, Estados Unidos se endeudó con el exterior para el consumo no para la inversión.

La propia Administración Reagan, en sus últimos meses, declaró públicamente que la "crisis de recursos para las relaciones internacionales" podría significar "el fin del liderazgo mundial de los Estados Unidos". Por ello, Peter Peterson en el más destacado artículo escrito sobre Estados Unidos en 1988 afirmó que "tal vez se recordarán los años ochenta y noventa como el momento crucial de suerte de Estados Unidos: un periodo de transición en el que tomamos la vía británica hacia una economía de segunda categoría" (3).

En ese sentido, Washington se preocupa cada vez más por su propia economía y por la amenaza japonesa que le ha infringido serios reveses, así como por los problemas de las drogas, que por la amenaza soviética y su poder de destrucción nuclear (4).

El cambio en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética ha afectado directamente a todas las regiones del mundo, excepto una hasta ahora, América Latina.

Esto es así porque aún persiste en las relaciones interamericanas el esquema de zonas de influencia que, inclusive en términos estratégicos y militares actuales, parece obsoleta, y

(3) "A la mañana siguiente. (Quién pagará la cuenta del reaganismo).", *Revista* y num. 128, p. 31.

(4) Cfr. Joseph S. Nye, "Arms control after the cold war", *Foreign Affairs*, vol. 67, no. 1, p. 11.

que hace de la fuerza la motivación principal de la conducta en dichas relaciones. Esa perspectiva ha alentado la intervención como instrumento de dominación y ha negado el pluralismo en beneficio de una supuesta seguridad nacional de Estados Unidos.

Sin embargo, en la medida en que se relajen las tensiones globales, se reducirán las presiones sobre la seguridad regional, lo que no impedirá que Washington siga interviniendo en los asuntos internos de América Latina e incluso sostendrá su hostilidad frente a ciertas reformas en el hemisferio. Pero ya no podrá hacerle invocando preocupaciones geopolíticas y de seguridad en contra de la Unión Soviética, porque en el marco de la distensión actual, el Kremlin dejó de representar una alternativa de apoyo a los movimientos nacionalista latinoamericanos y en consecuencia, también, de oposición frente al dominio estadounidense.

El retraimiento soviético: lo induce de la actual actitud cubana, en oposición a los grandes proyectos revolucionarios de los años sesenta: las dificultades del sandinismo para consolidarse en el poder; la democratización latinoamericana con partidos o fracciones de partidos alejados cada vez más del discurso populista y de políticas económicas estatistas; y, la certeza de que no habrá un movimiento generalizado de los países de América Latina a favor del repudio de la deuda externa, lo que sin duda tendría serias consecuencias para los principales bancos estadounidenses, han motivado una mayor confianza de Estados Unidos hacia su seguridad en el hemisferio.*

Se cierra, en efecto, un ciclo de seguridad continental (lo que era evidente desde la caída del régimen militar brasileño y inviabilidad de la radicalización de la revolución nicaraguense). El último de los regímenes militares de seguridad nacional que aún subsistía al cierre del periodo en estudio, se ha derrumbado: ahora Chile vuelve a la democracia mediante una forzada y multipartidaria coalición civilista, Nicaragua, por su parte, no podrá hacer frente a la enorme presión en todos los ámbitos que Estados Unidos le ha impuesto, la revolución -por tanto- no será capaz de dar los resultados que los sandinistas deseaban y en poco tiempo, quizás, solo sea un buen recuerdo. Los movimientos guerrilleros centroamericanos dejan ya de ser viables. Toda América Central mira y vota hacia la derecha. Las políticas norteamericanas parecen dar los resultados deseados por Washington. En consecuencia, al

(*) Esto se refleja en la actitud de la Administración Bush hacia América Latina, particularmente para América Central. Incluso Abraham Lowenthal, uno de los "opinión makers" norteamericanos más destacados, ha titulado a un capítulo de su último libro "La inseguridad a la confianza".

desaparecer el hasta ahora supuesto peligro geopolítico para Estados Unidos (5), la región volverá a la acostumbrada indiferencia norteamericana, que únicamente se acerca a América Latina en tiempos de crisis internacional, que ponga en peligro el

(5) Cfr. Humberto Garza Elizondo, "La distensión internacional: sus efectos sobre México", *Revista Mexicana de Sociología* (México, jul-sep de 1989, num. 24, pp. 23 y 24.

B I B L I O G R A F I A

- BALL, George. "Deterioro de las relaciones exteriores norteamericanas" en ACKLAND, Len y Steve McGuire (coords.). La edad nuclear. Tr. del inglés por Juan Utrilla. UNAM-FCE, México, 1987 (Entre la guerra y la paz s/n). pp. 260-267.
- BARAN, Paul. Reflexiones sobre la Revolución Cubana. Merayo. Buenos Aires, 1973. 129 pp.
- BARNET, Richard. La economía de la muerte. Tr. del inglés por Juana Robles, Siglo XXI, México 1976. 191 pp.
- BELTRAN, Virgilio Rafael et al. El papel político y social de las Fuerzas Armadas en América Latina. Monte-Avila, Caracas, 1970 (Prisma s/n). 350 pp.
- BERMUDEZ, Lilia. Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica. Siglo XXI, México, 1987. 229 pp.
- BOILS, Guillermo. Los militares y la política en México (1915-1974). - El Caballito, México, 1975. 190 pp.
- BRIONES, Alvaro. Ideología del fascismo dependiente (Estado y "Seguridad Nacional"). Edicol, México, 1978 (Filosofía y liberación latinoamericana, 19). 205 pp.
- CANNABRAVE, Paulo. Militarismo e imperialismo en Brasil. Tr. del portugués por Elías Condal. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1970 (Mundo actual s/n). 213 pp.
- CASTRO MARTINEZ, Pedro Fernando. Fronteras abiertas. Expansionismo y geopolítica en el Brasil contemporáneo. Siglo XXI, México, 1980 (Sociología y política s/n). 205 pp.
- CAVALLA ROJAS, Antonio (comp.). Antología. Geopolítica y Seguridad Nacional en América. UNAM, México, 1979 (Lecturas Universitarias, 31) 475 pp.
- Estados Unidos, América Latina: Fuerzas Armadas y defensa nacional. UAS, Culiacán (Méx.), 1980 (Huestro continente, 4). 178 pp.
- Los militares en América Latina. UNAM, México, 1983 (CELA. Avance de investigación, 52). 95 pp.
- COMBLIN, Joseph. Le pouvoir militaire en Amérique Latine. L'ideología de la Sécurité Nationale. Jean-Pierre delarge éditeur, París, 1977. 229 pp.

- CONNELL-SMITH, Gordon. Los Estados Unidos y la América Latina. FCE, México, 1977. 333 pp.
- El Sistema Interamericano. Tr. del inglés por Nelly Wolf, FCE, México, 1982 (Política y derecho s/n). 487 pp.
- DAVILA ALDAS, Francisco. Las luchas por la hegemonía y la consolidación política de la burguesía en el Ecuador (1972-1978). UNAM, México, -- 1984 (FCPyS-Estudios, 69). 247 pp.
- DOS SANTOS, Theodorico. Socialismo o fascismo. Edicol, México, 1978 (Filosofía y liberación latinoamericana, 18). 337 pp.
- EMMERICH, Gustavo Ernesto. Votos y botas. Hegemonía y dominación en Argentina, Brasil y Venezuela. UAEM, Toluca (Méx.). 1986 (Problemas de América Latina, 3). 226 pp.
- FAGEN, Richard (selecc.). Estado y clases sociales en las relaciones Estados Unidos-Latinoamérica. CIDE/FCE, México, 1984 (El trimestre económico. Lecturas, 54). 475 pp.
- FURTADO, Celso. La economía latinoamericana. Formación histórica y problemas contemporáneos. 16a. ed., Tr. del portugués por Angélica Gimpele, Siglo XXI, México, 1982 (Economía y demografía s/n). 351 pp.
- GASPAR, Gabriel (comp.). La militarización del Estado latinoamericano. - (Algunas interpretaciones). UAM-I, México, s/f (Teoría y sociedad, 6). 234 pp.
- GERTZ MANERO, Alejandro (selecc.). "América Hispana" en Antología de -- Jonh F. Kennedy. Costa-Amic, México, 1968 (Pensamiento de América, 8). pp. 129-180.
- GONZALEZ CASANOVA, Pablo (coord.). América Latina; historia de medio siglo. 3a. ed., Siglo XXI, México, 1982 (Historia s/n), 2 ts. VII + 552 pp., VIII + 580 pp.
- No intervención, autodeterminación y democracia en América Latina. Siglo XXI, México, 1983 (Sociología y política s/n). IX + 338 pp.
- Los militares y la política en América Latina. Océano, México, 1988 114 pp.
- HODGES, Donald S. The Latin American Revolution: Politics and strategy from APRO-marxismo to guevarism. William Morrow & Co., Nueva York, 1974. 261 pp.
- IAHNI, Octavio. El colapso del populismo en Brasil. Tr. del portugués por Obdulia Munfio, UNAM, México, 1974 (FCPyS-Estudios, 39). 225 pp.
- La formación del Estado populista en América Latina. Era, México, 1984 (Popular, 30). 177 pp.

- JONAS, Susanne. "The Nicaragua Revolution and the reemerging Cold War" en Varios autores. *Nicaragua in revolution*. Praeger, Nueva York, 1982 pp. 375-389.
- KANTER, Arnold. *Defensa política. A budgetary perspective*. University of Chicago Press, Chicago, 1979. 152 pp.
- KAPLAN, Marcos. "Lo viejo y lo nuevo en el orden político mundial" en -- CASTAÑEDA, Jorge (comp.). *Derecho económico internacional*. FCE, México.
- KENNAN, George. "Las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos: una retrospectiva" en *Engaño nuclear*. Tr. del inglés por -- Adriana Sandoval. UNAM-FCE, México, 1987 (Entre la guerra y la paz s/n). pp. 41-70.
- KLARE, Michael y Nancy Stein. *Armas y poder en América Latina*. Era, México, 1978 (Popular, 61). 251 pp.
- LOZOYA, Jorge Alberto. "La política exterior de México en cuestiones militares" en *El ejército mexicano*. 2a. ed. corr. y aum., El Colegio de México, 1976 (Jornadas, 65). pp. 86-102.
- MAIRA, Luis (selecc.). *Estados Unidos. Una visión latinoamericana*. CIDE FCE, México, 1984 (El trimestre económico. Lecturas, 53). 509 pp.
- MERLE, Marcel. *Sociología de las Relaciones Internacionales*. Alianza, -- Barcelona, 454 pp.
- MONTEFORTE TOLEDO, Mario. *La solución militar a la peruana, 1968-1970*. UNAM, México, 1973. 182 pp.
- MORENO PINO, Ismael. *Orígenes y evolución del sistema interamericano*. -- SRE, México, 1977 (Archivo histórico diplomático mexicano, 9). -- 428 pp.
- NUECHTERLEIN, Donald. *Los intereses nacionales de Los Estados Unidos en un mundo cambiante*. Roble, México, 1975. 243 pp.
- OJEDA, Mario. *México: el surgimiento de una política exterior activa*. SEP-Cultura, México, 1986 (Foro 2000, s/n) 229 pp.
- ORGANIZACION de los Jefes del Estado Mayor Conjunto. *La postura militar de Estados Unidos para 1987*. CLEC, México, 1986. 104 pp.
- PALERMO, Alfredo. *Estudo de problemas brasileiros*. 3a. ed., LISA-livros irradiantes, Sao Paulo, 1979. 245 pp.
- PARKER, Phillis R. *Brazil and the quiet intervention, 1964*. University of Texas Press, Austin, 1979 (Texas Panamerican series s/n). 107 pp.

- PELLICER, Olga y Richard Fagen (seleccs.). Centroamérica: futuro y opciones. FCE, México, 1983 (El trimestre económico. Lecturas, 50). 243 pp.
- PIERRE-CHARLES, Gérard. Génesis de la Revolución Cubana. 2a. ed. corr. y aum., Siglo XXI, México, 1978. 180 pp.
- El Caribe contemporáneo. 2a. ed., Siglo XXI, México, 1983. 405 pp.
- RAMA, Carlos. La imagen de los Estados Unidos en América Latina. De Simón Bolívar a Salvador Allende. SEP-DIANA, México, 1981 (SEP setentas, 226). 219 pp.
- RODRIGUEZ, Carlos Rafael. Cuba en tránsito al socialismo (1959-1963). Siglo XXI, México, 1978 (Sociología y política s/n). 233 pp.
- ROUQUIE, Alain (comp.). Argentina, hoy. Siglo XXI, México 1982 (Historia inmediata s/n). 279 pp.
- SALAZAR MALLEN, Rubén. El pensamiento político en América. JUS, México, - 1973. 2 ts., 432 pp.
- SANDOVAL, Isaac. Las crisis políticas latinoamericanas y el militarismo. 4a. ed., Siglo XXI, México, 1981 (Sociología y política s/n). 219 pp.
- SAXE-FERNANDEZ, John. Proyecciones hemisféricas de la Pax Americana. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1971 (América-problemas, 4). 195 pp.
- De la seguridad nacional. Grijalbo, México, 1977 (Colección 70, -- 149) 187 pp.
- SCHATAN, Jacobo. América Latina. Deuda externa y desarrollo: un enfoque heterodoxo. El Día en libros. México, 1985. 186 pp.
- SENGHAAS, Dieter. Armamento y militarismo. Tr. por Félix Blanco, Siglo - XXI, México, 1974 (Sociología y política s/n). 318 pp.
- SOUZA, Herbert. El capitalismo mundial y el militarismo en América Latina. Facultad de Economía-UNAM, México, s/f (América Latina, 1) 142 pp.
- SPANIER, John y Eric Uslaner. How american foreign policy is made. 2a. ed R. Krieger Publishing, Nueva York, 1978, 179 pp.
- TAPIA VALDES, Jorge. El terrorismo de Estado. La Doctrina de la Seguridad Nacional en el Cono Sur. Nueva Sociedad-Nueva Imagen, Mexico, 1980 283 pp.

- TIRADO, Manlio. "El contexto internacional de la revolución sandinista" en HARRIS, Richard y Carlos M. Vilas (comps.). *La Revolución en Nicaragua*. Era, México, 1985 (El hombre y su tiempo s/n). pp. 315-330.
- TORLONI, Hilário. *Estudo de problemas brasileiros*. 3a. ed., pionera-MEC, Sao Paulo, 1973. 357 pp.
- VARIOS AUTORES. *Diez años de insurrección en América Latina*. t. II, Ed. Prensa Lationamericana, Santiago de Chile, 1971. 218 pp.
- Radicalización y golpes de Estado en América Latina*. UNAM, México, 1973 (FCPyS- Estudios, 36) 216 pp.
- American Defense Policy*. 4a. ed., John Hopkins University Press, - Baltimore, 1977. 626 pp.
- Evolución de la organización político-constitucional en América Latina (1950-1975)*. UNAM, México, 1979 (Estudios comparativos-Derecho latinoamericano, 17), t. 2. 467 pp.
- El populismo en América Latina*. UNAM, México, 1983 (Nuestra América 7). 135 pp.
- El nacionalismo en América Latina*. UNAM, México, 1984 (Nuestra América, 8). 153 pp.
- Centroamérica. Crisis y política internacional*. 2a. ed., Siglo XXI, CECADE-CIDE, México, 1984. 317 pp.
- Estado y política en América Latina*. 4a. ed., Siglo XXI, México, 1986 (Sociología y política s/n). 359 pp.
- Confronting revolution. Security through diplomacy in Central America*. Pantheons Books, Nueva York, 1986. 368 pp.
- Centroamérica: una historia sin retoque*. El Día en Libros/Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, México, 1987. 298 pp.
- Seguridad en el Hemisferio Occidental*. Antología. CLEE, México, - 1988 (mimeo). Foliación no consecutiva.

PUBLICACIONES PERIODICAS.

- ALMEYDA, Clodomiro. "Chile: más allá de la memoria" en *Universidad de México, Revista de la UNAM (México)*, septiembre de 1985, núm. 416, vol. XL. pp. 3-9.

- ALPONTE, Juan María. "Uruguay: la larga marcha hasta ponerse de pie", *La escena internacional*, secc. de El Día (México), 2 de diciembre de 1984. p. 8
- "Brasil: el cambio presidencial en la crisis", *La escena internacional*, secc. de El Día (México), 17 de marzo de 1985. p. 8
- "Alfonsín: un cambio en la historia", *La escena internacional*, -- secc. de El Día (México), 24 de marzo de 1985. p. 8
- ANGELL, Alan. "El gobierno militar peruano de 1968 a 1980: el fracaso de la revolución desde arriba" en *Foro Internacional 97* (México), julio-septiembre de 1984, núm. 1, vol. XXV. pp. 33-56.
- AYLETT, David. "Ejército y democracia en el Cono Sur", *Suplemento de aniversario de Unomásuno* (México), 14 de noviembre de 1986, núm. 3243, año X. p. XXI.
- BARCHFIELD, John. "Populismo, autoritarismo y desarrollismo", *El Gallo Ilustrado*, sem. de El Día (México), 24 de marzo de 1985, núm. 1187, pp. 12-16.
- BARTHELEMY, Françoise. "Tras una larga dictadura: el renacimiento de Uruguay. Un país a reconstruir", *Le Monde Diplomatique en Español* (México), marzo de 1985, núm. 75, año VII. pp. 20-21.
- BENZA PFLUCKER, Manuel. "Proceso político peruano: algunos rasgos de su -- evolución política", *Nueva Sociedad* (Caracas), noviembre-diciembre de 1986, núm. 27. pp. 51-62.
- BUNDY, William. "The national security process. Plus ça change...?", *International security* (Cambridge Ma.). winter 1982-1983, núm. 3. vol. 7. pp. 94-109.
- CASTRO ESCUDERO, Teresa. "Los procesos de democratización en América del Sur: el caso de Chile" *Testimonios y Documentos*, secc. de El Día (México), 29, 30 y 31 de mayo de 1986. pp. 20, 20 y 20.
- CARDOSO, José Pedro. "La herencia militar y los desafíos de la democratización en Uruguay" (entrevista hecha por Alejandro Witker), *El Gallo Ilustrado*, sem. de El Día (México), 31 de marzo de 1984, núm. 1188. pp. 14-15.
- COCHRANE, James. "Reconocimiento de gobiernos inconstitucionales: la política de la Administración Johnson hacia América Latina", *Foro Internacional 43* (México), enero-marzo de 1971, núm. 3, vol. XI. pp. 481-489.
- DOMINGUEZ, Jorge. "Los conflictos Internacionales en América Latina y la amenaza de guerra", *Foro Internacional 97* (México), julio-septiembre de 1984, núm. 1, vol. XXV. pp. 1-13.

- EMMERICH, Gustavo E. "Revolución y re-democratización en el continente", *Le monde Diplomatique en Español* (México), septiembre de 1984, núm. 69. año IV. p. 41.
- FARNSWORTH, Elizabeth, "Chile: what was the U.S. role? More than admitted", *Foreign Policy* (Nueva York), Fall 1974, núm. 16, pp. 127-141
- FERRER, Aldo. "Una propuesta para pagar la deuda y defender la soberanía" *Comercio Exterior* (México), noviembre de 1986, núm. 11, vol. 36. pp. 978-983.
- FONTAINE et. al. (Comité de Santa Fe). "Las relaciones interamericanas: - escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos", *Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: perspectiva latinoamericana* (México), CIDE, 1er. sem. de -- 1981, núm. 9. pp. 181-214.
- FORO DE NEXOS. "La democracia en América Latina". *Nexos* (México), mayo de 1987, núm. 113, año X. pp. 44-55.
- FRANCIS, Michael J. "La ayuda económica de Estados Unidos a América Latina como instrumento de control político", *Foro Internacional* 48 (México). abril-junio de 1972, núm. 4. vol XII. pp. 433-452.
- GARRETON, Manuel. "El plebiscito chileno", *Nexos* (México), octubre de -- 1988, núm. 130, año XI. pp. 9-14.
- GONZALEZ GARTLAND, Carlos. "Argentina: derechos humanos, doctrina de la seguridad nacional y política militar", *Le Monde Diplomatique en Español* (México), diciembre de 1985, núm. 84, año VII. pp. 25 y 32.
- GONZALEZ SELANIO, Víctor. "El largo viaje de un ejército hacia la noche ... La experiencia chilena", *Nueva Sociedad* (Caracas), enero-febrero de 1986, núm. 81. pp. 59-68.
- GRANADOS CHAVERRI, Carlos. "Geopolítica en Centroamérica", *Cuadernos Políticos* (México). Era, abril-junio de 1986, núm. 46. pp. 75-89.
- HELLER, Claude. "Las relaciones militares entre Estados Unidos y América Latina: un intento de evaluación", *Nueva Sociedad* (Caracas), noviembre-diciembre de 1976, núm. 27. pp. 17-31.
- INSULZA, José Miguel. "Centroamérica: el mito de la seguridad", *Nexos* -- (México), junio de 1987, núm. 114, año X, pp. 37-41.
- KLARE, Michael. "La nueva doctrina de intervención norteamericana. Los - conflictos de baja intensidad", *Le Monde Diplomatique en Español* - (México), marzo de 1986, núm. 87, año VII. pp. 1 y 3.
- KRAUSS, Clifford. "Revolution in Central America?", *Foreign Affairs* (Nueva York), 1986, núm. 3, vol. 65, pp. 564-581.

- LAMBERG, Roberto. "La reformación de la línea castrista desde la Conferencia Tricontinental", *Foro Internacional* 31 (México), enero-marzo de 1968, núm. 3, vol. VII. pp. 278-301.
- LARMAN, Wilson. "Estados Unidos y la guerra civil dominicana. El reto a las relaciones interamericanas", *Foro Internacional* 30 (México), octubre-diciembre de 1967, núm. 2, vol VII. pp. 155-178.
- LEIS, Raúl. "El comando sur: poder hostil". *Nueva Sociedad* (Caracas), enero-febrero de 1986, núm. 81. pp. 77-88.
- LEOGRANDE, William. "Una nota crítica sobre la política exterior de -- Ronald Reagan", *Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: perspectiva latinoamericana* (México), CIDE, 1er. sem. de 1981, núm. 9. pp. 141-156.
- LOWENTHAL, Abraham. "La Alianza para el Progreso en retrospectiva. Hacia mejores políticas norteamericanas para la década de 1970", *Foro Internacional* 40 (México), abril-junio de 1970, núm. 4, vol. X, pp. 392-406.
- "Ronald Reagan y Latinoamerica: enfrentamiento con la hegemonía declinante", *Foro Internacional* 93 (México), julio-septiembre de 1983 núm. 1, vol. XXIV. pp. 21-49.
- LOZANO, Lucrecia y Raúl Benítez. "De la contención pasiva a la guerra de baja intensidad en Nicaragua", *Cuadernos Políticos* (México), Era, julio-septiembre de 1986, núm. 47. pp. 75-88.
- MAGGILOLO, Oscar. "Uruguay, tres años de dictadura", *Nueva Sociedad* (Caracas), noviembre-diciembre de 1976, núm. 27. pp. 74-84.
- MENGES, Constantine. "Los Estados Unidos y América Latina en los ochenta" *Foros Internacional* 88 (México), abril-junio de 1982, núm. 4, vol. XXII. pp. 425-446.
- MONETA, Carlos. "Fuerzas Armadas y gobierno constitucional después de las Malvinas: hacia una nueva relación civil-militar", *Foro Internacional* 102 (México), octubre-diciembre de 1985, núm. 2, vol. XXVI. pp. 190-213.
- MORALES, Minerva. "Política económica de los Estados Unidos en la América Latina", *Foro Internacional* 15 (México), enero-marzo de 1964, núm. 3, vol. IV. pp. 395-428.
- MUÑOZ, Heraldó. "La seguridad como fuente de incertidumbre", *El Gallo - Ilustrado*, sem. de el Día (México), 13 de septiembre de 1987, núm. 1316. pp. 8-11.
- NINA, Andrés. "La Doctrina de la Seguridad Nacional y la integración latinoamericana", *Nueva Sociedad* (Caracas), noviembre de 1976, núm. 27 pp. 33-50.

- ODEEN, Philip. "Organizing for National Security", *International Security* (Cambridge Ma.), summer 1980, núm. 1, vol. 5. pp. 111-129.
- PAZ SNOPEK, Pedro. "La crisis del mundo capitalista y la crisis monetaria internacional: los problemas monetario-financieros del Tercer Mundo", *Investigación Económica* (México), UNAM, abril-junio de 1981 núm. 156. pp. 177-227.
- RECORD, Jeffrey. "Jousting with Unreality. Reagan's military strategy", *International Security* (Cambridge Ma.) winter 1983-1984, núm. 3, vol. 8. pp. 3-18.
- REYES ECHANDIA, Alfonso. "Legislación y Seguridad Nacional en América Latina", *Testimonio y documentos*, secc. de El Día (México), 18 y 19 de noviembre de 1985. pp. 12 y 12.
- RIAL, Juan. "Las FF AA como partido político sustituto. El caso uruguayo" *Nueva Sociedad* (Caracas), enero-febrero de 1986, núm. 81. pp. 105-116
- ROGERS, William. "The United States and Latin America", *Foreign Affairs* (Nueva York), 1984, núm. 3, vol. 63. pp. 560-580.
- ROSENFELD, Stephen. "The Reagan Doctrine. The guns of July", *Foreign Affairs* (Nueva York), spring 1986, núm. 4, vol. 64. pp. 698-714.
- ROSENKRANZ, Hernán. "Actitudes norteamericanas hacia la Junta Militar Chilena: continuidad y cambio. 1973-1978." *Foro Internacional* 85 (México), julio-septiembre de 1981, núm. 1, vol. XXII. pp. 70-89.
- SLATER, Jerome. "Estados Unidos y las revoluciones en el Caribe. El mito de los intereses vitales". *Foro Internacional* 102 (México), octubre diciembre de 1985, núm. 2, vol. XXVI. pp. 267-283.
- SANCHEZ, Nestor. "The Communist Threat", *Foreign Policy* (Nueva York), - fall 1983, núm. 52. pp. 43-49.
- SAU AGUAYO, Julio. "Falacia jurídica para burlar la democracia: los créditos stand by o la forja de las cadenas", *Le Monde Diplomatique en Español* (México), septiembre de 1986, núm. 91, año VIII. p. 31.
- SELSER, Gregorio. "Conflictos de baja intensidad: una teorización de Caspar W. Weinberger sobre el terrorismo de Estado", *Situaciones y enigmas*, secc. de El Día (México), 11 de mayo de 1986. p. 14.
- "Una 'doctrina' Reagan para las guerras insurgentes: conflicto de baja intensidad y terrorismo de Estado", *Situaciones y enigmas*, secc. de El Día (México), 18 de mayo de 1986. p. 12.
- "El terrorismo de Estado aplicado con la óptica de la 'guerra contrarrevolucionaria prolongada' de Reagan", *Situaciones y enigmas*, secc. de El Día (México), 25 de mayo de 1986. p. 12.

"Conflicto de baja intensidad, el nuevo nombre para la vieja guerra de contrainsurgencia: Shultz", *Situaciones y enigmas*, secc. de - El Día (México), 1 de junio de 1986. p. 14.

SECRETARIA de Estado de los Estados Unidos. "sostenimiento de una política congruente en América Central: a un año del informe de la Comisión Bipartidista Nacional", *Informe Especial* (Washington, D.C.). núm. 24, abril de 1985. 20 pp.

SEPULVEDA, César. "Reflexiones sobre la Alianza para el Progreso", *Foro Internacional* 29 (México), julio-septiembre de 1987, núm. 1, vol. -- VIII pp. 68-79.

SULE, Anselmo, "Primero democracia después el pueblo decidirá", *El Gallo Ilustrado*, secc. de El Día (México), 7 de septiembre de 1986, núm. 1263. p. 3.

TELLO DIAZ, Carlos. "El regreso de el Che", *Nexos* (México), octubre de -- 1987, núm. 118, año X. pp. 16-19.

TONELSON, Alan. "The real national interest", *Foreign Policy* (Nueva York), winter 1985-86, núm. 61. pp. 49-72.

VARIOS AUTORES. "El Difícil tránsito hacia la democracia", *Estudios Políticos* (México), Centro de Estudios Políticos de la FCPyS-UNAM, julio-septiembre de 1984, núm. 3.

VILLARREAL, René. "Monetarismo e ideología. De la mano invisible a la mano militari", *Comercio Exterior* (México), octubre de 1982, núm. 10. vol. 32. pp. 1059-1070.

WEINBERGER, Caspar. "U.S. Defensa Strategy", *Foreign Affairs* (Nueva York), spring 1984, núm. 4, vol. 64. pp. 657-697.

WIARDA, Howard. "Misreading Latin America-again", *Foreign Policy* (Nueva York), winter 1986

WOERNER, Federick. "Discurso ante la comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Subcomisión de Defensa, 4 de febrero de 1988", *El Perfil de la Jornada*, secc. de La Jornada (México), 21 de septiembre de 1988. pp. III-IV.